

QUINTO INFORME DE OBSERVACIÓN:

Efectos Tempranos en la Democracia
Durante el Proceso de Dejarón
de Armas en Colombia
2017

TENDENCIAS DEL POSACUERDO EN CLAVE DE CONDICIONES Y GARANTÍAS POLÍTICAS Y DE SEGURIDAD



QUINTO INFORME DE OBSERVACIÓN:

Efectos Tempranos en la Democracia
Durante el Proceso de Dejarón
de Armas en Colombia
2017

TENDENCIAS DEL POSACUERDO EN CLAVE DE CONDICIONES Y GARANTÍAS POLÍTICAS Y DE SEGURIDAD



TENDENCIAS DEL POSACUERDO EN CLAVE DE CONDICIONES Y GARANTÍAS POLÍTICAS Y DE SEGURIDAD

Misión de Observación Electoral MOE Colombia
Secretariado Nacional de Pastoral Social. Caritas Colombia
Fundación Ciudad Abierta
Diciembre de 2017

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL- FUNDACIÓN CIUDAD ABIERTA

Organizaciones que hicieron parte de este informe:

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC
Universidad del Tolima
Grupo de Investigación "Derecho Público" Adscrito a la Universidad de Tolima
Regional MOE Tolima
Corporación Centro de Estudios, Sistematización y Evaluación de Procesos Sociales Regionales del Sur CERSUR
Pastoral Social Regional del Suroriente Colombiano
Pastoral Social Diócesis de Granada
Pastoral Social Diócesis San José del Guaviare
Corporación Secretariado Diocesano de Pastoral Social-Caritas Arauca
Programa de Desarrollo y Paz del Cesar
Diócesis de Quibdó
Diócesis de Montelíbano Córdoba
Pastoral Social Diócesis de Tibú
Pastoral Social Diócesis de Palmira
Pastoral Social Valledupar
Observatorio de Realidades Sociales Arquidiócesis de Cali
Programa Fortaleciendo
Misión de Observación Electoral MOE Colombia
Secretariado Nacional de Pastoral Social- Caritas Colombia
Fundación Ciudad Abierta

Equipo Nacional MOE

Alejandra Barrios Cabrera

Secretariado Nacional de Pastoral Social- Caritas Colombia

Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria
Rosa Inés Floriano Carreta
Alejandro Pérez Suárez

Fundación Ciudad Abierta

Alfagma Sánchez Torres
Jennifer Rengifo Rodríguez
Jesús Darío González Bolaños

Corrección de Estilo

Jennifer Rodríguez Henao

Diseño y diagramación

José Jairsinio Caicedo- Angélica Lorena Luna

ISBN obra independiente 978-958-56093-8-9
El presente documento se imprimió en de 2017

Realizado por:



Con el apoyo de:



"Esta publicación fue posible gracias al apoyo de La Embajada de Suecia y Open Society Foundations. Las opiniones expresadas en este material no representan a ninguno de los que financian esta publicación"

CONTENIDO

Presentación	6
Introducción	8
I. Una Aproximación a la Implementación de los Acuerdos desde la Perspectiva de la Captura y Cooptación del Estado.	11
1.1 El Debate Público y la Marcha de los Acuerdos, un Asunto de Sensibilidad Territorial.	13
1.2 La Interrogación a un Proceso en Curso con Alcances Históricos.	16
1.3 Una Aproximación a los Desplazamientos en Marcha.	17
1.4 Esquema de comprensión del Proceso Actual de Implementación de los Acuerdos Para la Superación del Conflicto Social y Armado Colombiano.	19
2. Las Matrices de Conflicto en el Contexto de la Implementación de los Acuerdos: Ilegalidad y Prácticas de Vulnerabilidad en los Territorios.	21
2.1 Las Tensiones Propias de las Disputas Económicas sobre los Territorios.	22
2.1.1 ¿Y de la tierra qué?	23
2.1.2. La paz y la minería.	27
2.1.3. Las vicisitudes que produce el narcotráfico.	28
2.1.4. Informalidad, pobreza y reincorporación.	29
2.2 La Hegemonía de un Capital Colectivo Perverso.	30
2.2.1 Redes sociales y captura por la ilegalidad.	30
2.2.2. La informalidad económica y población disponible:	32
2.2.3. La expresión colectiva y los cultivos ilícitos: en contravía de la potencia asociativa de la población rural.	33
2.3 Las Inercias de la Guerra en la Vida Local y Regional.	35
2.3.1 La JEP en discusión por los caminos regionales.	35
2.3.2. El cese bilateral con el ELN y la búsqueda del sometimiento de bandas criminales: la esperanza de una paz completa.	36
2.4 La Tendencia Cultural y el Silencio Frente a la Reconciliación.	38
2.4.1. La adaptación a los actores armados.	38
2.4.2. El manejo de emociones y el desestimulo de la reconciliación.	39
2.5. Síntesis Sobre los Rasgos Territoriales de la Implementación.	40

3. La Organización Social en el Contexto de la Implementación. El reto de la participación social.	43
3.1 La Organización como el Capital Social de la Implementación de los Acuerdos.	44
3.2 Las Tensiones Organizativas y la Participación en la Implementación.	48
3.3 Los Vacíos y Urgencias En Las Culturas Organizacionales.	51
3.4 El Acceso a Recursos un Factor de Autonomía o Cooptación.	53
3.5 Síntesis Sobre las Tensiones y Desplazamientos en el Campo de la Organización Social.	55
4. Las Transfiguraciones de la Cultura Clientelar y la Corrupción en el Posconflicto.	57
4.1 Las Agencias Económicas Corruptas en la Política.	58
4.2 Los Entornos Culturales de la Política en el Posacuerdo.	60
4.2.1 La Socialización del Acuerdo una Opción para Construir Cultura de Paz.	61
4.2.2 La comunicación y la movilización de sentimientos de odio y venganza.	62
4.2.3 El anhelo del orden regido por las armas.	62
4.3 La Implementación del Acuerdo y las Redes Políticas.	64
4.3.1 La política sin violencia el gran anhelo.	64
4.3.2 El meandro de la reincorporación:	65
4.3.3 La polarización en la coyuntura electoral.	67
4.3.4 El <i>Fast Track</i> de espaldas a la Paz.	70
4.4 La Movilidad Social en el Tejido Público y Político.	71
4.4.1. Las circunscripciones una opción recortada.	72
4.4.2. Los nuevos actores políticos.	74
4.5 Síntesis Parcial.	75
5. La Inseguridad y la Violencia.	77
5.1. Las Rentas Ilegales y la Violencia.	78
5.1.1 El narcotráfico: La guerra que permanece en medio de las comunidades.	78
5.1.2. Minería ilegal en el portafolio de las empresas criminales.	80
5.1.3 Fronteras y empresas criminales.	81
5.1.4 El tráfico y el uso de armas de fuego.	82
5.2 La Seguridad y los Riesgos Políticos.	83
5.3 Tejidos Cotidianos Locales y Violencias Actuales.	85
5.3.1 Violencias Cotidianas.	85

5.3.2 Liderazgo social en riesgo de victimización.	87
5.4 Las Nuevas Tramas de Organización y Violencia.	90
5.4.1 Permanencia de actores armados.	90
5.4.2. Las disidencias mantienen el clima de conflicto.	91
5.4.3 Reclutamiento forzado una práctica persistente en todos los grupos armados ilegales.	92
5.5 Síntesis Sobre Seguridad y Violencia.	93
6. Condiciones, Garantías a Manera de Recomendaciones y Llamados.	95
6.1. Sobre los Territorios y Comunidades.	96
6.2 Sobre Líderes y las Organizaciones Sociales.	97
6.3 Sobre la Dinámica Política en el Posacuerdo.	98
6.4 Sobre los Reincorporados y la Seguridad en las Comunidades de Zonas de Transición.	99
6.5 Hacia un Estado de la Situación. Tres Escenarios en Emergencia.	101
6.5.1 Escenario de inercia.	101
6.5.2 Escenario de alternativas.	102
6.5.3 Escenario de rectificación.	102
6.6 Breve Síntesis de Aprendizajes y Recomendaciones.	102
Bibliografía.	105
Glosario de Siglas.	108

Hablar sobre los desplazamientos del poder político en el contexto de la implementación de los Acuerdos para poner fin al conflicto armado con las FARC, lleva a recordar que Colombia es un país con aproximadamente cincuenta millones de habitantes, una extensión de mil ciento cuarenta y dos millones de kilómetros cuadrados, con costas sobre el mar Caribe y Pacífico, vínculos estructurales con las ramificaciones de la cordillera de los Andes y con las selvas amazónicas plurinacionales.

También, que en sus doscientos años largos de vida como nación y como cultura republicana, el país ha vivido sendas guerras civiles y confrontaciones armadas; la última, que bordeó los 60 años, se inició a propósito de la violencia liberal-conservadora de mediados de siglo pasado cuando el país era principalmente rural y se asistía a una violencia ligada al despojo armado de campesinos y etnias que fueron paulatinamente arrojados en peregrinación a las márgenes urbanas. De ahí las motivaciones continuaron ligadas a la guerra fría entre fuerzas del Estado y guerrillas de orientación comunista y socialista, persistiendo con un gran influjo de lo que se ha llamado guerra global contras las drogas, a propósito de la presencia desde los años 70 de áreas de cultivos ilícitos y sistemas de producción y comercialización internacional de narcóticos desde el territorio nacional.

Hay que tener en cuenta que, en medio de estas confrontaciones armadas, el anhelo de transformación política en Colombia no es nuevo. La disputa por el cambio democrático del país ha acompañado buena parte del siglo XX y los tiempos que han corrido del presente centenario. Evidentemente toda clasificación es arbitraria, pero los cambios acontecidos a propósito de la descentralización en la década de los 80 y la Constitución de 1991 fueron procesos que marcaron el devenir político del país. Al respecto es importante referir la elección popular de alcaldes y gobernadores, la creación de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional y, en el plano de la ciudadanía, la consagración del derecho de tutela, transformaciones cruciales en la dinámica pública y colectiva del país.

En ese contexto de larga duración, desde el mes de septiembre del 2012 el gobierno colombiano bajo el mandato de Juan Manuel Santos Calderón comenzó diálogos formales con la guerrilla de las FARC EP que se concretaron en un pacto final firmado el día 24 de noviembre del 2016. Se inició entonces la implementación de los Acuerdos y en paralelo se dio apertura en Quito, el día 7 de febrero de 2017, a una mesa formal de diálogos con la guerrilla del ELN y que ha adelantado un primer acuerdo de cese bilateral hasta el 12 de enero de 2018.

Este proceso en desarrollo es, sin duda, uno de los procesos políticos más relevantes de lo que va corrido del siglo XXI en Colombia y en el continente americano. Se ha expresado, con razón, que para una república como Colombia salir de 60 años de guerra contemporánea, permitiría avanzar hacia un camino de relanzamiento integral de las bases políticas, socioeconómicas y culturales de la nación. Esa expectativa implica asumir que el delicado proceso de implementación de los Acuerdos entre la insurgencia y el gobierno es la base estratégica para una reconstrucción de los tejidos sociales y políticos dañados y para proyectar una etapa de reconciliación y de paz con democracia estable y duradera.

El primer proceso de la implementación, al año largo de firmados los Acuerdos, ha resultado en la dejación de armas por parte de las FARC-EP, hoy constituida en un partido político legal que deslinda del uso de la violencia y de las armas; sin embargo, el diagnóstico presentado en el Informe de Entendimiento de las Razones del Conflicto Armado en Colombia producido por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pág. 20), bien ha señalado que la premisa básica para la superación de las violencias radica en una implementación integral de rectificaciones públicas en el tiempo que involucren a todas las fuerzas vivas del país, desde lo local, pasando por lo regional

hacia lo nacional, en un acuerdo por la vida, por la inclusión social y la ampliación de la democracia.

Inscritos en ese horizonte, la Misión de Observación Electoral - MOE Colombia con sus plataformas regionales, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombia y la Fundación Ciudad Abierta, con el aporte de muy diversas entidades, organizaciones y liderazgos sociales y comunitarios han desarrollado, en el curso del año 2017, sucesivas aproximaciones de observación territorial a los corredores de transición y normalización, en los cuales se han adelantado los procesos de dejación de armas de las FARC y desde donde se configuran en la actualidad Zonas de Capacitación y Reincorporación, en la perspectiva de examinar las condiciones en las cuales es viable avanzar en un camino que dejando de lado la presencia de las armas en la vida política, también avance en superar las condiciones que han hecho posible nuestra larga etapa de violencias.

Este ejercicio se ha adelantado con el propósito de observar las afectaciones tempranas de la dejación de armas a la vida local y de recoger los aprendizajes de reconciliación y participación democrática que van emergiendo desde las regiones y que pueden ser signos, señales prácticas, desde las cuales podamos avanzar como colombianos y colombianas en trascender los escenarios de violencia que se nos han impuesto.

En esa intención se han adelantado a la fecha cuatro informes de observación que equivalen a: (1) los análisis previos y la línea de base de los lugares de pre-concentración de las FARC-EP para iniciar el proceso, (2) los reportes del desplazamiento y llegada de los excombatientes a las Zonas Veredales de Transición y Normalización ZVTN, (3) el análisis de las primeras afectaciones territoriales a nivel de los corredores de transición y, (4) la exposición de aprendizajes sobre los aspectos de desarrollo y reconciliación desde las poblaciones.

El Quinto Informe recoge las observaciones realizadas entre agosto y noviembre del presente año, con énfasis en el análisis de tendencias, condiciones y garantías políticas y de seguridad que se vienen presentando en el contexto de la implementación de los Acuerdos. Con este nuevo ejercicio se busca visualizar escenarios alternativos de gestión pública de paz y democracia en el país, sus regiones y localidades, construyendo una relación de interrogación a las agendas y rutas institucionales, políticas y sociales en curso, en un momento histórico que exige de nuestra capacidad como connacionales para doblar la página de la violencia y el conflicto armado.

Las entidades comprometidas en el Quinto Informe de Observación: Efectos Tempranos en la Democracia durante el Proceso de Dejación de Armas en Colombia 2017. Tendencias del Posacuerdo en Clave de Condiciones y Garantías Políticas y de Seguridad, agradecen la generosidad de cada una de las comunidades, organizaciones y personas que brindaron sus testimonios, aportes y reflexiones y tienen la expectativa de hacer que este insumo sea escuchado ampliamente para que esas voces locales y regionales tengan eco y atención pública.

En el cierre del 2016 y durante todo del 2017, cuando se ha cumplido un año y un mes de implementación de los Acuerdos del Teatro Colón, se han venido generando preguntas en diversos entornos públicos respecto a las condiciones y garantías políticas y sociales para la implementación de dichos Acuerdos para poner fin al conflicto, y sobre las salvaguardas de los derechos adquiridos por los grupos sociales y comunidades. Igualmente hay interrogantes respecto a las adaptaciones, transacciones y concertaciones que son necesarias para avanzar por caminos de reconciliación, reparación y paz.

En medio de esos cuestionamientos son varios los avances, las tensiones y los aplazamientos que se han observado en el recorrido de esta agenda de implementación que siendo compleja y delicada, tiene a su favor que está inscrita en la búsqueda, desde la buena voluntad, de un camino de rectificación de la vida colectiva y pública, con una perspectiva de ampliación de la democracia y de reparación a los tejidos sociales y territoriales afectados por la guerra.

En esa ruta ya las FARC han entregado las armas a las Naciones Unidas, son una fuerza política en proceso de construcción, hay en curso expresiones de solicitud de perdón y gestos de reconciliación social en algunos casos difíciles. Se ha avanzado parcialmente en los temas de la Justicia Especial para la Paz, por ejemplo con el nombramiento de los jueces para esa judicatura, y en los temas sustantivos de implementación de los Acuerdos a nivel territorial se avanza en los preparativos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); igualmente, existe fuerte presión en la agenda legislativa para proyectar tanto asuntos relacionados con las reformas y oportunidades políticas, como en el punto de reforma agraria integral. Complementariamente es un avance el desarrollo del cese al fuego bilateral con el ELN y las exploraciones de una posible entrega con favorabilidad jurídica de algunos grupos posdesmovilización y bandas criminales.

Sin embargo, valorando los esfuerzos empeñados, es menester reconocer las grandes dificultades institucionales, de acuerdo social y de opinión pública respecto a la implementación de los Acuerdos.

La dinámica de la reincorporación en sus dimensiones jurídicas, físicas y socioeconómicas adolece en este momento de estructuras y responsabilidades claras, los planes son parciales y no tienen una integralidad práctica, destacándose la tensión respecto a las garantías legales y de participación política de los excombatientes y los choques entre el enfoque individualizado de las agencias estatales comprometidas y la expectativa de una reincorporación colectiva por parte los excombatientes.

La implementación de asuntos del Acuerdo relacionados con los territorios y comunidades afectadas por el conflicto, tales como la operación de los PDET, la sustitución de cultivos, el desminado, la formalización de tierras, entre los más significativos, avanzan en medio de una situación de tensión por el centralismo, por la falta de claridad en las rutas y ritmos en la gestión, por la zozobra ligada a la presencia amenazante de grupos armados copando los territorios de salida de las FARC y por la falta de medidas eficaces frente a la creciente victimización de líderes sociales. Los anteriores asuntos integrados configuran un escenario turbulento de gestiones, evidenciándose que no hay un plan global de implementación consistente y que la tendencia es a asumir las comunidades como usuarias de proyectos y objeto de intervenciones de diverso tipo.

Por otro lado, aunque ya se avanza en la conformación del partido político FARC, en los asuntos asociados a la demanda de democratizar el país y de garantizar la participación ciudadana y política de los sectores más afectados por el conflicto se observan aún grandes dificultades. En el plano legislativo hay obstáculos propios de los intereses electorales en relación con la reforma política, las Circunscripciones Especiales de Paz

y en particular sobre el marco estatutario de la Justicia Especial para la Paz.

Situados en esos avances y tensiones se viene el periodo electoral para el cambio de cuerpos legislativos y el ejecutivo nacional; esta circunstancia se da en medio de una crisis pública ligada a los escándalos de corrupción en todos los niveles que descubre insospechados fenómenos criminales en el orden de la rama de la justicia, de los partidos políticos, de la ejecución de obras públicas y de la pervisión de las normas electorales para el acceso al poder político. Emergen también en ese contexto importantes movilizaciones de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que buscan detener la ola de violencia que afecta sus entornos, así como tener mayor y mejor reconocimiento en su condición de sujetos socio políticos y atención a sus demandas sociales y territoriales.

En síntesis, el debate sobre las alternativas para la superación del conflicto y sobre los actuales Acuerdos en proceso de implementación sigue dándose en medio de una polarización que genera gran confusión y desorientación entre las poblaciones más afectadas por el conflicto y por la ciudadanía en general. Especialmente es crítico en medio de este contexto, el fenómeno de amenazas y asesinato de líderes sociales y étnicos, y los atentados contra comunidades lejanas de centros poblados, lo cual nos sitúa ante el riesgo de la repetición de violencias y acciones victimizantes.

La Colombia de hoy avanza en la implementación de Acuerdos para la superación del conflicto con las FARC y explora salidas para generar procesos similares con los otros actores armados; se avanza en hacer las paz(es), pero se está todavía en búsqueda de claves para potenciar una dinámica de reparación, reconciliación y construcción de paz con democracia que en buena medida está ligada al devenir de la implementación de los Acuerdos, a la eficacia y eficiencia institucional, a la capacidad del conjunto de la sociedad para establecer nuevos pactos de convivencia.

Al respecto, las dinámicas en los territorios van señalando una radiografía básica de la situación, evidenciando los efectos tempranos que muestran una tendencia en nuestras rutas públicas y sociales de implementación de los Acuerdos con las FARC y de negociación con el ELN que ameritan ser analizadas para visualizar con sentido de futuro la ruta venidera. Siguiendo la saga de los acontecimientos desde los territorios, con el presente informe se busca abordar analíticamente las tendencias del proceso de implementación de los Acuerdos, desde el punto de vista de las relaciones entre organización social y poder, y de los niveles de acuerdo y desacuerdo en los entornos locales y regionales.

Para realizar esa aproximación en el primer capítulo se desarrolla un marco analítico centrado en las perspectivas políticas y de seguridad del proceso. En el segundo se brindan aproximaciones a las tensiones propias de la transgresión violenta en los territorios. En el tercero se exploran las dinámicas de la organización y participación social en el contexto de la implementación. En el cuarto se observa especialmente la transfiguración de los poderes políticos locales en este periodo. En el quinto se da una mirada a las dinámicas de violencia que tensionan la situación de seguridad en las comunidades que habitan los corredores del posacuerdo. Finalmente, en el sexto capítulo se establece una síntesis de todo el texto, haciendo énfasis en hallazgos, condiciones y garantías, presentados a la manera de llamados y recomendaciones. El lector o lectora que desee encontrar reflexiones sintéticas, bien puede ir a este capítulo final directamente o apoyarse en la infografía anexa.





BUENAVISTA - META - JULIO 2017

➔ 1

**UNA APROXIMACIÓN A
LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS ACUERDOS DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA CAPTURA
Y COOPTACIÓN DEL ESTADO**

Todo el mundo viene aquí a preguntar por lo que pensamos, ya ni podemos trabajar la tierra respondiendo tanta entrevista; pero cuando nosotros preguntamos no hay quien dé respuestas. No hay quien responda por la paz
Poblador Espacio Territorial Filipinas Arauca.

Durante el recorrido reciente de 2017 hemos recopilado una gran cantidad de preguntas que emergen en los territorios de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y por los corredores en los cuales se están dando procesos de transición para superar el conflicto armado. En la sistematización de las conversaciones desarrolladas en estas visitas se encuentra un cuadro de percepciones y tensiones que son síntoma de la situación política y comunicativa en la cual se adelanta el proceso. El cúmulo de interrogantes cotidianos de la población es muy amplio, de las cuales parece importante recoger y reseñar las principales inquietudes:

Los campesinos de diversas regiones plantean asuntos de este tenor: ¿Cuáles son las condiciones concretas para formalizar las tierras y para recuperar predios despojados?, ¿Cómo hacemos para explicarles a los funcionarios de los PDET que aquí ya tenemos planes e iniciativas y necesitamos que primero nos escuchen antes de tanta metodología?, ¿Cómo es que nos van a garantizar la seguridad y la vida en los territorios rurales pues hay mucho actor armado patrullando y amenazando?, ¿En qué consiste la Circunscripción para la Paz y cuáles son las garantías de que eso no sea para las fuerzas políticas de siempre?, ¿Es sustitución voluntaria en serio o nos están llevando a una erradicación forzada a la carrera?. No es que no existan respuestas para estas preguntas, el asunto es que no están ordenadas, son contradictorias o no conducen a rutas de participación e inclusión concreta de los sectores rurales.

En circunstancias más urgidas los ciudadanos en condición de víctimas del conflicto armado, principalmente quienes no están organizados y no tienen suficientes canales de comunicación institucional, se preguntan más o menos en estos términos: ¿Cuándo voy a recuperar la propiedad que perdí hace algún tiempo en la guerra, qué debo hacer para ello?, ¿Cuándo estarán listos los mecanismos para la búsqueda de mi familiar desaparecido que se murió en unas circunstancias probadas que no se quieren reconocer?, ¿Cómo van a garantizar que mis victimarios no repitan sus acciones en mi contra cuando se trata de pedir justicia y reparación?, ¿Dónde encuentro quién me explique no en qué consiste la JEP, sino cómo puedo acceder a ella?, ¿me están pidiendo perdón, pero y la justicia y la reparación quién y cómo se van a garantizar? Las respuestas aquí están menos dispuestas, casi la

única que se repite a las víctimas es que se debe esperar qué va a pasar con la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz y saber tener paciencia.

No es menor el cúmulo de interrogantes de las autoridades locales frente al proceso actual de implementación: ¿Cómo hacemos para que la información del proceso de implementación llegue integralmente, de conjunto al municipio y/o departamento, superando las informaciones parciales y a cuenta gotas?, ¿en qué niveles y modalidades se da la articulación institucional entre lo local, municipal, departamental y nacional, tanto a nivel descentralizado como del gobierno central?, ¿Cómo serán tenidos en cuenta en los planes de implementación los Planes de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial y las iniciativas públicas en curso?, ¿Cómo se articulan las nuevas instancias y espacios que se están convocando con los procesos de participación que ya están en funcionamiento en corregimientos, municipios y departamentos?, ¿Cómo procesar con agilidad demandas y problemáticas de tipo social, ambiental y de seguridad que aparecen como contingencias e imprevistos en el curso de proceso de implementación?; estas preguntas se repiten como una letanía, pero el vértigo de la gestión que está deviniendo en activismo institucional permite expresar, con algunos contrastes, que asistimos a una gran desarticulación de la implementación a nivel estatal y público.

Los reincorporados, principalmente los excombatientes de base, en medio de situaciones de interinidad y de espera se hacen cuestionamientos muy básicos: ¿Dónde voy a vivir y de qué me voy a sostener si no está claro el proceso de reincorporación socioeconómica?, ¿Cómo me van a garantizar el derecho político si hay tanta amenaza en los territorios?, ¿Cómo va a ser el funcionamiento de la JEP y qué garantías mínimas se dan para que eso no sea un engaño?, ¿tendremos acceso a tierras para impulsar proyectos productivos familiares y/o cooperativos?, ¿todas las promesas y propuestas que se han escuchado de parte de visitantes a las Zonas tiene fecha, lugar y hora para avanzar en alguna alternativa concreta?; estos asuntos no son menores pues comportan el factor de riesgo de las disidencias armadas respecto al Acuerdo y de reincidencias en la victimización, lo cual nos sitúa en un escenario de gran vulnerabilidad de la implementación si no se atienden y subsanan las inquietudes y requerimientos.

Finalmente, los habitantes urbanos y suburbanos de los entornos regionales donde se está dando la transición se preguntan principalmente en direcciones que son síntoma de una pluralidad de tensiones y de percepciones confusas respecto

a la comprensión del Acuerdo, en términos del interés general y de los efectos directos e indirectos es usual que se pregunte en los espacios más urbanizados: Que nos expliquen ¿en qué nos va a beneficiar acá el proceso de paz?, ¿Por qué los de las FARC tendrán beneficios, y la gente vulnerable y las víctimas del conflicto que están aquí en las márgenes no se ve que serán tenidas en cuenta?, ¿Por qué siguen creciendo la delincuencia y el microtráfico si los Acuerdos ya se están implementando mientras todo el entorno de seguridad tiende a empeorar?, ¿Cómo están preparándose las autoridades para enfrentar las disidencias, pues es muy seguro que la mayoría de excombatientes vuelvan a la guerra?, ¿Cómo se van a generar oportunidades productivas y emprendimientos para hacer productivo el campo que ha estado comprometido en la guerra?. Estas cuestiones que se perciben en las expresiones de los habitantes de centros poblados evidencian polarizaciones frente a la dinámica de construcción de paz que implica grandes falencias de flujo de información y de mecanismos para impulsar la reconciliación social.

Estos asuntos, sin duda, manifiestan la latencia de una dinámica de implementación que admite respuestas y que seguramente en un camino largo encontrará realizaciones; sin embargo, en el corto plazo se percibe una gran tensión, angustia e inquietud frente a la demanda de acción asertiva en estas circunstancias. Para hacer que la acción pública y ciudadana enfrente los riesgos que se presentan y se consoliden los escenarios de paz y democracia se requiere un esquema interpretativo que ponga en perspectiva los asuntos de los cuales se habla en los territorios, de cara a la comprensión de la implementación de los presentes Acuerdos como un pulso histórico para superar los factores que han agenciado el conflicto armado y la violencia.

1.1 El Debate Público y la Marcha de los Acuerdos, un Asunto de Sensibilidad Territorial.

Lo que se dice es poco, una cosa es leer ese libro de los Acuerdos o ver las propagandas y otra cosa es que esos escritos se vuelvan hechos; uno sabe que falta mucho trecho, pero el problema es que el camino aún no está bien, bien señalado.

Poblador Miranda Cauca.

En la búsqueda de un referente interpretativo es posible visualizar que el proceso de implementación de los Acuerdos para poner fin al conflicto ha sido muy dinámico por lo menos en tres campos: en el plano mediático en el que, a cada paso de la gestión, se han generado debates diarios que tensionan y proyectan dinámicas de opinión pública muy disímiles; en el plano polí-

tico institucional, principalmente a nivel de la constitucionalidad de los Acuerdos en las Cortes y de su desarrollo normativo en los ámbitos legislativos; y en los territorios, donde es posible percibir grandes tensiones sociales y de las culturas políticas locales y regionales. Sin duda, se puede observar de manera privilegiada en estos tres campos el proceso en sus dimensiones de seguridad y gestión política.

El ámbito mediático permite percibir la tramitación de un debate bastante influido por aspectos ideológicos y emocionales en el que es conocida la saga de disputas y manipulaciones de la sensibilidad alrededor de las negociaciones y de la refrendación del plebiscito del dos de octubre del 2016; pero también la gran demanda de información de la población colombiana para tener elementos de juicio sobre las transformaciones, oportunidades y riesgos que genera el proceso. El espectro de la discusión pública sobre la paz en este periodo es en sí mismo uno de los obstáculos que tenemos en la sociedad colombiana para avanzar en la proyección de nuestra cultura política democrática común.

Todavía es latente la tensión entre la oposición a los Acuerdos y su proceso de implementación; en la medida en que se configuran nuevas coaliciones y estrategias para el próximo periodo electoral, entramos en un área de polémicas y posicionamientos sobre el conjunto de los Acuerdos provocando desencuentros y males-tares colectivos que demandan mayores niveles de información veraz, y fórmulas para potenciar salidas de consenso sobre la pizarra del imaginario social.

El esfuerzo por la generación de ciudadanías activas, informadas, que puedan hacer lecturas pausadas de la realidad social y ponerlas en la perspectiva de acción frente a la agenda de negociación del conflicto se ha visto sustituido por la manipulación mediática de las emociones, en función de la defensa de intereses particulares, grupales, o sectoriales y por la afirmación consiguiente de caudillismos y sectarismos.

Por otro lado, la dinámica legislativa en la cual se desarrolló la agenda de proyectos con reformas para la paz vía *fast track* estuvo caracterizada por un debate sobre la seguridad jurídica de la implementación, en términos de la interpretación de la constitucionalidad y el cumplimiento de los cánones del derecho internacional; pero especialmente se ha visto afectada por el trasfondo político electoral en el cual se evidencian múltiples tensiones entre sectores de oposición a los Acuerdos, que acogen lo acordado y se esfuerzan en su desdoblamiento en políticas públicas, y sectores dubitativos o que tienen observaciones y objeciones parciales. En ese sentido,



La Carmelita - Putumayo 2017

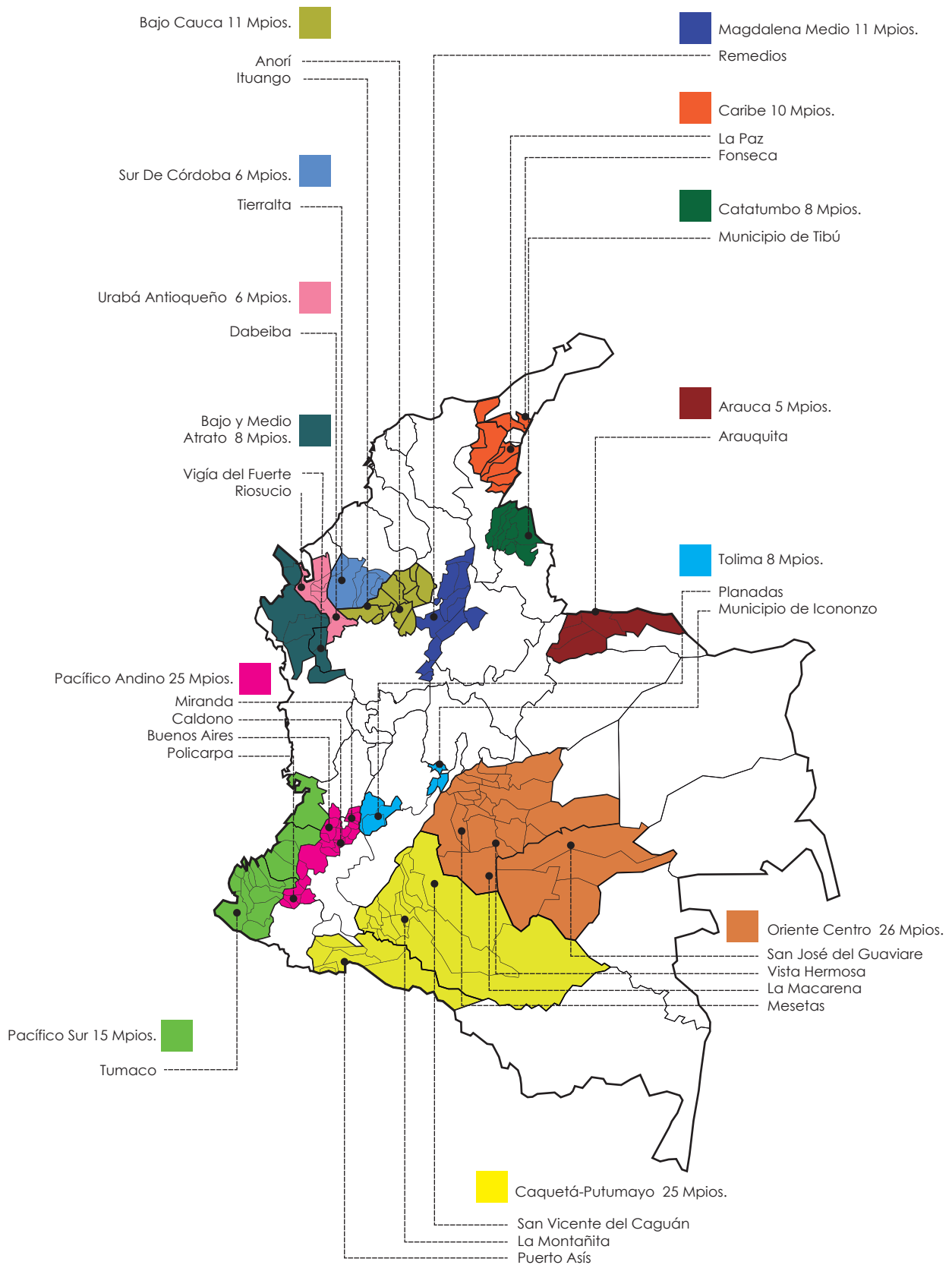
se perciben problemáticas en la gestión legislativa, ligadas tanto a la adhesión a causas morales compulsivas y sectarias que impiden razonamientos reposados, así como instrumentalización de los debates a través de procedimentalismos para bloquear el avance institucional que se requiere.

Este escenario involucra decisiones sobre asuntos de grave materia para el destino de la agencia pública en relación con los balances entre reconciliación y justicia a propósito de la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz, de las reglas de juego político como el Estatuto de Oposición, la Reforma Política, la Reforma al Sistema de Participación Ciudadana, y las esperadas Circunscripciones Especiales de Paz. En perspectiva, los asuntos sustantivos para concretar las fórmulas de no repetición y la vocación de reconciliación y de oportunidades de democratización, participación e inclusión, están, como es comprensible, en diseño para su aplicación con dificultades para hacerse viables y/o para mantener el espíritu en el que fueron acordadas, lo cual demanda de un diálogo más efectivo e

incluyente, pero también de probidad y transparencia de las fuerzas políticas.

En la cotidianidad de las regiones el asunto toma otras características. Conocemos que desde mediados de 2016 se dio una movilización de los frentes guerrilleros a puntos de reagrupamiento como una forma de consolidar el cese al fuego bilateral y la disposición a iniciar la implementación. En medio de la novedad del debate generado en la refrendación se dio apertura a la primera etapa asociada a la dejación de armas e inicio de reincorporación desarrollada en 26 Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización en un ejercicio que implicó la movilización de las fuerzas insurgentes de sus zonas históricas de influencia para situarse en áreas de transición hacia la reincorporación civil. De la observación de esa experiencia ha sido posible inferir una regionalización del proceso aun en gestación, que se ha venido configurando a la manera de corredores de transición.

MAPA 1. CORREDORES ZVTN Y PTN



En ese contexto la dejación de armas cumplió su ciclo a finales de julio del presente año con una dinámica marcada por cuestionamientos a la implementación institucional de las Zonas Veredales, debido a la incapacidad de acción por parte de las fuerzas del Estado frente al hábito del delito y de la sumisión, y por la adaptación de las comunidades a nuevas formas de violencia, y, en contraste con lo anterior, se generan expectativas por la disminución de víctimas producto de la extinta confrontación entre el Ejército y las FARC, por la generación de esperanzas en las comunidades sobre la oportunidad real de incluirse y participar de los planes territoriales de paz, y por la posibilidad de romper con la lógica de convivencia con los actores armados.

Cerramos el año 2017 en medio de grandes preocupaciones por el aumento de asesinato a líderes sociales, por la presencia o ampliación de la ocupación del territorio por parte de otros grupos armados y de la falta de claridad en las comunidades y entre las víctimas del conflicto respecto a las rutas posibles para realizar sus demandas e iniciativas sociales de paz.

El entorno territorial está muy matizado, en las localidades distantes de los centros poblados se vive entre la esperanza que genera el salir de la guerra y el temor por la emergencia de nuevos teatros de operaciones y renovados actores armados ilegales; en las veredas y corregimientos, cerca de mil doscientos tejidos poblacionales arraigados en sitios remotos y mal comunicados, ya se sienten nuevas dinámicas de movilidad, nuevos poblamientos que incluso trascienden los asentamientos de los reincorporados, nuevas dinámicas productivas incluyendo la ampliación de la franja de cultivos ilícitos y su procesamientos, nuevos impactos ambientales sobre bosques y ríos, pero también nuevas expectativas de integración de esos territorios a la vida regional y nuevos mecanismos de inclusión de sus poblaciones.

En los centros más poblados, básicamente en cabeceras municipales y capitales de departamentos afectados por el conflicto, la tensión está más centrada en la expectativa de los planes y procesos ligados a la implementación de los Acuerdos, en la demanda de claridades y rutas para el avance del proceso o en la medida en que el aprestamiento institucional y la interlocución gubernamental entre los niveles nacional y regional es contingente, y en el entorno de intolerancia que en muchos casos es sistemáticamente promovido por fuerzas antidemocráticas respecto a la marcha del proceso. La decisión de transformar el conflicto manifestada en los Acuerdos demanda de nuevos procesos de negociación en los territorios y esto implica, entre los actores locales y regionales, comprensión de

los diversos planes y horizontes de vida, de la interculturalidad que se expresa en el territorio, en un plano que está exigiendo básicos por la vida y la paz que permitan manejar los conflictos latentes en el cotidiano, sacando las armas y la agresividad de las alternativas colectivas de relacionamiento y acción.

Desde las regiones y localidades la pregunta por la política y por la seguridad humana, básica para avanzar en una sociedad conviviente, está llena de necesidad de comunicación y diálogo, de acciones que aborden la justicia más allá de la violencia ligada al conflicto armado, de la necesidad de generar confianza entre ciudadanías e instituciones y de reconocimiento de las diversidades étnicas, sociales y culturales.

1.2 La Interrogación a un Proceso en Curso con Alcances Históricos.

Es que garantías, garantías pues no hay, nunca han existido más allá del papel; dependemos es de la voluntad de los gobiernos y de la clase que representan, y de que les dé pena incumplir la palabra

Excombatiente Pondores, Guajira.

Hemos elegido explorar la situación colombiana en el marco de una expectativa de transición hacia el tratamiento pacífico de los conflictos en democracia desde el enfoque de comprensión de la captura y la cooptación del Estado, en medio de una cultura política permeada por la guerra, el clientelismo y la lógica mafiosa. Al situarnos en ese horizonte trabajaremos sobre las siguientes preguntas relacionadas con los tránsitos y las afectaciones del proceso de implementación de los Acuerdos en relación con la experiencia política y social de las regiones:

a. Sabemos que la premisa de los Acuerdos para superar el conflicto armado no agota la matriz de conflictos territoriales a nivel socioeconómico, político y cultural del país actual; en ese sentido, interesa explorar en primer lugar ¿Cuáles son los principales conflictos macro regionales de orden socioeconómico y cultural que alimentan la persistencia del conflicto armado y la violencia social y política en los corredores de transición?

b. Buena parte de las apuestas para enfrentar los efectos del conflicto armado y social radican en el fortalecimiento de los canales de participación social que requieren apertura de oportunidades para las organizaciones sociales que se asumen como agentes colectivos en las poblaciones y comunidades, por ello interesa explorar ¿Cuál es la situación y proyección de las organizaciones comunitarias y sociales, de las redes ciudadanas en el contexto actual del posacuerdo en los territorios de la transición?



Ituango - Antioquia 2017

c. La transformación de las condiciones sobre las cuales se estructura el conflicto armado pasan por cambiar la asimetría y la corrupción del poder que se ha establecido históricamente a través de redes clientelares que median la configuración del campo político, entonces, ¿Cuál es la situación, las dinámicas y tendencias de las estructuras y redes de poder político regional en el contexto actual de la implementación de los Acuerdos para poner fin al conflicto político armado?

d. Sabemos por la tozudez de los hechos que la lógica violenta, del armamentismo, de la agresividad, es persistente en la construcción de poder social y que es una asignatura pendiente del país; en ese sentido, ¿Cuáles son las principales situaciones y riesgos de seguridad que comprometen en su orden a las comunidades de áreas de conflicto, a las organizaciones sociales, los liderazgos sociales y a los reincorporados en el conjunto de las macro regiones?

e. Finalmente, parece pertinente de cara al mediano plazo de la agenda de implementación, visualizar los escenarios de posibilidad sobre los cuales puede avanzar la acción pública, social y ciudadana; por esto se aborda la pregunta sobre ¿Cuál es la valoración de condiciones y garantías básicas para avanzar en la implementación de los Acuerdos con un sentido de paz y democracia?

1.3 Una aproximación a los desplazamientos en marcha.

Diga usted que esto arrancó y muchos queremos que vaya bien. Lo que yo no veo todavía es ¿bien para quié-

nes? Porque con tanto interés encontrado comen es las vacas más grandes...

Poblador La Carmelita Putumayo.

Para avanzar en el ejercicio de indagación es clave tener como referencia algunas aproximaciones conceptuales que ayuden a construir una perspectiva analítica. Para abordar ese propósito hemos considerado usar un conjunto de definiciones provisionales que permitan desarrollar una descripción e interpretación de los principales ejes de observación en clave de las relaciones de poder económico social y político sobre el entendido que la implementación de los actuales Acuerdos implica una disposición de los agentes distribuidos en los campos de poder a ceder sus posiciones y a transformar prácticas que distorsionan las reglas de convivencia y la formas de legitimación de lo público:

Interesa explorar en las expresiones de la cultura social mafiosa aquel sistema de relaciones sociales que pone al centro la criminalidad y la contravención a las normas intrincadas de la vida colectiva para fortalecer la acumulación originaria de capitales por parte de agentes particulares, privilegiando el uso de mecanismos coercitivos, violentos, armados y excluyentes. El proceso de reincorporación de un actor por determinante que sea no es la garantía de que los dispositivos mafiosos dejen de operar, dado que el espectro de operación mafiosa en Colombia ha estado relacionada con la guerra, pero le excede en múltiples procesos y actores.

En el marco de esa relación entre guerra y mafias es importante recordar que el uso de las

armas es solo un indicador y un hábito que funciona en medio de las agencias mafiosas; según las experiencias próximas en el mundo de salidas políticas negociadas, especialmente en África y Centroamérica, el asunto no es solo de control militar de los territorios, sino de respuestas integrales que fortalezcan la capacidad de autocontrol y la gobernanza sobre los territorios, lo que exige una especial valoración crítica de la cultura productiva y del poder que se ha configurado a expensas del extendido conflicto político armado en las regiones colombianas.

En particular interesa explorar la forma como los poderes políticos tradicionales actúan en este contexto de posacuerdos y de implementación de los mismos en las relaciones sociales de formación de poder territorial reconocidas tradicionalmente como clientelares. Se entenderá por cultura política clientelista aquella forma de relacionamiento político que se centra en el intercambio de favores y en la generación de presiones sobre el sistema de reglas de funcionamiento social del poder político (García V, 2010). El clientelismo es una tecnología de acumulación del poder político que opera como red de intercambios simples y se centra en el uso de las instituciones del Estado para los lucros y favores grupales. También es un sistema de relaciones que se basa en la conculcación y expropiación de derechos para generar economías rentistas alrededor de los bienes públicos (Duque, 2015). Todo el proceso de implementación de los Acuerdos que involucra reparación a las víctimas, restitución de tierras, ampliación de las oportunidades de participación política se pone en tensión con la tradición política clientelista y esto se vive de manera dramática en los territorios en este período.

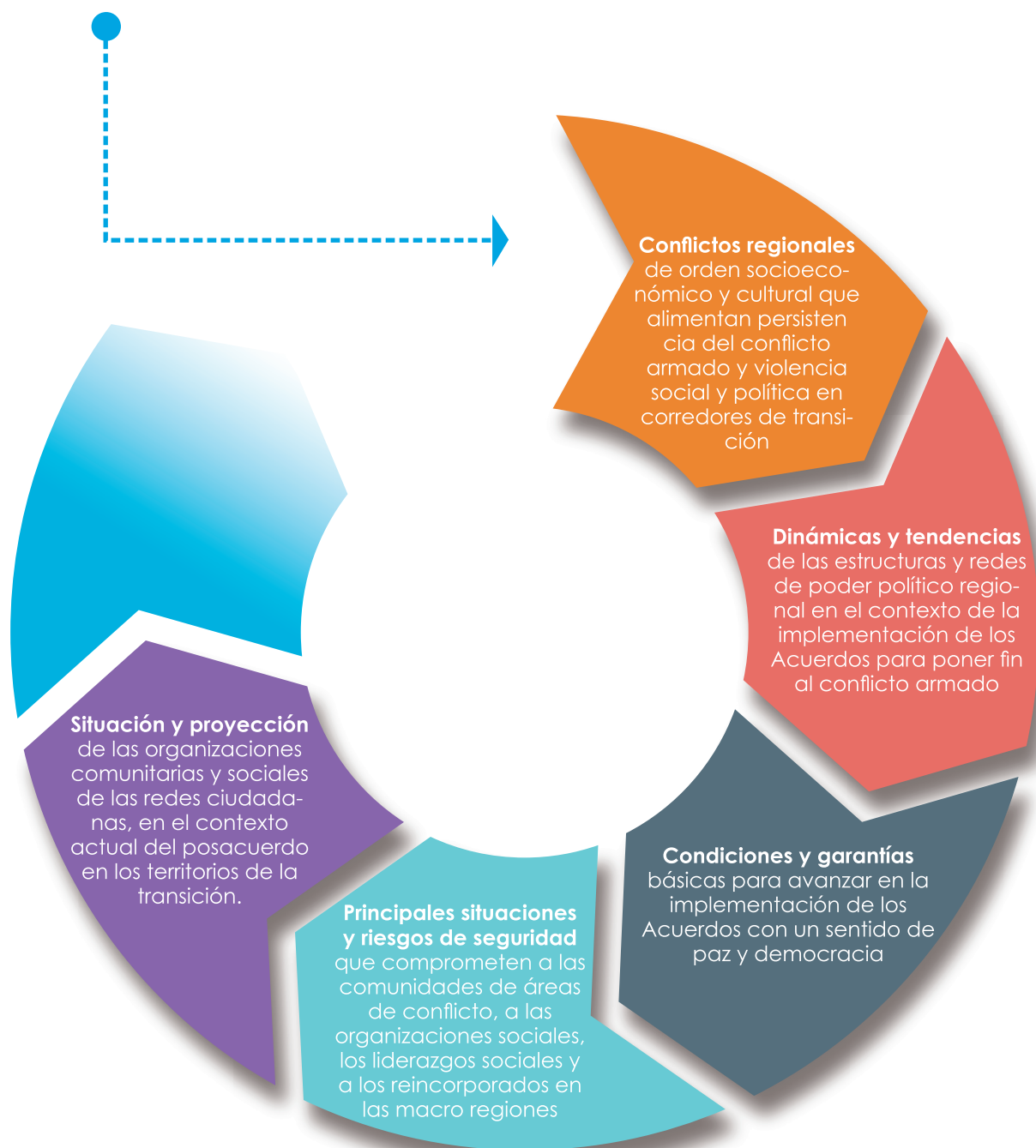
En ese contexto está comprometido el funcionamiento de las instituciones y la operación transparente del Estado. Esto implica observar su tradicional captura que rompe con las garantías públicas y genera un fuerte régimen de inequidad. Se entenderá por Estado capturado aquella situación en la cual las instituciones y agentes estatales son apropiados como herramientas de acumulación de poderes y capacidades de grupos particulares que acceden a la esfera política para sostener beneficios en otros campos y esferas; la captura del Estado se da en el marco de operaciones sociales en red que implica la instrumentalización de poblaciones y la cohección de agentes de la esfera privada (Garay, 2008). Hacer camino en la superación de este flagelo en el contexto del posacuerdo, es la condición principal para avanzar hacia la construcción de paz y democracia.

El grueso de las tensiones que sitúa la implementación de los Acuerdos exige un desarrollo político estratégico que vaya en recuperación de lo público y de la participación en la construcción de ciudadanía y Estado; tenemos un escenario de Estado Cooptado, en el cual los grupos políticos corruptos y los grupos criminales se constituyen en sectores hegemónicos dentro del Estado, usándolo para sus intereses a través de la manipulación de normas y leyes, y especialmente del uso de la gobernabilidad para normalizar irregularidades y naturalizar negocios ilícitos. Ya no solo se captura el aparato administrativo, sino que se diseña y conduce en favor de terceros, generado una situación de ilegalidad e ilegitimidad institucional. Explorar salidas para afrontar las situaciones que nos han situado en un difícil cruce de caminos para superar la guerra, las violencias y la ilegitimidad es un camino arduo pero necesario.

Situados en ese breve marco de referencia se plantea una aproximación a la comprensión de este momento del proceso de implementación de los Acuerdos con las FARC asumiendo como hipótesis que a pesar de los importantes esfuerzos de las partes se están atacando los síntomas y no la enfermedad. Se logran Acuerdos para desarmar las insurgencias, pero no hay suficiente fuerza para hacer que esos acuerdos generen democratización del poder y sentido de la justicia social. Se busca una paz política sin suficiente arraigo social, por lo tanto los alcances de los Acuerdos y el potencial de redistribución de oportunidades es muy limitado, al punto que no logran establecer respuestas equilibradas respecto a las demandas que se dan en las tramas de conflicto de los territorios.

En adelante exploraremos las debilidades y oportunidades de este proceso desde los interrogantes construidos, recogiendo la indagación empírica sobre los corredores regionales en los cuales se están viviendo las dinámicas de reacomodo socio cultural, económico y político; haciendo énfasis en esbozar tendencias y retos en el campo del ejercicio político y de participación de las comunidades.

1.4 ESQUEMA DE COMPRENSIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS PARA LA SUPERACIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO COLOMBIANO





SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - SEPTIEMBRE 2017

▶ **2**

**LAS MATRICES DE CONFLICTO EN
EL CONTEXTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
ACUERDOS: ILEGALIDAD Y
PRÁCTICAS DE VULNERABILIDAD
EN LOS TERRITORIOS**

“Nosotros podemos echar los ojos para atrás y decirle con tranquilidad que lo que hemos visto pasar por estos caminos es la guerra, eso se viste de cualquier uniforme, no importa, lo que le puedo decir es que la violencia siempre ha pasado por aquí buscando alguna riqueza y no es sino que vea lo que ha dejado de aquí pa arriba en las comunidades, vaya y vea lo que ha dejado...”

Pobladora zona alta Cordillera Occidental Norte del Cauca

Es reconocido que la guerra ha sido alimentada por economías ilegales que usan la violencia como factor de acumulación de capitales generando hábitos autoritarios en los territorios. Las tramas históricas permiten reconocer diversas líneas de cultura productiva ligadas a la lógica mafiosa en campos y ciudades, inventando y reinventando modalidades de ocupación, apropiación y uso de los espacios sociales. La persistencia de esas economías ilegales, la permanencia de las drogas de uso ilícito inscritas en un comercio globalizado, la vulneración de las fronteras con la práctica del contrabando y compraventa ilegal de armas, la instauración de mecanismos de justicia alejados de las estructuras jurídicas y las normas de convivencia democrática, son asuntos nodales que se identifican en las regiones donde está operando el proceso de dejación y posesión de armas.

El asunto crítico es que el eje central del conflicto de esa presencia mafiosa en la sociedad y especialmente en la política colombiana muestra la creciente interrelación entre narcotráfico, economía, sociedad y política. No se trata simplemente de un fenómeno ilegal, sino de su poderosa capacidad para corromper, mimetizarse y reproducirse en el plexo de la vida social e institucional, al punto que ha transformado en su devenir, formas de interacción, prácticas sociales y estructuras del sentir colectivo, de forma tal que se puede reconocer en la sociedad colombiana una tendencia cultural que está presente transversalmente y permea, ya no actividades puntuales, sino campos extensos de la vida colectiva en la configuración de los territorios (Mejía, 2010, pág. 24).

“Antes yo veía que la gasolina la manejaban unos señores; ahora se dice que la manejan otros grupos, pero la gasolina sigue pasando y de eso vive mucha gente, eso genera mala costumbre; ahora está más cara y es perseguida como siempre pero la gasolina sigue aquí, en venta a borde de carretera, a la vista de todo el mundo...”

Poblador Riohacha.

Situados en esas circunstancias es posible encontrar algunas respuestas para superar esa tendencia en la implementación de los Acuerdos de paz, específicamente de los puntos relacionados con la Reforma Rural Integral (punto 1), la Solución al Problema de las Drogas de Uso Ilícito (punto 4) y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (punto 5). Precisamente en los previos y en los tímidos intentos de la puesta en marcha de estos puntos de los Acuerdos es posible visualizar las tensiones propias del esfuerzo por romper con la lógica histórica de una sociedad permeada por un sentido mafioso de la vida económica y cultural; en ese contexto, particularmente se observa la capacidad de mutación y arraigo de estas inercias en la vida de las regiones y el país.

La tensión se manifiesta desde diversas modalidades regionales y locales, pero comporta algunos patrones comunes. Sobre estos exploraremos cuatro aspectos que se vivencian desde las regiones en el período de dejación y posesión de armas en el marco de la implementación de los Acuerdos. En primer lugar, nos aproximamos a la persistencia de las dinámicas económicas ilegales sobre las que se sostiene la reproducción material de las mafias. En segundo lugar, en el plano social, nos interrogamos por la forma cómo el capital social es corroído por las prácticas y lógicas ilegales en esta coyuntura particular. En tercer lugar, reconocemos cómo la inercia de la guerra es una corriente que se opone a los procesos de reconciliación. En cuarto lugar, exploramos las prácticas culturales que se oponen a la reconciliación.

2.1 Las Tensiones Propias de las Disputas Económicas Sobre los Territorios.

“Antes uno estaba a la espera de quién lo ocupara en lo que fuera. En tiempos tocaba no más ver si había algo extraño por los caminos y uno vagaba viendo por ahí. En esa época había trabajo y a uno lo enganchaban en cualquier faena de la bonanza, usted sabe. Ahora estoy con esto del taxi, siempre sale viajecito en la Zona, uno tiene el privilegio de que conoce los caminos y por eso lo ocupan para ir y venir a la Zona”.

Antiguo miliciano ahora transportador en Zona del Oriente Colombiano.

En los recorridos de observación encontramos que en los territorios donde se ha desarrollado el conflicto armado se mantienen vivas redes que



Bajirá - Chocó 2017

operan burlando la normatividad, acumulando capitales de manera informal o participando abiertamente de lógicas ilegales a partir de la "legalidad". Desde esta perspectiva, el foco de la observación se ha centrado en explorar la manera cómo en la vida productiva de los corredores regionales que son espacialmente el escenario de dejación y posdejación se generan, desplazan y/o recrean prácticas de coacción armada, usurpación, engaño, intercambio injusto (narcotráfico, minería ilegal, contrabando, manejo de corredores estratégicos, acumulación de tierras). Veamos algunas de ellas:

2.1.1 ¿Y de la tierra qué?

"Yo que día estuve con los vecinos y compadres haciendo cuentas y no me cuadra tanta belleza; porque vea, para ese lado está la represa y toda su zona de protección, pa acá atrás estamos llenos de resguardos, allá arriba dizque es Parque Nacional y páramo; pal lado del río hacia allá ya tienen la zona de reserva campesina y si voy más allá eso son los monos tirando coca por ese monte y lo tienen bien controlado; nosotros, desplazados de la región hemos estado como gitanos en todos esos territorios, lo conocemos como la palma de la mano: ¿tierra? la que nos han quitado ya tiene dueños y pa' darnos, pues no hay. Entonces está la inquietud ¿cuál tierra?"

Victima poblador rural de Antioquia.

La principal preocupación latente entre las comunidades es el acceso, uso y propiedad de la tierra. Una de las apuestas de la RRI (Reforma Rural Integral) es entregar tres millones de hectáreas de tierra en el campo y formalizar siete millones. Este propósito, por fuera de ser uno de los retos más ambiciosos que haya emprendido gobierno alguno en el país, implica transformar la territorialidad, en el sentido que trasciende el desconcentrar la tenencia legal de la tierra, para impulsar una economía agraria más justa y equitativa. De esa expectativa se habla en los territorios incesantemente, incluso en algunos casos se avanza en los preparativos de procesos aun no establecidos en detalle.

"Las comunidades que fuimos desplazadas durante el conflicto vemos la posibilidad de retornar a nuestros territorios. Por eso en los Resguardos de la María y Barrancón del pueblo Jiw estamos en el proceso de iniciar la demanda de restitución, pidiendo saneamiento y ampliación del territorio puesto que nuestras tierras han sido ocupadas por colonos, narcotraficantes y grupos guerrilleros (FARC)".

San José del Guaviare un líder indígena.

En ese horizonte la restitución es un eje nodal en la lucha de sectores rurales que fueron víctimas del despojo. Frente a esta gran oportunidad de transformación territorial se generan o actualizan nuevas expresiones de conflictos por la tenencia de la tierra, los cuales se agencian

mediante prácticas ilegales y corruptivas, involucrando disputas entre grupos étnicos, colonos, campesinos e incluso sectores de la política y la economía institucionalizada.

“Ya los indígenas han registrado en la Agencia Nacional de Tierra la solicitud de restitución de tierras para ampliar el resguardo, para que los nativos que eran de Buenavista, Santa Elena y Piñuña Blanca que fueron despojados del territorio puedan retornar, eso implica que nos devuelvan, también, selvas vírgenes”.

Agente institucional Putumayo.

Desafortunadamente estos anhelos en muchos lugares de la geografía nacional se chocan con que las tierras que dejaron ya tiene nuevos ocupantes de hecho, en muchos casos con tenencia ilegal y con historias de vulneración que las comunidades incluso se cuidan de apalabrar, prefieren el silencio o los gestos; solo en ocasiones dejan escuchar su sentimiento al respecto:

“Mire señor, aquí en el Crucito, en Saiza, mucha gente ha vuelto con eso del Acuerdo porque ha pensado: “pues me van a devolver la territa”, entonces han regresado a donde los sacaron y se han encontrado con que la tierra está ocupada, no es una tierra baldía, está cultivada, con casa, cerca y todo. Porque aquí hay corregimientos que desaparecieron íntegros: La Gloria, El Venado, Santa Isabel, estaban en el nudo de Paramillo, pero ahora ya no están, y uno creería que con esto se podría regresar, volver ¡pero no!”.

Líder Tierralta Córdoba.

Ante la pregunta por las razones que expliquen la falta de avance en la recuperación de la tierra mediante mecanismos de gestión jurídica se encuentra que faltan ese tipo de herramientas o se tiene un entorno que ni siquiera considera esta opción por razones de sobrevivencia; la respuesta más recurrente es:

“No hay cómo, uno sabe que eso le puede costar la vida, es mejor dejar los santos quietos”.

Poblador Anorí.

Otra forma de impedir la recuperación de tierras es la oposición que se vale de medios violentos para intimidar a reclamantes de tierra. Esto solo para referirnos a algunos de los hechos que muestran la recurrencia de prácticas coactivas para disuadir a las víctimas del despojo de recuperar los terrenos de los que han sido obligados a salir.

“En el Bajo Atrato, Concretamente en la Larga y Tumaradó, en el Necoclí, Mutatá, Riosucio y Carmen del Darién han recibido panfletos por parte del Clan del Golfo en donde se les advierte que desistan de sus pretensiones de recuperar tierra.

Informe Chocó.

“En el Norte del Cauca un supuesto panfleto de las Águilas Negras amenazó a líderes del movimiento de liberación de la Madre Tierra”.

Informe Cauca.

Pero no es sólo que se impida el acceso a la restitución, sucede también que hay compras en condiciones desiguales que se efectúan aprovechándose de las precarias condiciones de vida de los pobladores. En el Cauca, en el recorrido por la zona de Buenos Aires, Santander, Pescador y Miranda, hay nuevos dueños de pequeñas parcelas y hay noticias de compradores que circulan sus ofertas hacia los lugareños de la región. Al preguntar a una líder indígena del sector expresó:

“La gente ha vendido porque le pagan mucha plata, les dan hasta diez veces lo que vale el predio, entonces las familias echan lápiz y se meten. Toca ver hacia adelante es si con esa plata logran vivir bien. Yo creo que con eso les alcanza para comprar una casa en Santander o en Cali y a buscar trabajo. Entonces quién sabe qué tan buen negocio sea. Y cuando se va a preguntar quién les compró ahí si aparece el misterio, es don “cualquiera”.

Informe del Cauca.

Coinciden estas observaciones con el hecho constatado de que en los lugares donde se están realizando las compras de tierra son zonas de ampliación del cultivo ilícito, de rutas de narcotráfico o están asociadas con entornos donde se ha practicado la bonanza de la minería ilegal o con enclaves asociados a diverso tipo de actividades ilícitas.

“En Buenos Aires, por ejemplo, al lado de los nuevos pobladores hay varias bombas nuevas de gasolina, en lo alto de la montaña, en donde el producido percibido por venta a vehículos se presume bajo; debido a la poca circulación de automóviles. Una se pregunta de dónde y para qué es que funciona ese negocio por acá si poco venden”.

Pobladora Norte del Cauca.

También se observa la emergencia de conflictos por la propiedad de la tierra entre campesinos y latifundistas, especialmente en territorios donde están diseñados macro-proyectos de monocultivos de palma de aceite, soya, caña de azúcar, caucho, maíz, y maderables entre otros; así como en grandes planicies destinadas a la ganadería. Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano en el último informe sobre seguridad y política (2017) refiere la situación de la altillanura de la siguiente manera:

“El Departamento Nacional de Planeación, en enero de 2014 expidió el CONPES 3797, más conocido como el CONPES de la Altillanura, el cual brinda los elementos de política para el desarrollo integral de la Orinoquia, tomando como fase 1 la subregión de la Altillanura. Dentro de sus objetivos está crear las condiciones sociales y económicas para lograr un desarrollo incluyente y sostenible, basado en la construcción de un modelo de región a partir de la infraestructura, el ordenamiento del territorio, propiciar las condiciones que incentiven la inversión para aprovechar el potencial agropecuario y agroindustrial, así como ampliar las capacidades institucionales. Todo esto bajo un marco de seguridad jurídica para la inversión privada. Los recursos económicos principales se destinan a la infraestructura¹ que abarca el 95% de lo asignado² y según el Plan plurianual de inversiones 2015 – 2018 se prevé destinar \$48,5 billones para la región, principalmente para proyectos de infraestructura. A través del CONPES se asignan también estímulos a la reforestación, a la producción de agrocombustibles.

-Sin embargo- se conoció que quien estuvo en la gerencia de la elaboración del CONPES fue José Leivovich, persona que ha sido miembro de la Junta Directiva de Corficolombiana, empresa cuyo dueño es uno de los hombres más adinerados del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien no sólo es banquero, sino que además tiene fuertes intereses en esta región, ya que como se desarrollará más adelante posee negocios en la agroindustria de la palma, forestales, construcción de obras de infraestructura como la doble calzada Bogotá-Villavicencio, por mencionar algunos.

Adicional a ello, un importante mercado para

¹ Algunos de estos son: la terminación de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, la consolidación del corredor Puerto Gaitán- Puerto Araujo y Bogotá, la navegabilidad del río Meta.

² CONPES 3797 de 2014

el tráfico de mercancías ilícitas como cultivos de coca, marihuana y amapola, pasta de coca, y el intercambio de productos agrícolas no solo para los departamentos aledaños, sino para Venezuela y Brasil, precisamente por las diversas y efectivas interconexiones naturales (ríos y serranías) utilizadas para tal fin con la región amazónica, la Orinoquia y el sur hasta el Putumayo.

Todo lo anterior, parece apostarle a un proceso de agro industrialización como propuesta de gobierno, en tanto las formas como se vienen presentando modificaciones jurídicas para la implementación de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES). -Ley 1776 de 2016-, que tiene como principales objetivos, a) legalizar la acumulación de baldíos que realizaron empresas nacionales y extranjeras por distintas modalidades y en donde la Altillanura fue el epicentro; b) autoriza la concesión de baldíos a empresas privadas; c) cataloga dichas zonas como de utilidad pública e interés social favoreciendo así la concentración de tierras; y d) promueve las alianzas estratégicas entre campesinos y grandes empresarios, en donde los primeros básicamente servirán como mano de obra para el beneficio del capitalista que recibirá subsidios y demás dividendos del negocio”.

Informe bimestral Pastoral Social.

Esta fuerte conflictividad por el territorio se agudiza en el marco de la implementación del Acuerdo pues, por un lado, en el marco de la RRI se impulsa la formalización de siete millones de hectáreas con lo que se esperaba se priorice a los pequeños poseedores, esto es la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y de otro, la ZIDRES también garantiza derechos a los terratenientes sobre las mismas tierras. En el marco de ese conflicto, la Corte Constitucional, en febrero del presente año, en su Sentencia C-077/17³ declara exequible la Ley 1776-2016, por la cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, ZIDRES, (Corte Constitucional, 2017), generando condiciones desiguales de acceso a la tierra para el campesinado pobre, en la medida en que no se genera protección especial a la UAF; además sin que el catastro multipropósito haya entrado en funcionamiento, los campesinos están en desventaja, tal como lo expresó una líder del CMDR de Florida, Valle del Cauca.

³ La sentencia es una respuesta a la demanda interpuesta por los ciudadanos Rocío del Pilar Peña Huertas, Ricardo Daniel Álvarez Morales, María Mónica Parada Hernández, Luis Enrique Ruíz González y Santiago Zuleta Ríos.

“La ley de ZIDRES nos pone en desventaja, porque los poderosos siempre tienen más abogados y más capacidad de hacerse oír, uno se va quedando en desventaja, entonces van a provechar que no hay títulos y van a legalizar toda su tierra conseguida de cualquier forma, arrebatada por las malas a gente humilde, como somos nosotros”.

En ese mismo sentido, es clave recordar que en el proceso de negociación de La Habana las comunidades indígenas y afrodescendientes hicieron un ejercicio de incidencia que les permitió concertar el Capítulo Étnico de los Acuerdos; debido al conocimiento que tienen las comunidades étnicas, en ese documento se acordó: “Participación de los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones representativas en la creación de mecanismos para la resolución de conflictos de uso y tenencia” (Capítulo étnico del Acuerdo).

“Los resguardos indígenas fueron titulados primero, el territorio colectivo afrodescendiente vino después. No hubo amojonamiento ni saneamiento a tiempo y ahora hay dificultades. Además, el Incoder hizo ampliaciones de resguardos inconsultas y hay dificultades en Truandó y Salaquí. Pero la verdad a la fecha nosotros, como Consejos Comunitarios no sabemos qué está pasando con el Capítulo Étnico, sabemos que nuestra representante está haciendo gestiones en Bogotá, la semana pasada estuvo, pero la verdad no les queda tiempo para hacer aquí en el territorio más gestiones”.

Testimonio Grupo Focal de Riosucio.

Estas tensiones territoriales para definir límites y modos de vida deberían resolverse normalmente con la participación de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos⁴, sin embargo una de las participantes esbozó la dificultad para lograr que las diferencias por el territorio se trabajaran desde este dispositivo adscrito a la CSIVI:

“Este año ha sido para conformar la Instancia y construir la agenda, lo cual se ha logrado en gran medida debido a la presencia y presión que hemos realizado, sino el capítulo étnico estuviera escondido, por eso ir a los territorios no ha sido posible ir a diagnosticar y apoyar las autoridades étnicas para que ellas tengan herramientas, la cosa está en pañales, pero los problemas sí se multiplican”.

⁴ En el presente año se conformó la alta Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos.

Así las cosas, la ineficiencia institucional y los accidentes en la gestión gubernamental, así como las restricciones en la participación de las comunidades, se convierten en una práctica que impide el reparto justo de respuestas alternativas y la solución de conflictos.

Por otra parte, uno de los conflictos más complejos y difíciles de resolver se presenta en los territorios en donde no se puede legalizar la tenencia por la vocación ambiental de las tierras. El problema no es nuevo, desde el año 1959 cuando se regularon las Zonas de Reserva Forestal y Bosques Nacionales en estos territorios habitaban familias, sin embargo se legisló sin tener en cuenta la existencia de estos pobladores, como si el territorio estuviera vacío. Posteriormente los habitantes han sido víctimas de nuevos desplazamientos y despojos debido a la presencia de autodefensas, grupos insurgentes y narcotraficantes. La implementación de los Acuerdos de La Habana revive expectativas de habitantes de la alta montaña, especialmente del Paramillo, del Parque Nacional Farallones, del Macizo Colombiano y la Macarena. El problema central se genera al tratar de establecer quiénes son moradores ancestrales y quiénes han llegado por la efervescencia del momento, entre ellos empresas legales e ilegales. Por fuera de la degradación ambiental que implica la ampliación de la frontera agrícola, los nuevos ocupantes pretenden burlar la norma legal para encontrar los argumentos que les permitan beneficiarse de las posibles desafectaciones de la tierra.

“Ellos siguen insistiendo en que son propietarios, nosotros les hemos planteado que por aquí vengan con papeles y con la institucionalidad para evitarnos el lleve y trae; porque ya quien ponía en orden esos asuntos no está operando; entonces que vengan con algo de autoridad y vemos quién tiene la razón, pues de lo contrario terminamos es en chismes y en problemas como los que se están viendo ya en estos días. Vamos a ver si acordamos algo y quien aparezca que brinde garantías, nuestra palabra está en que no agredimos, pero eso si no dejarnos agredir tampoco, eso no es que ya se vienen a invadir predios o a tirar bosque protegido al piso sin ninguna regla, no así no...”

Poblador Caquetá.

De esta manera se reconoce que la disputa por la tenencia de la tierra no solo tiene que ver con la propiedad, sino con el manejo de los recursos, las relaciones interétnicas, los poblamientos, las vocaciones territoriales, los usos sobre la tierra,



Río Atá - Vía Ataco Planadas 2017

los modos de ocupación. El meollo de fondo es que la apertura que hace el Acuerdo en torno a la devolución de tierras y formalización del campo no se ve acompañada de instrumentos para frenar la violación a los derechos ancestrales de las comunidades y las víctimas, impidiendo el despojo o la legalización a poseedores de mala fe o quienes obtuvieron tierras por medios violentos e ilegales. En medio de esas situaciones se dificulta impulsar actuaciones públicas con una visión integral y cultural del territorio que impliquen la configuración de territorialidades más armónicas ambiental y socialmente.

2.1.2. La paz y la minería.

“Ahora hay menos retro. Hay mucho aspreviento que vienen monos a medir y a hacer delimitaciones y pruebas que por el cobre, pero no se sabe mucho; lo que sí suena a cada rato es la dinamita; antes cuando había explosiones era combate fijo, ahora explosión es que están abriendo el roto para entrar por material y eso sin control pone este sitio muy peligroso, ya no se puede trabajar a lo bien, nosotros estamos por salir pa’ otro lado menos bravo...”

Poblador Montelíbano.

Según lo observado, conflicto armado y minería legal e ilegal regularmente van de la mano, especialmente porque las actividades ilegales son una fuente de financiación del conflicto. Hay gran desacuerdo sobre los efectos de la economía minera a gran escala y sobre las condi-

ciones de vida de las poblaciones asentadas en áreas mineras. Un observador territorial de Norte de Santander narró de la siguiente manera los hechos:

“En el municipio de Sardinata, sobre el corredor vial que comunica los corregimientos de Luis Vero, Las Mercedes, El Carmen y San Martín de Loba, campesinos denuncian aumento de minería legal, ilegal y artesanal. Entre los implicados directos de esta práctica señalan entre representantes del Gobierno departamental y nacional que no regulan de manera clara estos procesos, empresas multinacionales que son principales agentes económicas promotoras de la actividad minera y actores y grupos armados que operan en la zona y que asumen el control y la regulación ilegal.

De los efectos tempranos generados por la extracción del carbón se halla la contaminación de fuentes hídricas, por manipulación de insumos químicos y de explosivos empleados para este procedimiento. La legalidad e ilegalidad de la minería extractiva en este sector de la región se ha convertido en formas de ocupación territorial en propiedades privadas; en la actualidad, a los propietarios del predio en el que se encuentra la mina o el punto de extracción se les retribuye económicamente el permiso de dejar explotar el carbón de su finca”.
Informe Norte de Santander.

La extracción minera y otros recursos mine-ro-energéticos en las regiones son considera-dos mecanismos de permanencia territorial es-pecialmente de actores y grupos armados con presencia en la zona, ya sea para promover o rechazar con armas, las actividades productivas asociadas a la minería. Esta modalidad ha refor-zado acciones que aumentan prácticas de tráfi-co de economías ilegales y de contrabando de minerales que son transportados hacia el centro del país. Esta dinámica en el contexto pos deja-ción no se ha visto disminuida ni controlada y por el contrario en áreas específicas se expande.

“En este Norte del Cauca lo que hay son re-troexcavadoras, vaya pregunte por los dueños a ver quién resulta y vea si los propietarios son de acá y vera que no, nosotros los mineros de acá estamos sometidos a un régimen terrible, si no salimos a la faena hoy no comemos hoy; el que sí se llena los bolsillos no vive acá y es el que paga espantapájaros armados para su seguridad; nosotros somos los que vivimos inse-guros, en medio de la hostilidad y sabiendo que esto es malo pues lo aceptamos porque no hay más na...”

Minero Norte del Cauca.

El conflicto con el extractivismo minero tiene que ver con las condiciones de desigualdad y pobre-za como un asunto de suma importancia que re-fería un poblador en Tibú en los siguientes térmi-nos: *“la minería sirve para sobrevivir, para nada más. Mi papá fue minero, yo también y quisiera que mis hijos y mis nietos no tuvieran que pasar por esto... ojalá se logre algo de control y de al-ternativas ahora que están hablando de paz”*. De acuerdo a los amplios testimonios presen-tados en todos los corredores del posacuerdo, este tipo de actividad sin los adecuados contro-les y regulaciones técnicas es una economía de enclave que transforma la territorialidad por su enorme impacto ambiental a la vez que man-tiene una enorme desigualdad, generadora de ambientes de disputa y propensión a las armas.

2.1.3. Las vicisitudes que produce el narcotráfi-co.

El incremento por siembras de coca en este periodo, para solo referirnos a la plantación de cultivos ilícitos, fue recopilado así en una entrevista a un líder comunitario del Putuma-yo⁵:

⁵ Una descripción más detallada del crecimiento de cultivos ilícitos se encuentra en el Informe Número 3 y en el 4.

“Si usted se pone a caminar por aquí se en-cuentra que hay más zonas sembradas con coca de las que había en el 2016, toda la montaña está llena, también el bosque y pla-nicie. Eso era de esperarse en parte, porque con esa bulla que hicieron diciendo que con la sustitución iban a dar un poco de cosas, pero la verdad ha sido otra. Firmaron el acuerdo de sustitución y luego llegaron a tumbar matas a la fuerza y de los compromisos de eso si no se ha visto nada. Yo sí creía que el gobierno iba a ser más serio con eso, pero nada. Lo que sí hay más son raspachines, cocineros, con todo lo que traen siempre”.

Igual situación se presenta en Tumaco, en don-de una zona de Consejo Comunitario Altos de Mira y Frontera se ha visto afectada gravemente por la dinámica de defensa y expansión del cul-tivo por parte de colonos mestizos; en Norte de Santander (Sardinata, El Tarra y Tibú) donde la franja de coca es impulsada por Bandas crimi-nales y otros grupos insurgentes y disidencias; en Policarpa (Nariño) donde el negocio de coca no solamente crece, sino que muta hacia otras dinámicas del negocio:

“El año pasado acá hicieron erradicación forzada y, pues, uno de algo tiene que vivir y tiene que mantener la familia, no nos podemos morir de hambre, entonces tiramos un poquito del cultivo monte arriba y con esos poquitos nos hemos puesto a procesar manualmente coca, en la casas de aquí de la cabecera”.

Habitante de Policarpa Nariño.

El conjunto de las situaciones en las diversas re-giones muestran que cuando no hay una solu-ción a la problemática de sostenibilidad familiar del campesinado, lejos de erradicarse el fenó-meno se genera una nueva acción colectiva en la cual los cultivadores inmersos y muchas veces dependientes de redes más amplias del comer-cio de narcóticos terminan en medio de gran-des indefiniciones; en la Montañita, Caquetá un líder de una Junta de Acción Comunal expresó:

“Por acá todos los cultivadores estaban listos para meterse, se firmó acuerdo de sustitución porque pa’que pero la Marcha Patriótica y la COCCAM ayudaron a hacer el censo, pero después no llegaba nada y la gentes se fue arrepintiendo. Todo el bororó que uno escucha de la situación de Tumaco hace desconfiar”.

Mientras eso sucede en la relación entre el Es-tado y los cultivadores, en las relaciones con las

redes mafiosas fluyen con mayor rapidez y diligencia los asuntos del negocio individual e incluso de respuestas colectivas; por ejemplo en una de las primeras visitas de este año a Policarpa, Nariño, en una reunión citada por la alcaldesa del municipio para priorizar las pequeñas obras de infraestructura, una líder participante expresó lo siguiente:

“Usted no tiene la carretera en el mapa alcaldesa pero por aquí pasa una carretera, ya existe, con salida al mar, es importante para la producción agrícola, aunque uno se preocupa porque efectivamente seguramente por ahí se va a mover de todo: drogas, armas... ¡mejor dicho!”.

Esta última referencia evidencia cómo esta economía ilegal cambia la territorialidad, en el sentido de transformar una vereda en un sitio en donde se congrega población y se prestan servicios, se construyen vías que comunican unos poblados con otros y se generan nuevos negocios y formas de morar y usar los territorios.

Respecto al tráfico de drogas de uso ilegal, las zonas de frontera y las tradicionales rutas se mantienen en gran medida, aumentando la presencia de modalidades ingeniosas para pasar desapercibidos. Por ejemplo, en Riosucio (Chocó), una de las rutas tradicionales del tráfico de drogas ilícitas, ha incrementado la utilización de jóvenes para el transporte del alcaloide; el método consiste en que se carguen en la espalda un morral y la pasen a Panamá por la frontera terrestre atravesando el tapón del Darién.

En términos generales la percepción en muchos lugares es que los agentes del narcotráfico han obrado en este momento con cautela, pero sin dejar de operar su agencia de tráfico, por eso hay rutas funcionando, cultivos pagos, y la gran maquinaria mantiene la operación a pesar de la lucha gubernamental contra estas estructuras, teniendo además en cuenta que se conoce mucho de la persecución al cultivo y a los cultivadores, pero hay insuficientes acciones frente a la dinámica de producción y comercialización mayorista del alcaloide.

2.1.4. Informalidad, pobreza y reincorporación.

Otro asunto de la dinámica de implementación de los Acuerdos en el 2017 que proyecta tensiones en el periodo venidero está asociado con las gestiones de la reincorporación de los

excombatientes en condiciones de sostenibilidad. Esta dinámica hace crisis y pone en riesgo el proceso. Básicamente las gestiones jurídicas y los mecanismos de seguridad física han avanzado en lo mínimo, pero las condiciones de reincorporación socio económica han sido muy limitadas y hacen presión, no solo sobre los reincorporados, sino sobre sus familias y sus entornos de vecindario en las hoy llamadas Zonas de Capacitación y Reincorporación. De otro lado, las FARC visualizaban que durante el proceso de dejación de armas se iban a esbozar y viabilizar iniciativas productivas en el marco de ECOMUN, asunto que ha sido escasamente una expectativa aplazada. En Dabeiba, el excombatiente de las FARC que nos recibió expresó:

“Yo siempre tuve desconfianza y se los dije en La Habana, esta gente no nos va a cumplir, pero ello nos convencieron. A nosotros nos la habían pintado diferente. Creíamos que cuando llegáramos a las ZVTN nos iban a dar los recursos para los proyectos productivos y entonces tendríamos la opción de crear cooperativas y asociaciones. Por eso usted ve lo que hemos hecho aquí, todo lo relacionado con el turismo. La apuesta de la organización estaba centrada en impulsar la creación de cadenas productivas, generando alianzas con actores locales para ganar una ventaja comparativa. El contraste entre lo planeado y lo que aconteció es inmenso. A la fecha, ECOMUN no logra despegar y mucho menos está clara la ruta de las propuestas productivas, generando una sensación de frustración tanto en los excombatientes como en las comunidades, quienes observan con recelo el incumplimiento y lo proyectan al campo propio”.

A pesar de la situación descrita anteriormente, el proceso de dejación ha permitido el diseño de alternativas productivas, especialmente en las zonas donde las FARC tuvieron mejores condiciones de seguridad y por lo tanto tuvieron un relacionamiento más directo con las comunidades; tal es el caso de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca y algunos municipios del Bajo Cauca Antioqueño, en los cuales se observan emprendimientos colectivos de los reincorporados que buscan mantener una actividad en clave de inclusión en las economías legales.

“Aquí hemos estado trabajando todos los días, tenemos un pequeño sistema de aserrío, que no daña los árboles, sino que proyecta bien el bos-

que, tenemos carpintería y todo lo relacionado con la madera; mira como está esta Zona de bonita, cada unidad familiar armó bien bonitas sus camas y salas; hasta hay gente de áreas aledañas que nos va buscando para contratas más o menos buenas, pero si no hay la semilla, un proyecto para desarrollar estas propuestas pues la gente se va aburriendo y cada quien a buscar pa donde. Eso es lo que quieren..."

Reincorporado Charras Guaviare.

Pero también alrededor de las Zonas Veredales se ha construido toda una dinámica económica en torno a la movilidad que generan los nuevos asentamientos y se han desarrollado nuevas prácticas productivas desde la informalidad, ligada básicamente a los servicios que las nuevas rutas y asentamientos generan. Así lo relató una camarera de un hotel en Puerto Asís:

"Aquí se ha incrementado el servicio de mototaxis, el comercio ha aumentado, los hoteles se llenan, hasta se han tenido que construir unos nuevos, este por ejemplo está recién hecho. Yendo pa'allá donde están los de las FARC hay más tiendas... en fin, los negocios son más. Aunque uno no sabe si cuando dejen de ser noticia venga tanta gente, pero bueno, seguro de ellos vienen más, porque yo no creo que de aquí se vayan. A propósito, usted conoce por allá en donde ellos están, yo iba a ir el otro día pero como el río se llevó un pedazo".

Así las cosas se gestan iniciativas colectivas y alternativas productivas informales, pero para que se avance en la línea de una democratización económica se requiere una presencia más robusta y ordenada de la institucionalidad pública y privada en función de impulsar y proyectar la asociatividad y las capacidades y potencialidades productivas de la población rural. En la medida en que esto no está sucediendo de manera precisa y sostenida, son los actores y las prácticas de la ilegalidad las que más ventaja sacan del momento.

"Mire estamos cansados de ver cómo van tirando nuevos bosques al piso para hacer nuevas fincas, eso llegan aquí bastantes, dicen que tienen títulos desde la capital, que ya compraron, y uno no sabe, pero eso van quemando bosque y armando rancho y caserío de una vez y no hay quien controle eso; se dice que son vividores cogiendo plaza y se ve que tiene respaldos para hacer eso. Entonces uno mira pero no se mete."

Poblador vía la Cooperativa Meta.

Si revisamos de manera panorámica la relación entre la implementación del Acuerdo y la red de relaciones de conflicto y cooperación económica en que estaba inserta las FARC-EP, podremos reconocer que la expectativa de devolución y formalización de tierras a sectores campesinos y étnicos se queda atrapada en la lógica ilegal que encuentra en los vínculos armados presentes en las regiones copando espacios transformadores que desde el Estado se pretenden agenciar; esto es, anticipando la actuación criminal a la presencia estatal.

Los ejes centrales de esta disputa se visualizan entre una re-territorialización agenciada desde el gobierno y esperada por los sectores campesinos y étnicos, producto de la implementación del Acuerdo y otra desde los enclaves legales e ilegales de la economía que se centran en la tierra, los cultivos de uso ilícito y el subsuelo.

2.2 La Hegemonía de un Capital Colectivo Perverso.

"Uno viendo ahora el tiempo que hemos vivido se pregunta ¿Cómo es posible que nos hayamos adaptado a vivir en medio de tanta ilegalidad? Todos pensamos así, no siempre lo decimos de esa manera, a veces es un: ¿usted no se imagina lo que es vivir aquí?".

Observador Bajirá.

Uno de los interrogantes que se expresa de mil formas en todos los rincones por donde ha transitado el conflicto político armado y que a veces es una simple mirada o un gesto desgarrador es: aquí nos tocó vivir, ¿qué más hacemos? Desde el ejercicio de observación a las ZVTN y PTN (hoy ETCR) nos aproximamos a estas inquietudes vitales a partir de describir prácticas como el apoyo solidario, la capacidad de asociación y el rebusque como ejes vitales de la vida en común son reconfiguradas y desvirtuadas al interactuar con economías ilegales, logrando pervertir el capital social con efectos en la profundización de la desigualdad, la formación de grupos de interés que no respetan las normas colectivas, la restricción de libertades individuales y comunitarias y la reproducción de actores que basan su actividad productiva en la agresividad y la violencia. Veamos ese panorama a la luz de lo observado en este periodo.

2.2.1 Redes sociales y captura por la ilegalidad.

Hay diálogos que expresan de manera precisa los dilemas y las incertidumbres que viven las co-

munidades rurales a instancias de las gestiones en el posacuerdo; recreamos a continuación un breve intercambio de tarde norte caucana:

“Vea, aquí lo que se debe hacer, es lo mismo que hacen cuando vienen a recoger las retroexcavadoras de la mineras. Cuando está llegando el operativo de la fuerza pública, ya desde abajo todo el mundo está avisando y va cogiendo loma y ¿quién dijo?, ¡no pueden hacer es nada! Estos días como la gente está sin trabajo porque nos arrancaron a la fuerza el año pasado la coca, pues lo defiende con más ganas. Así mismo toca que funcione la guardia cimarrona”.

Otro líder interpeló a la mujer:

“Lo que pasa con eso es que la misma gente que vive de la minería tiene familia y compadres en toda esta zona, de aquí pa' abajo, entonces cuando ven subir el Ejército avisan porque ahí está el primo, el sobrino y bueno... Desafortunadamente ya no estamos en los tiempos en donde en Suárez, por ejemplo, nosotros mismos sacábamos la máquinas, ahora ellos –las mineras- cuentan con personas de acá mismo que los defienden porque están dando empleo, bueno o malo o lo que sea, por eso las mineras se han ido ganando su gente. Hacen lo mismo que nosotros pero con otros fines”.

Este breve fragmento, evidencia varias situaciones: Primero, efectivamente, la red familiar y vecinal funciona, existe, independientemente de la presencia de la economía ilegal; lo que sucede es que por momentos apoya finalidades que no están al centro de la red pero que se entrecruzan porque afectan a algunos miembros de los núcleos familiares y vecinales, por eso los vínculos de afinidad y solidaridad actúan. Segundo, las economías ilegales han logrado, de muchas maneras, insertarse, así sea parcialmente, en las redes familiares y vecinales presentes en el territorio. No es que simplemente lo instrumentalicen, es que llegan a resolver los problemas existentes en la zona: la necesidad de sustento diario, la falta de empleo, la dificultad para sobrevivir del cultivo de la tierra, generando interacción e involucramiento; es decir, resuelven asuntos que el Estado y la sociedad deberían proveer. Tercero, el vínculo territorial del actor ilegal no se ejerce meramente por la vía del ejercicio armado o por una estrategia instrumental diseñada por un agente, se agencia desde los tejidos existentes. Cuarto, en este momento de implementación

del Acuerdo, en los corredores donde se produjo la dejación de armas muchas de las economías ilegales se han deprimido, afectando el sustento de las poblaciones, provocando que actores al margen de la ley presentes en estas zonas ganen mayor apoyo territorial.

De otro lado, en lo referido a las redes locales y el microtráfico, en casi todos los corredores de las ZVTN y PTN se ha reportado el incremento del consumo de sustancias. En el municipio de Anorí, en un grupo focal en un colegio nos decían:

“Si hay quien compre hay quien venda, no sabemos cómo pero esto se ha llenado de ollas⁶, en todas las cuadras hay una. Uno no sabe ¿de dónde sale tanta gente pa' consumir eso? Pero dígame, uno cómo se hace para parar eso, si uno se mete a decir algo si ellos tienen respaldo, es mejor comer callao”.

En varios entramados suburbanos y en las cabeceras municipales ligadas a los corredores del conflicto las redes de expendedores de drogas (proveedores de las sustancias, distribuidores barriales, compradores) crecen y se insertan en la dinámica barrial y vecinal. A diferencia de la red de minería ilegal, el microtráfico requiere para su funcionamiento, no tanto de solidaridad y apoyo, sino control territorial para evadir la acción policial y de la justicia, lo cual se logra mediante el ejercicio de una violencia basada en un silencio cómplice que sin embargo no deja de estar cargada de malestar y resistencia.

Es importante aclarar sobre el anterior aspecto crítico que, aunque se presenta un incremento de redes de microtráfico y de consumo, no se puede leer como una consecuencia de la dejación de armas, pero se da en paralelo con el proceso de implementación en esta primera fase y por ende afecta las relaciones vecinales y los tejidos sociales locales y regionales existentes.

Por otro lado, tanto en el caso de la minería ilegal, como en el microtráfico, se acentúa la interacción relacional entre estas economías ilegales con las redes vecinales haciendo que de diversas maneras se permita que estos negocios ganen el espacio social necesario para permanecer en el territorio. Las agencias gubernamentales y las fuerzas del orden llegan, pero tienen dificultad para leer, interpretar y conectarse con las culturas locales, con los tiempos y espacios cotidianos, con las necesidades más urgentes de la población; asuntos sobre los cuales las redes criminales tienen pericia y experiencia.

⁶ La olla hace referencia a los sitios donde se venden drogas de uso ilícito para el consumo.

2.2.2. La informalidad económica y población disponible.

Un rasgo muy reconocido en la vida rural y en las zonas de conflicto es la falta de condiciones productivas y de sustento personal y familiar. Especialmente se registra una extendida informalidad, la existencia de intercambios desiguales y poco regulados, así como los altos rangos de población disponible para trabajar que no solo está inactiva, si no que no tiene expectativas y /o posibilidades de acceder a una oportunidad así sea informal. Todo lo anterior les sitúa en escenarios de vulnerabilidad social y riesgo de asumir actividades ilegales para su sobrevivencia.

“Aquí hay que ser muy flexible, porque muchos de estos niños de ocho y diez años, ahí donde usted los ve como personas con gran potencial deben ausentarse por semanas porque se van de raspachines para ayudar a la familia con el sustento, se retiran una o dos semanas y regresan cuando hayan conseguido el dinero que la familia necesita, bien sea para ropa, salud u otros asuntos, entonces imagínese “esos niños tan pequeños y ya todo lo que deben haber oído y aprendido! En la escuela uno trata de ayudar en la formación pero... Este año no han desertado tantos niños, pero como los cultivos están más adentro, en el bosque, se ausentan por más tiempo”.

Docente de Meta.

Un claro referente de la situación actual en las zonas de conflicto y/o en transición que coinciden con zonas cocaleras es el raspachín, quien recoge la hoja de coca, trabaja temporalmente al destajo, mientras se ocupa en cualquier otro cultivo, y cuando termina su labor vuelve al rebusque a trabajar en lo que el día traiga. El raspachín hace parte de una de una de las ocupaciones productivas más referenciadas por los habitantes de estas zonas y se enlaza centralmente con la falta de otro tipo de oportunidades reales.

“Entre la población indígena ha aumentado el consumo de sustancias psicoactivas, prostitución infantil y familias donde el encargado del grupo es un menor de edad; sea porque son huérfanos o porque sus padres están en la guerrilla. Muchos de estos grupos indígenas en especial los Nukak no tienen tierra, eso porque son nómadas y sus cosmovisión los hace creer que todo lo de la naturaleza les pertenece, así que ellos son utilizados como raspachines y ahora asumidos como consumidores”.

Líder social Guaviare.

En la dinámica productiva en los corredores de posesión, la informalidad asociada al conflicto violento que afecta a las poblaciones de manera dramática se mantiene de formas muy diversas. Veamos de modo sintético otro caso en el cual emergen de manera abrupta tensiones de carácter humanitario. Un sacerdote en Riosucio (Chocó) en el marco de la segunda visita al municipio nos explicaba:

“los indígenas que está viendo deambulan por la calle, las mujeres indígenas con sus hijos entran a los restaurantes porque en el reciente desplazamiento, producto de los enfrentamientos entre el ELN y los grupos posesión, han tenido que dejar sus casas y trasladarse hacia la cabecera municipal. En estos días viven con sus familias en la calle o arrimados en casa, no hay refugios ni nada, pero por estos días aquí hay hacinamiento”.

Esto implica que en la medida que el despojo y el desplazamiento se mantiene producto de nuevas conflictividades armadas, la población que vive en la informalidad, esa población flotante, está en las calles, disponible, sin el sustento diario, con necesidades apremiantes y con ofertas ilegales para resolver su situación que pasan por oficios y tareas muy sencillas, a veces inesperadas, pero conectadas con la contingencia y la presión del entorno:

Yo toda la vida he hecho canastos en este pueblo, somos familia de cestería desde que me cuentan que existimos; incluso en tiempos de todas las guerras hemos tirado amarres del día a la noche, pero ahora las cosas están pesadas y las muchachas, después de esta última salida por la friega de esa gente extraña, se han ido a meter a esos sitios de mala vida; pensábamos que eso de la violencia se iba a acabar, que por lo menos hasta acá no iba a llevar, pero vea, las jalaban por el dinero y dejaron los canastos; uno lo que hace es rezar y llorar, pensando que no les pase nada. Todas las chicuelas primas y hermanas se han ido por allá.

Mujer Cestería Nariño.

En resumen, el informal que es quien no tiene tierras, no cultiva, sólo vende su fuerza de trabajo en lo que el día traiga, vive en la más profunda inestabilidad financiera y social, no logra en este periodo ser afectado por las medidas y gestiones de la implementación de los Acuerdos. Su gran vulnerabilidad hace que se vincule por períodos cíclicos en acciones que están en el marco de la ilegalidad, generado de alguna forma,

capacidades y disposición a vincularse de manera permanente en la cadena criminal que le circunda. La ilegalidad se alimenta de la informalidad reinante en los corredores que hemos explorado en la observación.

2.2.3. La expresión colectiva y los cultivos ilícitos: en contravía de la potencia asociativa de la población rural.

“Primero vinieron aquí de desplazados y de colonos mestizos pobres buscando donde sobrevivir, les pusimos las reglas claras siempre dijimos que estaban de paso y que no se podían quedar; después se juntaron con el grupo armado y comenzaron a sembrar de esa vaina, nos jodieron nuestro territorio y nos han matado gente, eso no es nuevo. Nosotros queremos que nos erradiquen ya esos cultivos pero ellos ahora, con el cuento de la paz, vienen a negociar con nuestros territorios ancestrales y buscando decidir sobre lo que no es y nunca fue de ellos”.

Habitante Consejo Comunitario Nariño.

La instrumentalización de las movilizaciones sociales es una de las prácticas que hemos observado en diversos corredores de posacuerdo. Este fenómeno desvirtúa la capacidad asociativa, tensiona las relaciones interculturales y hace que la reivindicación social y económica pierda potencia por no tener la fuerza que brinda la autonomía. Una de las movilizaciones más emblemáticas que ha irrumpido en el período de dejación y posejación de armas es la relativa al movimiento cocalero, emblemática por la capacidad de convocatoria, por la presencia pública.

“Las personas de la comunidad están de acuerdo con la sustitución voluntaria, pero están inquietas porque no se tiene claridad sobre cuáles son las condiciones en las que se va a dar ese proceso; también hay preocupación sobre las parcelas que se les erradicó a la fuerza y tenían disposición a realizarla voluntariamente. Estas personas se preguntan si también van a recibir las ayudas del gobierno. En las familias se empieza a ver preocupación por la situación económica, porque la coca ha sostenido una parte muy importante, el desempleo ha empezado a crecer en estas comunidades... Detrás de cada mata de coca es mucha la gente que depende de ella”.

Habitante Nariño.

Uno de los problemas señalados en el testimonio precedente se asocia con el hecho de que el gobierno nacional realiza erradicación voluntaria y forzada simultáneamente y sin suficiente

claridad, dando pie a desinformación sobre las medidas a emprender; por tanto, la ruta de implementación se llena de incertidumbre y genera desconfianza en las comunidades y los PNIS se vuelven casi que imposibles de ejecutar. El llamado urgente de Tumaco es generar un mecanismo para que la implementación del Acuerdo se territorialice en estos aspectos específicamente, esto es implementar un programa que se diseñe y aplique conforme a las dinámicas particulares de cada zona.

Otro de los ejes problemáticos está relacionado con la manera particular como se insertó la coca en los territorios, asociada con procesos de recolonización de los territorios y con el cambio progresivo de la vocación de las zonas agrícolas. En palabras de un líder afrodescendiente de Tumaco así se presenta la situación:

“Acá la gente se dedicaba a la agricultura básicamente a la siembra de plátano, yuca, cacao y arroz; hace más de diez años se vio una colonización, si podemos llamarlo así, de mestizos provenientes del Putumayo y Caquetá, principalmente. La llegada de estas personas coincide con la aparición de los cultivos de coca en el sector. Hay versiones que cuentan que toda esta gente las trajo las FARC, porque ellos venían de esas partes donde ya tenían la experiencia con este cultivo. Los recién llegados ocuparon tierras que son propiedad colectiva del Consejo Alto Mira y Frontera. Entonces ahora ¿al colono le van a dar la tierra?, ¿Cómo va a ser la cosa?”.

La problemática de colonos que llegaron a ocupar globos de tierra en Consejos Comunitarios o terrenos de campesinos no es propia de Tumaco. Es un fenómeno bastante generalizado en los corredores del posacuerdo, generando especialmente conflictos interculturales y disputas sobre la ocupación y uso de la tierra que en este periodo se hacen más evidentes; en el Norte del Cauca un ciudadano expresaba:

“Los grupos étnicos y campesinos deberíamos estar a favor de la erradicación forzada, pues si el gobierno entrega tierras a personas que han ocupado el territorio amparados en la fuerza militar de quien compra la hoja de coca, entonces nos van a despojar nuestras tierras y con todo lo que está pasando pues ¿cómo creer que el gobierno va a hacer las cosas bien, eso va dar pa’ errores y puras historias de muertos”.

Frente a la desconfianza con el gobierno, desde un punto de vista diferente que implica la reivindicación de un sector importante de campesinos cocaleros, un integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Trabajadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) durante el paro cocalero en Tumaco dijo:

“Aquí se han firmado 16 acuerdos colectivos de sustitución, pero ninguno se ha cumplido. En la ciudad creen que nosotros, los cultivadores, somos delincuentes pero nosotros somos trabajadores del campo y queremos cambiar porque sabemos que se necesita otro rumbo, pero mediante el diálogo, no a la fuerza y que nos brinden las condiciones. 16.900 hectáreas de coca en un territorio son un montón de gente que vive de eso, no sólo los cultivadores y los raspachines, sino todo el comercio, todo lo que hay detrás. Por eso la solución tiene que ser más integral. Vías, cadenas de comercialización y que vean que necesitamos aquí, que no nos traigan soluciones de otras partes que acá de golpe no funcionan”.

En la misma conversación en la cual se cuestiona el tratamiento por vías armadas y con una gran cantidad de intereses económicos movidos por agentes ilegales, el integrante de la COCCAM manifestaba:

“Es cierto que hay mucho interés económico que enreda al cultivador, la importancia de Tumaco es por ser un municipio de frontera con el Ecuador, con un mar que se utiliza para la comercialización de la coca, acá hay laboratorios y cerca de 16.000 hectáreas sembradas, ¡casi todo está en la zona 5 del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera!, estamos como presos de la situación, pero nosotros no la definimos solos, se necesita que hayan acuerdos y que se cumplan”.

La narración precedente permite reconocer que no ha sido posible movilizar la sustitución de cultivos de uso ilícito del marco conflictivo que genera estigmatización, incumplimiento de lo pactado, victimización de poblaciones e impulso al cultivo de drogas de uso ilegal. Uno de los rasgos más preocupantes está relacionado con las denuncias de la población de que muchos de los manifestantes no estaban ahí por voluntad propia, sino que habían sido obligados a salir a la protesta y servir de “escudos humanos”, inclusive se ha afirmado que hay amenazas a líderes que apoyan la sustitución voluntaria (El Tiempo, 6 de octubre de 2017).

Según lo recopilado hasta el momento es necesario subrayar que el punto de quiebre de las condiciones de participación y movilización de las poblaciones campesinas en el periodo de dejación y posejación de armas es que en el marco de la protesta se han involucrado agentes del narcotráfico que estimulan el conflicto, porque de esta manera evitan la erradicación forzada y garantizan el usufructo del cultivo. El problema emerge para las expresiones organizadas en el sector rural porque:

- La presencia de actores ilegales y armados hace que ante la opinión pública y ante las poblaciones aledañas a las zonas cocaleras no se pueda distinguir cuáles son las reivindicaciones justas y dignas de apoyo, en la medida en que es difícil determinar los aspectos en que la movilización está reivindicando el bienestar colectivo y cuáles favorecen al actor ilegal, erosionando la legitimidad de la petición.

- Disminuye la convocatoria en los espacios colectivos donde se encuentran agencias del Estado y organizaciones cocaleras porque los pobladores no sienten que puedan influir con su participación autónoma, luego las decisiones terminan teniendo poca base de consulta y decisión.

- También merma la solidaridad de la población con los planes y acuerdos de sustitución resultantes, en la medida en que es muy difícil generar adhesión a intereses que no son claros o no son suficientemente incluyentes.

En síntesis, es importante observar que las inercias del sustrato en el que descansa la cultura mafiosa que se busca afectar con medidas como las consignadas en el punto de superación del narcotráfico, no están solamente en la fuerza de la violencia física, sino en el hecho de que hay agencias que persisten en permear y redireccionar la red de relaciones cotidianas de los territorios hacia fines ilegales, utilizando e instrumentalizando las expresiones sociales, reduciendo la asociatividad y aprovechando la fuerza informal disponible.

En el caso del movimiento cocalero el relacionamiento con expresiones ilegales que acabamos de mostrar, logra en algunos casos desdibujar la legitimidad de sus reivindicaciones. En ese contexto, las solicitudes de rectificación al gobierno sobre la implementación de los PNIS no logran ganar la fuerza pública suficiente y, por tanto,

se pierde capacidad de incidencia hacia una escala más allá de lo local. Así las cosas, no se generan las condiciones para que la política de ejecución de los PNIS se ajuste a las realidades locales y regionales.

En estas condiciones es posible reconocer en varios de los escenarios territoriales en donde se ha adelantado la dejación y posesión de armas, el vínculo entre las economías ilegales relacionadas con el cultivo, la producción y el tráfico de coca, y el apoyo social hacia otros negocios ilícitos, tales como la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de armas entre otros; esto en la medida que no hay una opción legal viable de subsistencia de habitantes de los sectores rurales, lo cual permite que se incorpore la fuerza informal presente en el territorio a nuevas agendas de la carpeta criminal, conexas al narcotráfico.

2.3 Las Inercias de la Guerra en la Vida Local y Regional.

“Se escucha mucha cosa por aquí patrón, uno cada día en este transporte aprende algo nuevo del proceso de paz; yo ya tengo edad para no ser cándido, ni ingenuo frente al rompecabezas de todos los días, algo de eso se hará, pero uno también se pregunta ¿Cómo hacer para que lo que quiere el uno y el otro se coordinen bien?, yo veo que está faltando es ponerse en la realidad real y mirar cómo todas esas heridas y esos malestares se salen de tanta ambición y se concretan en algo que sirva pa después; si no ya verá la frustración”.

Transportador Chigorodó.

La posibilidad de dinamizar un proceso de reconciliación y reparación vincula las expectativas de justicia restaurativa como una de las bases prioritarias establecidas en el Acuerdo para permitir que la sociedad colombiana avance en la superación de la guerra. En el período de dejación y posesión de armas, el énfasis observado sobre este particular ha girado en torno a las demandas y requerimientos de puesta en marcha de la Justicia Especial Para La Paz (JEP) y en la continuidad de esfuerzos para lograr que otros actores armados entren en negociación; es el caso de los grupos armados de orientación política y de las bandas criminales que buscan condiciones para someterse a la justicia y parar sus prácticas delincuenciales. A continuación se recogen algunas de las voces territoriales que más resuenan en estos dos aspectos.

2.3.1 La JEP en discusión por los caminos regionales.

Indudablemente en todos los territorios quienes más expectativas tienen en torno la Justicia Especial para la Paz son las víctimas. En primer lugar están a la espera de conocer la verdad y después de encontrar formas de involucrarse en un mecanismo novedoso de justicia, que por su novedad también resulta indefinido y lleno de inseguridades. Una familiar de un desaparecido en Ituango confiesa:

“Se lo digo a usted, porque yo casi nunca hablo de esto, ya porque usted vino con.... que es de confianza, con decirle que yo no voy a nada que convocan para las víctimas, yo ni he presentado papeles para que me llamen víctima, a mí no me gusta mendigar nada y menos al gobierno, ellos no nos protegieron que le van a dar ahora unas bicocas a uno. Aunque en estos días que dicen que van a confesar pues yo quisiera saber qué le hicieron a mi hermano, dónde lo dejaron; es que nunca lo entregaron, se lo llevaron y vaya uno a saber dónde lo dejaron. Será que sí van a decirnos y para eso me tocará inscribirme en algún lado, ¿usted sí sabe el procedimiento?”.

Pero no sólo hay expectativas, uno de los sentimientos más comunes es la incertidumbre, pues son tantos los frentes y las historias de victimización que las mismas víctimas no saben por dónde comenzarán. En una de las visitas de observación, un funcionario de una ONG que adelanta acciones en el Caribe Colombiano compartía su opinión:

“Yo si estoy preocupado, no sé qué va a pasar con todo esto. El problema es la corrupción en el posconflicto, hoy trabajamos en desminado, medio ambiente y derechos humanos, pero no se sabe qué va a pasar; esto aquí esta crítico; se invierte en foros y en hacer proyectos, pero no están claros los compromisos. Pero lo que yo no veo es cómo van a ser las cosas en términos de las víctimas y de la reparación, cómo van a cuadrarse esos asuntos. Esto ha sido difícil, se pierde familia, se hace daño, se pierde tiempo y bueno para que todo siga por la misma con esta gente; yo no veo cómo va a ser eso”.

Por fuera de la incertidumbre hay desconfianza. En muchas de las visitas de diferentes maneras y con diferentes acentos, líderes sociales e inclusive ciudadanos con quienes conversábamos expresaron en voz baja asuntos como el siguiente:

“¿Usted sí cree que los políticos vayan a decir todo lo que han hecho en estas tierras?, ¿usted ve a alguno de los ganaderos o los petroleros de la región confesando, o a la misma guerrilla?, eso sería un verdadero boom. Yo creo que allá va el que le toca, pero por demás la veo dura, para mí que eso es puro teatro”.

Líder social del Arauca.

Aunque en muchos casos la incertidumbre y la desconfianza están alimentadas por corrientes políticas y de opinión que se han opuesto al Acuerdo, es necesario reconocer que hay una gran distancia entre la comprensión de los mismos y las rutas de la implementación de cara a las víctimas. Esta circunstancia genera un amplio margen de desconfianza. En una ocasión un taxista mientras nos transportaba de Apartadó al aeropuerto de Carepa expresaba:

“A mí me da pena pero ahora no nos pueden salir con el cuento que van a juzgar por igual, lo mismo un defensor de la patria que a esos terroristas, jeso no puede ser así, así no pueden ser las cosas! Yo en este aparato escucho noticias todos los días, hace días Uribe tuvo que enojarse allá en el Senado, porque le toca duro, les dijo que eso no les iba a permitir el maltrato a nuestros policías y soldados. Lo mismo dijo esa que fue ministra de Uribe, la doctora Marha Lucía, pa' que no digan que los paisas somos machistas, yo sí voy a votar por ella. Se lo digo con respeto porque me gusta conversar con la clientela”.

Este énfasis en la manipulación de las emociones no configura necesariamente una relación, pero sí pone en evidencia cómo sentencias simples se asocian con sentidos arraigados en las culturas populares y viajan veloces por circuitos cotidianos, haciendo de conjeturas ligeras verdades que mueven pasiones. Por ejemplo, en un puesto de comidas en Bajirá, una mujer preguntaba mientras atendía su pequeño negocio:

“De verdad a usted le parece justo que esta gente no pague un día de cárcel y puedan estar en la política, mientras aquí a un muchacho por un porte de armas que llevaba en un mandado le meten años a la cárcel. Yo no sé mucho de eso, pero jeso no tiene nombre! A quién se le ocurre. Además habían dicho que primero pagaban sus cuentas y luego se iban para la política; después de que estén mandando ¿quién los va a meter presos?”.

Las narraciones precedentes son una señal de la incertidumbre reinante, del enorme desconocimiento sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y lo que significa la perspectiva de justicia restaurativa que la sustenta. En ese ambiente de incertidumbres, dudas y desencuentros el avance en la gestación de una política de reconciliación desde los territorios es lo más urgente.

2.3.2. El cese bilateral con el ELN y la búsqueda del sometimiento de bandas criminales: la esperanza de una paz completa.

“Primero decían que eran los Elenos, después que no, que eran del EPL, también se ha dicho que son disidencias y hasta de una banda que trafica y se nombra y viste según la ocasión y el interés; lo concreto es que entre brazaletes y comunicados, aquí se termina negando hasta las muertes; siguen diciendo que nuestros muertos son por chismes y por disputas en la comunidad, y nosotros aquí somos familia, nosotros estamos es perseguidos por todo el que quiere cogernos de sede pa' sus cosas.

Pobladora del Norte del Cauca amenazada.

Respecto a los actores armados que persisten en los territorios se han venido tratando alternativas de negociación y de favorabilidad jurídica, especialmente con los grupos de orientación subversiva. Para superar las expresiones violentas del campo político en el país se está adelantando actualmente la negociación con el ELN y explorando algunas medidas especiales para el sometimiento de las BACRIM. Estas tentativas no implicarían acabar con la dinámica de conflictividad violenta, pero sí contribuirían a desescalar el conflicto y a que la diferencia política se resuelva en los marcos establecidos por la democracia; generando además un monopolio legítimo de la fuerza y de las armas por parte del Estado.

En el primer caso se ha logrado instalar una Mesa de Negociaciones en Quito Ecuador, con una agenda poco asimilada aún en el país; de las cuatro rondas vividas en el 2017 y a instancias de la visita del Papa Francisco a Colombia con su mensaje de reconciliación se ha logrado concretar un cese al fuego bilateral que está en ejecución con fuertes tensiones debido a los problemas de interpretación de los compromisos y al hecho de que las fuerzas insurgentes no están concentradas y mantienen los riesgos propios de la movilidad en los territorios. Por otra parte, la expectativa del sometimiento a la justicia de las

BACRIM tiene un revés en la medida en que el proyecto legislativo que posibilitaría el proceso se quedó por fuera de las gestiones del Congreso de la vía rápida para la paz, y en la próxima legislatura, en medio de elecciones, es difícil que concite interés de las fuerzas políticas presentes en estos cuerpos legislativos.

En el seguimiento a estos procesos es posible explorar desde los territorios algunas pistas: aunque para muchos actores el cese bilateral al fuego con el ELN esté sembrado de incertidumbres y dudas, en áreas del conflicto donde la presencia territorial es fuerte la mirada es distinta. Un sacerdote de Chocó lo expresó de la siguiente manera:

“El ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están disputándose el territorio. Se dice que los grupos posdejación le propusieron al ELN mantener el pacto que tenían con las FARC, éstos se rehusaron al principio y por eso es los enfrentamientos y la cantidad de minas. Esto llevó a un confinamiento porque Cacarica, Salaquí, Domingodó se los están peleando.

El Truandó está minado, al punto que ya no se pueden hacer visitas pastorales. Con decirle que cuando hablan del proceso de paz a nosotros nos parece bien, acá votamos por el sí, pero es que esta nueva guerra nos ha quitado la esperanza, nos daba la impresión que la paz no era para esta tierra. Ahora con ELN se resuelve a medias porque aquí el problema no es con el Ejército, pero nosotros creemos que sí cumplen pues luego tienen que avanzar y el gobierno tiene que entrar a mediar para que esto pare en este sector”.

En territorios como Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Arauca la noticia del cese bilateral es una esperanza para que la paz sea completa, pero igualmente se viven tensiones cotidianas ligadas a la inestabilidad de la movilidad del ELN y a la disputa permanente con las BACRIM. En el Catatumbo la noticia se recibe incluso con mayor esperanza. Una líder comunitaria narró la manera como se percibe el asunto:

“Acá en el Catatumbo el mayor número de atentados contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas y las bases de seguridad los ha realizado el ELN. Con los atentados de este año contaminaron las fuentes hídricas de abastecimiento rural en municipios de El Carmen y Teorama. El último atentado ocurrió en Teorama; provocó ruptura del ducto y derramamiento de crudo en las quebradas La Cristalina y La

Tiradera que desembocan en el río Catatumbo.

Por eso a nosotros nos alegra que se acabe tanto problema, para nosotros antes la paz no llegaba porque acá se ha visto más el ELN que las FARC. Por eso que al terminar noviembre, ya casi a los dos meses no se tengan atentados, ni muerte, ni nada de eso, es realmente un milagro. Nosotros creíamos que con la noticia del indígena que mataron en Chocó todo se iba a fregar pero no, no se rompió el diálogo, eso significa que todo va por buen camino y que vamos a tener diciembre en paz, yo creo que eso en estas tierras nunca se ha visto”.

Las contingencias en el Cese Bilateral al Fuego y las dificultades en el escenario de implementación sobre asuntos como el avance en la Justicia Especial Para la Paz, o las Circunscripciones Especiales de Paz imponen al cerrar el 2017 un cuello de botella que solo podría ser despejado en la medida en que el cese al fuego se extienda y las dinámicas de participación de la sociedad que se están discutiendo, se territorialicen en zonas concretas de conflicto donde está presente la insurgencia.

Por otro lado, el escenario de la favorabilidad para el sometimiento a la justicia por parte de las BACRIM - que es mucho más lento, dadas las condiciones políticas y jurídicas-, ha concitado el interés principalmente de importantes sectores de lo que se ha autodenominado Clan del Golfo, que tiene fundamentalmente presencia en el noroccidente, el nororiente y el suroccidente colombiano; estas estructuras han logrado federarse en torno a este propósito, pero mantienen una profunda lucha con el ELN en zonas en las cuales disputan rentas ilegales y territorios para el control económico. Así se expresa al respecto un poblador del medio Atrato:

“En otra época por aquí venían era los fines de semana y funcionaban más como grupos de escoltas de cargamentos y productos que salen de otros lados, se veía que pasaban sin mucho problema; pero poco a poco ellos ya se aposentaron en toda la zona y han comenzado a controlar hasta las remesas y el transporte, están creciendo como cocos con su negocio y ya no son poquitos, se han unido varios grupos y tienen un manejo de todos estos ríos...”

Poblador Chocó.

Respecto al conjunto de observaciones en los territorios se reconoce que la dinámica de las BACRIM se mantiene prioritariamente en la producción de narcóticos, pero han diversificado su

carpeta criminal, generando lo que podríamos denominar un boom de las dinámicas armadas en torno a actividades económicas ilegales en los territorios más alejados de la ruralidad colombiana.

Ambos procesos, el del ELN que busca salidas en la mesa de Quito y que se juega su futuro en el cese bilateral al fuego en curso, y el de las BACRIM que está a la espera de una oportunidad jurídica que abre la oportunidad de desestimular el delito, retan a la institucionalidad y a las comunidades a la construcción de una gobernabilidad democrática y a la generación de alternativas productivas y culturales concretas para la vida de las poblaciones en el corto plazo.

2.4 La Tendencia Cultural y el Silencio Frente a la Reconciliación.

“aquí no hay problema cuando hay un actor armado, el problema es cuando hay dos porque entonces muere mucho inocente, de lo contrario uno hace lo que mandan y se vive tranquilo”.

Poblador del Chocó.

En las visitas de observación exploramos espacios en los que nos descentramos del diálogo con los núcleos sociales organizados y los agentes institucionales para propiciar conversaciones con pobladores en situaciones muy disímiles quienes expresaron sus expectativas y temores, evidenciando las tensiones culturales existentes en las tramas locales; una relacionada con las formas de enfrentar la persistencia de actores armados y el segundo con la recepción de los mensajes de los medios de comunicación y de otros mecanismos de convocatoria sobre la paz, la justicia y la reconciliación; a esos aspectos se dedica este acápite.

2.4.1. La adaptación a los actores armados.

“Eso ya se negoció y ya entregaron armas, pero los muchachos más desobedientes siguen por ahí, no crea. Los primeros días ni sabíamos cómo iba a organizarse la seguridad, pero poco a poco se va aclarando.

Los policías y el Ejército cuidan allá esos campamentos y aquí los que quedaron, se van arimando a poner las nuevas reglas que a la final son las mismas”.

Poblador del Capricho en Guaviare.

En los corredores del posacuerdo está muy naturalizada y demandada la presencia de un actor armado que sustente el orden por la vía del con-

trol marcial y se vivencia la disposición y la adaptación a la conducta injusta. En el período de posejación se avizoran algunas rupturas con esa tendencia, pero también se observan reacomodos de las lógicas autoritarias que aprovechan la lentitud y la distancia de los dispositivos institucionales para superar las inercias culturales de la guerra y las múltiples violencias. En muchos de los territorios la población en general expresa:

“Por un lado ya no se tiene la zozobra de siempre, y se están sacando todas las minas, eso es bueno; pero por otro lado va creciendo el vivo, el abigeo que comienza a hacer daño y para eso no hay remedio a la vista, porque llega policía pero no conocen, eso se demoran en que se les tenga confianza; como le digo no hay confianza”.

Pobladora de Vistahermosa Meta.

Esta afirmación que puede ser leída como un aprendizaje de la vida diaria para lograr sobrevivir en un contexto de conflicto armado habla por sí sola del referente ético y simbólico presente en el territorio. Debido a la persistencia del conflicto violento, tanto de carácter político como el relativo a la presencia de economías ilegales se ha generado una naturalización de la violencia y por esta vía una adaptación a ella, y se convive en medio de reglas impuestas por actores armados que deciden pautas acordes a sus conveniencia. En Bajirá, líderes de un Consejo Comunitario nos dijeron:

“aquí cuando hay tranquilidad es porque “alguien”, dice a qué hora se puede salir, si se pueden hacer reuniones, de qué se puede hablar, y dónde se puede o no se puede trabajar, uno aprende a vivir así con el tiempo, a quedarse callado a no meterse”.

Esta circunstancia presente entre la población y con un arraigo cultural extendido, implica que la ausencia de muertes o la baja letalidad no necesariamente significa vivir en una convivencia pacífica acorde a una ética pública y democrática sino, más bien, en medio de un equilibrio o de unas certezas básicas que tradicionalmente provee un orden autoritario.

“Ahora dízque sí se puede salir, y la gente ha recuperado los bazares y los bingos de noche, pero a mí eso no me gusta, uno no sabe en qué momento las cosas vuelven a ponerse color de hormiga, entonces en la casa más bien no sale nadie, yo no dejo que nadie salga a ninguna de esas fiestas de la paz y menos las mujeres que son más agredibles; que no nos vean por allá porque uno no sabe. Cosas hemos visto”.

Poblador Pondeos Guajira.

La implementación del Acuerdo de paz apuesta por una movilización ciudadana de reconciliación, en ese sentido, va en contravía del orden impuesto que reina en los territorios del conflicto, y busca generar transformaciones en el ambiente social y en las formas tradicionales de relacionamiento basadas en la presencia de actores armados no estatales regulando la vida. Este asunto no está exento de disputas y tensiones cotidianas y evidencia la falta de mecanismos y herramientas concretas para promover una convivencia pacífica. En Dabeiba un campesino que lidera una Junta de Acción Comunal expresó:

“A mí lo que me molesta realmente es que el gobierno quiere venir a decirnos que debemos hacer; eso fue así en los PIC y eso no es así, nosotros tenemos derecho a expresarnos y el funcionario primero tiene que estar acá y ahí sí vemos si nos comprendemos; para eso se hizo el Acuerdo, para que no lo manden a uno”.

En medio de ese orden impuesto, cuando se alude a las instituciones del Estado se expresa una gran retórica de desconfianza de la población que se explica por los años de distancia y sentimientos de agravio generados en medio de la guerra, pero que en pleno proceso de restitución de derechos es un asunto que debe ser abordado con mayor probidad. En Bajirá por ejemplo, antes de ir a una reunión citada para la restitución de tierras un campesino nos contaba:

“Vea aquí no hay nada más que se pueda hacer, toca ir a esas reuniones y hablar; siempre se van a dar cuenta que uno dijo algo, porque hay alguien que lo ve y va y cuenta, por eso en parte tienen razón quienes nos han dicho que no vamos a esas cosas por el peligro que trae, pero esto no se compone si no se empieza a hablar, a decir las cosas, pero para eso se requiere que no tengamos miedo, porque con miedo es imposible, hay que aprovechar porque en unos días todo vuelve a ser como antes, hay que aprovechar el momento, de golpe alcanzamos a hacer algo estos días que uno sabe que está vigilado pero como ellos no quieren que los vean en sus cosas entonces no accionan, porque cuando se vayan ese poco de instituciones que han llegado ahí todo vuelve por la misma”.

Así las cosas, los actores comunitarios, sociales y la ciudadanía calculan cómo aprovechar el breve espacio entre la retirada de las FARC, la visibilidad pública del territorio y el aprovecha-

miento de los pocos espacios generados por la justicia para recopilar información para la denuncia de lo ocurrido en la guerra. Esto evidencia un marco de maniobra que podría ser aprovechado para el proceso de reconciliación que demanda un acompañamiento psicosocial y cultural que traspasa la potencia de la implementación del Acuerdo.

2.4.2. El manejo de emociones y el desestímulo de la reconciliación.

Recientemente íbamos en un taxi rumbo a Florida, Valle a un taller con líderes étnicos, presentando los resultados del cuarto informe, cuando escuchamos en la radio a un locutor diciendo:

“Imagínese que estuviera vivo Marulanda, el candidato no sería el viejo Timo, sería el viejito; entonces nos tocaría verlo por las avenidas, con su toallita al hombro, subiendo con su mano de escoltas, yendo ahora en diciembre a comprar aguinaldos. Yo eso no me lo imagino, yo me cambio de acera pero al lado de ese bandido no estaría. ¡Sinceramente es que nos han engañado y nosotros tan mansitos!

En la actual coyuntura cada vez más algunos medios masivos de comunicación contribuyen a la gestión de sentimientos y percepciones sobre el proceso de implementación, y la dinámica informativa mantiene una estructura que conecta el debate del plebiscito refrendatario de octubre del año 2016 con las elecciones nacionales venideras en el 2018. En esa perspectiva, es importante reconocer las formas de recepción de estos mensajes que se están dinamizando sobre la implementación del Acuerdo. Con esta finalidad, aproximémonos a varias experiencias sistematizadas.

“Yo ayer estuve pensando no venir a este encuentro y no invitar los muchachos, vine porque la gente de la pastoral de todas maneras ha sido muy buena con nosotras y ellos están aquí, pero es que vea allá en el pueblo en la emisora, por la mañana se levantan diciendo todos los días que esto por acá es una alcahuetería y que hay prostitución y vicio, que las mujeres y los jóvenes no tenemos que venir a hacer nada por acá, y bueno en el grupo sabemos que estamos es en el deporte para la paz y la reconciliación, pero una siempre duda, no crea...”.

Líder social Meta.

Ese relato bastante generalizado está en la ciudad, en las cabeceras municipales, en las regiones y en la conversación cotidiana de los corredores del conflicto; entra a nuestras casas a fuerza de noticieros radiales, telenoticieros, redes sociales y en llamados espirituales o en conversaciones ocasionales en cualquier entorno regional. No hay recurrencia a información oficial, prima la orientación hacia la creencia, a validar verdades a medias mediante argumentos de autoridad y asimilaciones ligeras que potencian miradas radicales y generalizantes sobre realidades particulares que son visualizadas sin contexto adecuado.

“Esto aquí está malo, pero malo es malo, uno tira cabrilla todo el tiempo y para nosotros los pobres del Guaviare no hay nada, pero para los bandoleros que han hecho tanto daño, para ellos sí hay tierras y pago de salarios y médicos; el pastor nos tiene bien informados de cómo es la situación y aquí en San José no estamos conformes, porque para nosotros los buenos no hay ninguna paz, ni ningún beneficio...”

Taxista en la ruta al aeropuerto de San José del Guaviare.

El país, un año después de la firma y en medio del avance de la implementación de los Acuerdos, sigue debatiéndose ferozmente sobre la paz y la discusión sube de tono emocional ante la falta de la verdad y de informaciones dispuestas de forma institucional y precisa; se habla desde convicciones ideológicas encarnadas que no dejan ver los intereses, las razones o las consecuencias de tan repetidos razonamientos. Es como si en nuestros entornos domésticos, tan atrapados en la victimización y en los impactos de las violencias, no pudiéramos reconocer los espacios que nos brinda el Acuerdo y con nuestras elecciones le restáramos fuerza, en gran medida porque nos quedamos atrapados en los sentimientos de rabia, miedo y dolor.

2.5. Síntesis Sobre los Rasgos Territoriales de la Implementación.

- Es indiscutible que la implementación de los Acuerdos de paz movilizan sectores sociales de la más diversa índole en torno a la posible entrega de tres millones de hectáreas de tierra y la formalización de siete millones. Esta expectativa dinamiza nuevamente a sectores sociales campesinos, afrodescendientes e indígenas frente a la posibilidad de mejorar condiciones de vida. Igualmente actores legales e ilegales entran a presionar por la utilización de dichos bienes. Por

tanto se genera una disputa por la posesión de la tierra que transforma las territorialidades locales no siempre en favor de los desposeídos históricos del campo.

- A expensas del proceso de dejación de armas y posdejación, por el espacio vacío que deja las FARC en la red de economías de guerra, diversos sectores legales e ilegales, rápidamente se movilizan en función de las economías de enclave presentes en las regiones. Este proceso se centra en las posesiones sobre la tierra, el subsuelo, los cultivos ilícitos y el contrabando por las fronteras, afectando negativamente la convivencia y la vida productiva de las territorialidades en desmedro de los sectores campesinos y étnicos.

- Así las cosas, en la disputa por las posesiones sobre la tierra, el subsuelo, los cultivos ilícitos y la captura de las rentas del Estado se encuentran las resistencias más grandes a las que se enfrenta el proceso de construcción de acuerdos para poner fin al conflicto con la insurgencia. Generar los mecanismos para controlar el desborde de los enclaves económicos, de las economías de bonanza y del régimen del capital expansivo, es una tarea que está más allá de los alcances del Acuerdo, sin embargo, para mantener la potencia de justicia social en el campo y la vocación de paz es necesario profundizar en este aspecto.

- Hay una disputa desigual entre el régimen liberal de generación de empresa y la opción cooperativa que se expresa desde pequeños grupos en las economías regionales. La sostenibilidad de las actividades productivas campesinas y asociativas dependen del tipo de regulación y del papel del Estado, en este caso, también la implementación, especialmente una mirada crítica a la misma, evidencia las políticas y operatividad de las instituciones gubernamentales que favorecen los macro emprendimientos globales y olvidan el apoyo a las pequeñas y medianas iniciativas productivas.

- En el período observado se encuentra que se fortalece la aceptación de las economías ilegales en la medida que el Estado no genera suficientes y rápidas alternativas productivas para los corredores en donde se realizó la dejación de armas. Esta aceptación creciente, la funcionalización de las redes sociales existentes, la cooptación de la informalidad afecta negativamente las movilizaciones sociales que emergen producto de la implementación de los Acuerdos.

- Hay debate sobre los alcances del conjunto de los Acuerdos, en particular de la Justicia Especial Para La Paz (JEP) y respecto a las correlaciones de poder económico, social y político en el futuro inmediato y sobre condiciones seguridad jurídica y económica de los poderes regionales que resultan de las nuevas realidades que posibilita la implementación.
- En las demandas de acceso a oportunidades y reparaciones materiales para víctimas individuales y comunidades afectadas por la confrontación armada no se observan avances significativos debido a fuertes tensiones de rutas y metodologías inadecuadas, gobernadas por el centralismo.
- El silencio frente al orden injusto es una práctica que sustenta el régimen cultural mafioso. El Acuerdo de paz habilita espacios para que voces desde diferentes lugares sociales y territorios se expresen, sin embargo, no siempre han sido lo suficientemente amplios. Por tanto es importante agenciar espacios de participación pública amplia que fomente un sentido de inclusión y reconciliación.
- El miedo y el odio, uno promovido desde estructuras armadas en los corredores del conflicto y el otro dinamizado desde algunos medios de comunicación masiva, son sentimientos que hacen parte central de la justificación cotidiana de cultura mafiosa y autoritaria, y restan la posibilidad de avanzar en un proceso de reconciliación que permita sentar las bases para ir en la dirección de una transformación cultural profunda.



LA PAZ - JULIO 2017

▶ **3**

**LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL
CONTEXTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN.
EL RETO DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL**

"Aquí en el Catatumbo las principales organizaciones son la ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo), el CÍSCA (Comité por la Integración social del Catatumbo), el MCP (Movimiento por la Constituyente Popular), la COCCAM (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana) y ANZORC (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina). Se lucha por que se reconozca al campesino, porque la región tenga paz con justicia social, porque haya justicia en la sustitución de cultivos. El mayor problema es la violencia y la estigmatización que hay hacia las mismas organizaciones y líderes y lideresas sociales; parece que defender los derechos y el territorio fuera pecado en Colombia".

Dirigente social del Catatumbo.

Las relaciones de sociedad civil y paz tienen una larga trayectoria en Colombia. Desde los años ochenta, cuando arreciaba la guerra entre fuerzas armadas institucionales, insurgentes y paramilitares se han producido enormes esfuerzos por generar reflexiones y acciones que condujeran a un escenario de paz y reconciliación como el que hoy tenemos. Toda la geografía colombiana está permeada por estos esfuerzos organizativos que han insistido en la construcción de relaciones de intercambio y cooperación entre comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, en vínculos muy fuertes e insospechados con nuestras concentraciones urbanas. También es cierto que la persistencia del teatro de operaciones de la guerra ha afectado las dinámicas de construcción civil y ha desvirtuado, malogrado y victimizado importantes alternativas de organización y participación social, y generado, en un sentido muy particular de acuerdo a las regiones y a la intensidad del conflicto, dinámicas de naturalización de las violencias cotidianas y del conflicto armado con las cuales las redes organizativas conviven.

El escenario intermedio en el que nos encontramos muestra una mezcla abigarrada entre las dinámicas de organización y participación con vocación de paz que impulsan los procesos de implementación de los Acuerdos y un medio de tejidos organizativos cooptados por la violencia, el armamentismo y el autoritarismo que se mueven en la inercia del conflicto y la competencia social agresiva. En lo que va corrido de la concreción de los Acuerdos con las FARC es posible situar un gran dinamismo de organizaciones articuladas en diversas modalidades y niveles, a veces convergiendo, a veces colisionando en

los territorios, a veces cooperando con las entidades, a veces en franco choque con la institucionalidad, a veces denunciando atropellos e incluso a veces acallándolos.

A continuación nos centraremos en describir las situaciones y casos en los que se observan bloqueos y/o proyecciones de las organizaciones y redes comunitarias, sociales y ciudadanas en el contexto de la implementación de los Acuerdos, entendiendo que este proceso tiene un arraigo territorial local muy matizado y que el componente participativo implica múltiples agenciamientos sociales e institucionales que se articulan en planos culturales y políticos de una complejidad especial. Podemos expresar, para dar curso a la aproximación de esta dimensión analítica, que el plano de mayor exigencia territorial del proceso de implementación radica en el nivel de potenciación y transformación de los tejidos organizativos en localidades y regiones, en función de lograr las transacciones, las conexiones y reparaciones fundamentales para establecer rutas aplicadas de paz y reconciliación.

3.1 La Organización como el Capital Social de la Implementación de los Acuerdos.

El poblamiento, las adaptaciones productivas, los ordenamientos territoriales, la definición de flujos de movilidad, los modos de integración cultural en la cotidianidad implican formas de organización de la vida que se movilizan y tensionan en este momento de transición de la lógica de la guerra a la convivencia pacífica. Las bases de confianza para la acción colectiva son claves y se concretan de manera especial en las formas organizativas y especialmente en las relaciones entre los diversos tipos de organizaciones y de estas con la institucionalidad que agencia el ordenamiento público estatal, gubernativo.

En ese horizonte, las organizaciones sociales, comunitarias y ciudadanas son un referente del capital social o de la sociabilidad de los núcleos humanos que habitan los corredores de transición que observamos, en los cuales se demandan nuevas dinámicas de participación social y ciudadana, destacando especialmente la alta valoración que encarnan respecto a los vínculos de confianza mutua, de cooperación y colaboración a partir del despliegue de acciones e interacciones construidas desde redes de lenguajes y normas compartidas (Bourdieu, 1985). Al respecto es necesario evidenciar que en cada territorio hay unas formas organizativas y unas



Vereda Gallo - Córdoba 2017

maneras de participación que juegan un papel en la gobernabilidad de los territorios y por lo tanto en una implementación posible. Veamos el ejemplo del Chocó:

“Los grupos de base en el Chocó son las organizaciones étnico territoriales. Entre los afrochocoanos éstas comienzan por el nivel local en Consejos Comunitarios que reúnen a los pobladores de las pequeñas comunidades ribereñas. Por cuencas fluviales estos consejos se agrupan en Zonas; las zonas se congregan en Consejos Mayores que son las que llevan la concertación con las instituciones del gobierno y la cooperación. Hay más de una docena de Consejos Mayores en el departamento. En la zona del medio Atrato que estamos considerando, COCOMACIA es el Consejo Mayor que los representa, y es, por otra parte, la mayor organización afrocolombiana de base por el alto número de asociados y por la extensión de 120.000 hectáreas que cubren los títulos colectivos legalizados.

En el contexto del posacuerdo los consejos locales han sentido una disminución en la presión que los ilegales hacían sobre las comunidades y sobre sus representantes, pues la guerrilla se constituía de manera real en la autoridad efectiva en la cuenca. La resolución de conflictos, el control de la seguridad, la autoridad ambiental y el acceso de los foráneos, eran asuntos que resolvía la guerrilla. Ante el repliegue de ésta, desaparece su fuerza coactiva, para bien y

para mal. Hay mayor libertad, no hay amenazas, pero tampoco habrá quien resuelva los conflictos, ni quien controle la tala de bosques, la pesca y caza irresponsables”.

Informe observación Chocó.

En principio, las áreas de los corredores del conflicto están caracterizadas por una marcada dispersión de la población que contrasta con un gran dinamismo organizacional que demanda mucho esfuerzo para su comprensión. Las relaciones con centros poblados y áreas suburbanas y urbanas son muy fuertes, con dificultades de movilidad, pero con sólidos intercambios comunicativos. En estos contextos de transición, los territorios -que no se agotan en delimitaciones administrativas- se configuran como redes de relación y cooperación social que habitan y adaptan el espacio y hacen emerger, en los procesos de territorialización, agentes sociales articulados que constituyen los sistemas de vida colectiva.

“En el Putumayo es muy fuerte la MEROS (Mesa de Organizaciones Sociales), pero también se movilizan la Asociación de Mujeres Cocaleras, la Asociación Campesina Andino Amazónica del Putumayo. Estas redes buscan concretar los aspectos de la implementación y se forman a partir de pequeñas asociaciones y juntas que actúan en lo cotidiano y que están comunicadas por circuitos de río y serranía, y lo que les preocupa cuando se juntan, es la situación y la mejoría de la región en su conjunto, porque han

entendido con el tiempo que lo que pasa en el río tiene que ver con la montaña”.

Nota visita departamento de Putumayo.

El tejido social básico que se puede observar está concentrado en organizaciones comunales, pastorales, étnicas, campesinas, de género, de juventud, asociativas y cooperativas de nivel productivo y deportivo, y con menor presencia culturales. Todas ellas son claves para el funcionamiento de los relacionamientos veredales y de corregimiento con los entornos municipales y subregionales; además juegan un rol de espacios generadores de identidad y de sentido de pertenencia y distinción.

La mayoría de organizaciones tienen algún grado de relacionamiento formal con el Estado, tanto por la vía de la regulación como de acciones de cara a los programas gubernamentales; sin embargo, muchas de sus actividades exceden esa relación con la institucionalidad, concentrándose en las necesidades de sostenimiento comunitario, compartiendo muchas veces sus funciones y esfuerzos con actores armados que juegan un papel de distorsión de la convivencia pacífica, estableciendo relaciones mediadas por el control agresivo y la posibilidad de uso de la fuerza por agentes particulares, limitando la capacidad de solidaridad social y de relacionamiento a partir de derechos.

“Las organizaciones sociales de mujeres del valle hemos sido víctimas del conflicto, nos han matado esposos, hijos, madres y padres; sin embargo, seguimos impulsando el proceso de implementación, aquí a veces hay amenazas esporádicas, porque en el Cesar todavía quedan rezagos de esos monstruos de la guerra, que quieren negarnos hasta a las mujeres que parimos la vida, que tengamos otra opción de vida y bueno, pues el miedo es lo que hemos tenido siempre, ahora tenemos esperanza, ellos que hagan lo que quieran y ojalá que reflexionen que ya han hecho mucho daño”.

Entrevista líder de Movimiento de Mujeres Víctimas por la Paz.

Pero las redes organizativas que funcionan con mayor eficacia, y que al mismo tiempo son las más cooptadas por la ilegalidad, son las redes informales, arraigadas en los haceres cotidianos familiares y en el acercamiento que asocia por labores, asunto enraizado en fuertes intercambios de lenguajes situados y en relatos e historias comunes durante largo tiempo compartidas. Estas redes no son en sí mismas centro de la

ilegalidad, sino parte de los bancos de sentido popular que tejen bienes y lenguajes comunes (Berger y Lucman, 1968). En la medida en que forman parte de las sensibilidades lugareñas, las redes informales, cuando son interceptadas por prácticas criminales, se constituyen en un factor para anidar una especie de capital social perverso que permite generar la circulación de mensajes y la definición de rutas colectivas basadas en el atajo a la severidad de las normas y en la disposición habitual a contravenir las reglas de interacción colectiva (Coleman, 1990).

“Aquí siempre fue así, en una época fue el contrabando de electrodomésticos, después de bebidas y cigarrillos, después de marimba y armas, últimamente de gasolina y coca. Ahora están llegando personas a venderse porque del lado veneco las cosas nunca estuvieron tan mal, entonces qué querés que te diga; la organización social no puede discutir con eso, esa es la cota que se le pone a las comunidades y a los liderazgos, el partido colectivo se juega así o uno se va pa la casa. Aquí la Constitución y los Acuerdos importan si son capaces de distribuir recursos y generar otras formas de llevar los tiempos que sean diferentes a esa lógica mafiosa. Esto parece que fuera siempre así, en la Guajira tenemos esa desgracia”.

Testimonio sobre Corredor Caribe.

Sobre esas dinámicas de base cotidiana y organizativa funcionando de manera dispersa emerge, desde el punto de vista sociopolítico, un segundo nivel de organización respecto a la agregación y direccionamiento de la acción colectiva y de la construcción de imágenes de identidad y mundo compartido. Los movimientos sociales de diverso tipo, de carácter sectorial, poblacional o cívico, tienen en algunos casos alcances territoriales, regionales y subregionales, operando en un tejido conflictivo de cooperaciones y disputas por el sentido de la vida en los territorios. En algunos sectores es más fuerte el movimiento indígena y afrodescendiente, como en el caso del suroccidente. En el oriente es fuerte el movimiento cocalero, en el norte y centro occidente son visibles los movimientos de víctimas, y en todos los territorios hay un esfuerzo de las comunidades campesinas por generar plataformas y asociaciones con vocación de movimientos reivindicativos que se orientan a incidir en el punto 1 de los Acuerdos. El crisol es muy amplio, veamos solo el caso del Chocó que acaba de pasar por un fuerte proceso de movilización social como departamento.

“En el Chocó los movimientos fuertes son: el Foro Interétnico solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo Social, y el Movimiento Cívico Chocó. En ellos se concentra la dirigencia y la agenda del diálogo de interlocución con el Gobierno nacional. En estas organizaciones tienen asiento, delegados de todos los Consejos Mayores y otras organizaciones étnicas. Aquí se reúnen: Cocomacia, Cocomopoca, Cocollo, Asacasán, Acadesán, Ocaba, Acaba, Obapo, Ascoba, entre otras de importancia regional, que se configuran como el espacio donde se discuten las políticas generales de las organizaciones, los conflictos regionales y la concertación con las instituciones del Estado y la cooperación nacional y extranjera. Por otro lado está la Mesa Indígena, que es el espacio que reúne a los representantes de las organizaciones indígenas. Al comienzo la Orewa los congregaba a todos, sin embargo la lucha por los liderazgos regionales ha provocado una multiplicación de organizaciones: Asorewa, Federorewa, Crich, Woundeko, Camizba, etc”.

Informe Chocó.

En este proceso de superación del conflicto, la principal afectación de las organizaciones y movimientos sociales y comunitarios radica en el entorno y la práctica de amenaza y asesinato a los liderazgos por parte de persistentes grupos armados. En los testimonios recogidos y las voces que se han expresado en el conjunto de la observación en este periodo, los hechos remiten a tensiones sobre el ámbito de incidencia y participación de las organizaciones en relación con conflictos de tierras, del territorio y de sus acciones de protección de la vida frente a prácticas que afectan la sostenibilidad de las comunidades, asuntos que son la razón de ser de estos tejidos colectivos.

Aquí en el Cauca no se explica cómo estamos llenos de alertas tempranas y de ejércitos oficiales por todo lado, y de acciones de la guardia de la comunidad, aun así sigue la presión de los que nos han quitado la tierra, de los dueños de retroexcavadoras, de los que contaminan nuestros ríos y están tirando el páramo a la erosión. Pa nosotros sí hay garrote pero para la mano asesina, no hay ningún llamado ni acción que se vea...

Testimonio Norte del Cauca.

En diversos planos organizativos el interés por los recursos de la implementación de los Acuerdos y por las decisiones sobre asuntos sustantivos como el acceso a tierras, la sustitución de culti-

vos y la reparación a las víctimas genera fracturas en los tejidos sociales y dificultades entre liderazgos, espacios y formas de participación social que afectan espacios y agendas de construcción con la institucionalidad. Esto sucede en medio de una gran fragilidad de la sostenibilidad de las organizaciones y de la falta de estrategias de autofinanciación. También es cierto que el momento exige mayor dedicación a las dinámicas colectivas, pero las condiciones para ello no se facilitan desde el punto de vista de la movilidad, la definición de calendarios y tiempos de dedicación de los animadores de las organizaciones, así como de los aspectos logísticos. Se suma a estas tensiones la gran expectativa por beneficios y recursos que hacen más demandantes y expresivas a las comunidades respecto a los resultados de las gestiones organizativas.

“Vea, la concentración de las FARC en la vereda de Gallo hizo que este territorio del corregimiento del Crucito fuera foco de muchas miradas: medios de comunicación, Gobierno Nacional, comunidad internacional. Esto condujo a que las organizaciones sociales tuvieran la posibilidad de interlocutar por primera vez con diversas instancias. La Junta de Acción Comunal de Gallo y la Asociación de Campesinos del Alto Sinú (ASODECAS) se volvieron un referente para la formulación de las PICS, y para la implementación de los PNIS. Tanto la institucionalidad local (Alcaldía, Personería, Concejo) como las otras organizaciones consideran que se ha establecido una interlocución exclusiva con el gobierno nacional, abrogándose la representación de la comunidad tierraltense en la implementación del Acuerdo, lo cual ha profundizado la ruptura social entre la franja urbana y la rural en la zona del Paramillo”.

Informe de observación Departamento de Córdoba.

También se puede reportar el crecimiento de semilleros e iniciativas asociativas a instancias de los múltiples procesos que se dinamizan por la implementación, especialmente de organizaciones formales y de segundo nivel que buscan generar concertaciones que beneficien a grupos sociales concretos. Este impulso lo atenúa la situación de violencia e inseguridad persistente y la lógica del despojo que sigue afectando profundamente la estabilidad y el desarrollo estratégico de las redes y los movimientos sociales, en muchos casos afincados en posiciones conservacionistas de resistencia y sobrevivencia, generándose dinámicas muy activistas y reactivas. Por ejemplo nos han reportado en el departamento de Córdoba que:

“Hay temor por los señalamientos y hostigamiento de las Autodefensas Gaitanistas hacia la Red de Mujeres, situación que paralizó el trabajo organizativo durante casi todo el 2017. En el último trimestre de 2017, una de las líderes que quedó, decidió reiniciar el trabajo con las mujeres de las veredas: “yo hablé tanto con el comandante de los autodefensas como con ASODECAS y les dije que me dejaran trabajar, que nosotros queríamos era trabajar con la mujeres”. El aval está condicionado a que no se inmiscuyan en los temas de paz. Por eso el énfasis en este momento es en torno a lo productivo”.

Testimonio líder social.

La integralidad de los esfuerzos tiende a reducirse a lógicas de comunicación y gestión que en ocasiones no logran dar cuenta de la complejidad de los retos que se despliegan a nivel programático y de la capacidad de concertación que se requiere, presentándose una situación de debilidad organizativa en el desarrollo de apuestas estratégicas y en la existencia de programaciones contingentes y con pocos niveles de planificación y coordinación de agendas. Por momentos se siente un gran agotamiento de los liderazgos en la medida en que sus expectativas y proyecciones no se logran traducir en rutas mensurables y en la visualización de posibles concreciones. Veamos alguna referencia a la situación organizativa del Guaviare:

“Es clave la Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo departamental Guaviare y sur del Meta (MIA) como una organización con tendencia de escalonamiento de segundo nivel, en tanto agrupa organizaciones como: Asociación de Campesinos Trabajadores y Productores de la región del río Guayabero - ASCATRAGUA, Asociación de campesinos trabajadores de la región del río Guaviare - ASOCATRAGUA, Asociación de campesinos trabajadores de la región del río Inírida - ASOCATRARIN y otras 12 asociaciones productoras de la región del Guaviare y sur del Meta; aunque no ha logrado sus propósitos como interlocutor regional por las diferentes dificultades de construcción colectiva que generan los problemas de movilidad y comunicación en este corredor, tiene como propósito fundamental constituirse en un actor de intercambio y toma de decisiones por sectores específicos como: el campesino, juvenil y afro”.

Informe Meta-Guaviare.

Algunas dificultades identificadas en las organizaciones de este primer nivel son la fractura y falta

de proyección política en la creación de agendas comunes que resultan en un debilitamiento de las posibilidades de incidencia política local y disminuye la visibilización tendiente a la construcción de un movimiento social capaz de demandar y presionar la garantía de derechos fundamentales. En el ámbito de las organizaciones indígenas y campesinas esta situación es causada primordialmente por la persistencia de conflictos territoriales y disputas comunitarias e interculturales.

También sucede que en los procesos de base o de primer nivel, en algunos casos los liderazgos empiezan a cambiar, pues en el ámbito formal de las Juntas Comunales se eligen nuevos presidentes comunales y esta situación genera una disputa por estos espacios que han estado tan permeados por virtudes y vicios de la gestión pública y que serán claves en el futuro para disminuir la distancia entre las organizaciones territoriales y la Asociaciones; pero en otros casos se observan falencias en el desarrollo organizativo primario, lo cual resulta en gran fragilidad en la acción colectiva de importantes grupos humanos en el contexto de la implementación. Tal es el caso de algunas comunidades indígenas en el Norte y el Oriente del país:

“Por ejemplo en el suroriente del país, alrededor de los pueblos indígenas se teje una situación humanitaria crítica que siendo compleja presenta dificultades particulares de organización en la gobernabilidad interna de resguardos indígenas; la falta de organización es causante de la poca participación efectiva en espacios institucionales de implementación por parte de las etnias locales; por ejemplo, no son tenidos en cuenta para dirimir conflictos territoriales que se están acrecentando con colonos y en muchos casos las autoridades corrientes deciden por ellos sin tener en cuenta sus propias autoridades, tradiciones y planes”.

Testimonio de equipo de observación Suroriente.

3.2 Las Tensiones Organizativas y la Participación en la Implementación.

Situados en ese panorama de balances es posible sistematizar de lo observado un conjunto de tensiones organizativas que se expresan de manera típica en este momento de la implementación de los Acuerdos. Veamos algunas de ellas:

- Hay una gran tensión entre las organizaciones informales que operan en el cotidiano en relación con el ordenamiento del tiempo y el espacio de sustento vital y la lógica de las or-



Río Putumayo - Puerto Asís 2017

ganizaciones que interlocutan con el Estado por diversas motivaciones. La informalidad es agreste y episódica, no se deja gobernar por las temporalidades del Estado Nacional, es orgánica al paisaje, al clima, a las lógicas de la tierra y del firmamento, no opera tanto con el reloj o con el papel y la pizarra, como con el fogón, o la chalupa, o el animal de montar, tanto con la luna o con los visos que dan las aguas.

“Aquí las distancias son cortas o largas, eso depende del terreno y de la época. Para muchas cosas la media docena de Concejos Comunitarios y los cerca de 64 Resguardos indígenas del Meta y Guaviare no se pueden juntar y para una reunión de estas de las tierras y los cultivos toca ir a buscarlos; pero en las fiestas de la dorada sobre el río o en las fiestas de cosecha o veda sí se encuentra la gente de todo tipo, ahí es que se puede aprovechar. Por eso para estas reuniones con siglas raras no hay ni cómo avisar”.

Líder social San José del Guaviare.

- Se observa también tensión entre las organizaciones de primer nivel que se mueven en el plano de las necesidades y regulaciones territoriales micro y las redes y movimientos que operan en el campo de la mediación e incidencia institucional en ámbitos más amplios de la acción colectiva. Las culturas organizacionales locales van en busca de respuestas concretas, de resultados tangibles de las acciones. En contraste, muchas de las organizaciones de segundo y tercer nivel se mueven en planos bastante ideológicos

y persiguen relaciones y posiciones intangibles, o en ocasiones muy tangibles, pero operan en planos de gestión que resultan más bien abstractos y que, en el mejor de los casos, son asumidos por la población como un servicio de vocerías y representaciones que suelen ser muy inestables. Las tensiones usualmente se concretan en la definición de beneficiarios, coberturas y priorización de iniciativas, pero también en la definición de qué sectores concretos se sitúan en los liderazgos y en la tarea de distribución de beneficios y oportunidades; siempre estas conflictividades están en disputa con las lógicas clientelares.

“En el departamento de Caquetá y en específico el municipio de La Montañita el núcleo básico de las organizaciones sociales son las juntas de acción comunal, sin embargo allí se han venido constituyendo plataformas campesinas que buscan incidir en la vida política de la región estas plataformas son ACOMFLO-PAC que intenta canalizar la Circunscripciones Especiales para la Paz en Paujil, La Montañita, Florencia y Doncello, pues esa organización articula 190 JAC y tienen una propuesta de Zona de Reserva Campesina. La relación entre esta organización y las alcaldías ha sido de disputas políticas, pues ACOMFLO-PAC apoyó al alcalde pasado del Polo Democrático y ha apoyado las iniciativas de izquierda. Sin embargo, han entrado en diálogo permanente con los gobiernos municipales. Esta organización hace parte de COORDOSAC, Marcha Patriótica y mantenido buenas relaciones con la FARC, con acuerdos de respeto por la vida y la permanencia en el

territorio desde tiempos en que esta guerrilla mantuvo el control de la cordillera oriental, donde se encuentran las JAC que hoy integran ACOMFLOPAC”.

Notas de campo sobre diálogos con líderes del Caquetá.

- Hay otra gran tensión entre las organizaciones, asociaciones, redes y movimientos de exigencia de derechos al Estado y las organizaciones que funcionan en el ámbito paraestatal, colaboracionista con el Estado, ya sea en las dimensiones asistenciales, filantrópicas, como de prestación de servicios y acceso clientelar a recursos públicos. El asunto no es menor, pues sin duda hay circunstancias de los territorios que requieren asistencia social, prestación de servicios, gestión técnica de proyectos, pero otro asunto es el uso instrumental de esas gestiones para la corrupción y el abuso de poblaciones vulnerables:

“Uno aquí está sentado en el parque y le van llegando: ve que necesito unos beneficiarios para un proyecto, que ojala sean indígenas, mujeres y desplazadas, eso es lo que necesito, colabórame que eso es para sacar un proyecto que me salió adelante y estoy cogido de tiempos...”

Testimonio Visita San José del Guaviare.

- Específicamente en el campo de la implementación, el principal problema de las organizaciones que reivindican derechos es que a quien se los reclama está siempre distante, pues las instituciones tienden a responder con mucha lentitud, con barreras y procedimientos poco comprensibles y sus responsables suelen tener varias identidades y rutas para entregar soluciones. La asimetría de interlocución y de acceso a recursos del poder público pasan por el tipo de relación que se aspira a establecer y a la tensión entre el modo benéfico asistencial y el vínculo basado en el reconocimiento de derechos ciudadanos y responsabilidades institucionales.

“Aquí en Córdoba son ASODECAS Y ACSUCOR quienes lideran procesos en el marco de implementación de los Acuerdos. Las Organizaciones de Mujeres, víctimas, JAC, Consejos comunitarios, Indígenas, muestran interés en participar en las Circunscripciones Especiales pero tiene poco nivel de información si no están metidas en esas redes. A eso se suma que hay conflictos territoriales entre colonos e indígenas por tierras en áreas protegidas del Nudo de Paramillo y eso también forma sus disputas sobre lo que se dice que van a hacer y no van a hacer, aquí es

malo porque sí o porque no. En algún momento eso tienen que hablar y concertar”.

Testimonio lideresa Córdoba.

- Existen igualmente tensiones por el ejercicio y la formación de liderazgos, vocerías y representaciones en las organizaciones sociales y las comunidades. La expectativa del programa del posacuerdo genera una gran tensión entre los liderazgos y los animadores colectivos, pues se cuestiona la representación y los saberes organizativos, su capacidad de interlocución, creación e incidencia. Se demanda mayor capacidad de acuerdo y convivencia, pero los retos muestran múltiples fricciones en las que recurrentemente emergen las dificultades de comunicación, la angustia por encontrar premisas verdaderas, por obtener resultados y situaciones de disputa en las cuales no faltan las actitudes hegemónicas y de exceso de protagonismos individuales.

“Es que ahora hay un poco de candidatos de cada sector, aquí apenas llevamos unos días concertando como etnia, pero las otras, y el movimiento campesino, cada uno está haciendo su cuenta para ver si le alcanza; esta minga ha salido bien, aquí estamos unidos pero saliendo de esto, vamos es a competir y no hay manera de que nadie afloje, no ve que en esto también se está jugando mucho derecho y mucho beneficio. Se habla mucho de la plata y de la inversión pero aquí estamos tratando es de que no nos quiten. Por eso hay tanta angustia, a mí me da hasta risa todo este bororó y tanta figurita caminando como gallo fino”.

Testimonio de animador indígena departamento del Cauca.

- Por otro lado, el núcleo programático en el que se mueven las organizaciones y movimientos en la cotidianidad tiene relación con la Reforma Rural Integral, con las expectativas de ajuste de las Zonas de Reserva Campesina, la sustitución de cultivos y el acceso a otros mecanismos de producción y sobrevivencia, la reparación a las víctimas del conflicto, la salvaguarda de los derechos étnicos adquiridos históricamente respecto de riesgos presentes en el contexto de la implementación, la formalización de tierras, o la posibilidad de acceso a representación política en el Congreso por vía de las Circunscripciones Especiales de Paz. Frente a esas dinámicas todos los tejidos organizativos tratan de hacer síntesis de sus plataformas, pliegos, proyectos e iniciativas de acción en los territorios, para actualizarlos, potenciarlos y adaptarlos frente a estas nuevas oportunidades y demandas.

“Llevamos un poco de meses dizque en socialización de esos planes, a veces estamos priorizados y a veces no. De pronto se vienen a priorizarnos unas líneas y unos pilares que no se les entiende bien, ellos se hacen entender, uno cree que entiende, pero después ya como que no se entiende. Por aquí el PNUD y ART desarrollan conjuntamente tareas de implementación desde hace meses, y hemos echado mucha lengua y mucha suela de zapato, pero de algo concreto nada. Y eso que les hemos presentado iniciativa y planes, pero esta historia no avanza. Le piden permiso a un pie para que el otro de un paso, y así las cosas”.

Líder social Policarpa Nariño.

- Muchas de esas plataformas, pliegos sociales y acuerdos institucionales son añejos, tienen historia, han sido construidos en tramos largos de conflicto y/o cooperación con el Estado o con los actores armados, o con los dos actores en paralelo, pero ahora existe la tendencia a que no encajen en el proceso de implementación porque exceden el alcance de las iniciativas que se impulsan ahora como políticas públicas, porque no encuadran en los moldes metodológicos que guían las agencias en curso o porque no se siente el reconocimiento autónomo a las expresiones sociales y organizativas de los poderes políticos. Esta tensión no se logra apalabrar de manera directa y se expresa más en pequeñas disputas que son síntoma de desconfianzas y distorsiones múltiples entre los actores de la participación local y regional.

“En el Arauca hay mucha organización, por ejemplo la organización juvenil AJ5, Amarte que aglutina mujeres, el CPDH, DOCH, ACA, ASOJER y la Mesa Cívica Popular de Centro Oriente; son tantas y tienen tantos motivos que a uno se le olvidan; lo que hay que superar es tanta polarización, las organizaciones tenemos que ser capaces de resolver tanta tara ideológica que dificulta el encuentro y la unidad social, para eso tiene que haber más reconciliación”.

Líder social de Arauca.

- En ese contexto se viven luchas internas, disputas inter-organizacionales, comunitarias y también con la institucionalidad pública y privada, es un momento en el que todo se vuelve a barajar, pero con reglas de juego poco claras, pues también están en tránsito de formulación y reformulación. La legibilidad del momento desde los territorios evidencia una gran dificultad para leer los acuerdos; los planes de implementación con

su trama de decretos, estatutos y leyes elaboradas rápidamente por fast track requieren tiempo de asimilación y sobre todo de concertación sobre su eficacia pragmática. Especial atención demandan los asuntos ligados a la expectativa de los PDET que tiene disímiles agendas de inicio, y que están chocando con el reconocimiento a las administraciones municipales, a los planes e iniciativas previas de las localidades y territorios y con los aspectos diferenciales a nivel étnico y poblacional.

“El representante de asuntos indígenas del Putumayo manifiesta que las comunidades indígenas de Puerto Asís no se sienten representados por las organizaciones de nivel nacional y que hacen parte de la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final) las decisiones que se toman se han consultado de manera central pero esa información no está llegando a las comunidades y se está negociando entre líderes y gobierno sin consulta a comunidades. Debido a esta situación de inconformidad entre comunidades y la representación nacional, algunas reuniones de socialización en el marco de la implementación de los acuerdos fueron canceladas por los indígenas de Putumayo. Así también pasa en ocasiones con asuntos de las organizaciones de género y mujer o con algunas veredas apartadas; no se sienten recogidas”.

Nota de Campo visita Putumayo.

3.3 Los Vacíos y Urgencias En Las Culturas Organizacionales.

Sin duda en cientos de veredas y corregimientos ligados a los corredores donde hoy se implementan los Acuerdos hay una gran pluralidad de formas organizativas y comunitarias. Es importante reconocer esta realidad, sobre todo cuando ha existido una tendencia muy marcada de desconocimiento y/o estigmatización de los procesos asociativos que en medio del conflicto armado han sostenido el poblamiento de los territorios. Ese reconocimiento implica una mirada reflexiva, crítica y propositiva sobre las condiciones en las que se han desarrollado esas tramas de organización social, que hoy son muy valiosas para materializar propósitos de superación del conflicto político armado, pero que a su vez requieren rectificaciones y exigen interlocuciones y procesos de fortalecimiento. Veamos los principales ejes observados al respecto:

Existen pocos circuitos de formación y actualización de los agentes organizativos y los que

existen tienen exceso de formalización y llegan escasamente a cúpulas y núcleos asesores. La información circula de manera fragmentada y contingente, sin adecuados marcos de comprensión para las comunidades y organizaciones, generando recurrentemente circuitos de mala interpretación y de confusión respecto a los propósitos, las metodologías, las instituciones y las normas comprometidas en los procesos.

“Así mismo se encuentran las diferentes Juntas de Acción Comunal JAC – de las veredas y municipios que concentran aún un poder local fundamental por su reconocimiento para la interlocución comunitaria, el reconocimiento de los territorios, así como sus posibilidades de interlocución con el gobierno municipal. El problema es que eso a veces se queda en el mismo círculo y no se conecta con los finqueros, los aparceros, con el trabajador, el labriego; los que necesitan o están en el problema, entonces da lo mismo ocho que ochenta”.

Líder social Policarpa Nariño.

En paralelo se observan dos tendencias prácticas y discursivas entre la diversidad de organizaciones que se contraponen y se cooperan a la vez: una gran base de expresión y de saberes populares y ancestrales, sobre todo ligados a las tradiciones orales a modos de hacer cotidianos, y formas de pensamiento ideológico y/o religioso que operan como gafas para la respuesta a la demanda de muy diversas orientaciones sociales y políticas.

“Que día fuimos y estuvimos en ese taller, eso nos hablaron bonito y nos dejaron con calendarios, cuando acabó nosotros todos nos miramos y nos vinimos pa’ la caseta a echar una Pola y a echar risa, entonces sacaron el cajón y unas guitarras y con la tarde fue que comenzamos a recordar las veces que nos han dicho que ahora sí y ahí nos pusimos de acuerdo en qué es lo que necesitamos en palabras cortas para decirla directo me entiende, sin tanta vuelta. A ver si eso es o no es...”.

Líder social Norte del Cauca.

La tramitación de las diferencias y los conflictos interculturales e interétnicos generan un gran desgaste a nivel organizativo, y se han desarrollado pocos mecanismos de manejo alternativo que estén operando en el plano de la concertación y la reconciliación. Especialmente la circulación de conocimientos, saberes e informaciones respecto a los territorios, a los supuestos de su administración pública y a los grupos humanos y

sus atributos culturales, son muy limitados, fragmentados y casi que de usos restringidos. Una de las ausencias o distancias más visibles es la de los sectores académicos e investigativos, claves para una necesaria gestión pública de conocimiento y en esto la presencia va creciendo pero es lenta y la oferta programática es bastante tradicional y poco dispuesta a partir de los saberes situados y a conectarlos en una gestión de conocimiento más permanente.

“Aquí han venido el Sena y la Universidad, están haciendo cursos y encuestas, también la ART está en reuniones haciendo balance de capacidades pero para lo que se necesita las visitas se quedan cortas. Se necesita equipos de trabajo en serio que ayuden a sacar esto adelante. Aquí la Zona de Capacitación ya está, faltan es los diagnosticadores y los planificadores, los profesores viniendo aquí, si no, no se hace mucho”.

Testimonio visita a la Guajira.

En algunos territorios la tendencia a la agresividad y a la resolución de los conflictos por medio de la violencia y las armas está encarnada en los entornos locales y regionales, particularmente con la permanencia de agentes criminales ligados a economías ilícitas e invasivas. En las condiciones de persistencia de la acción armada el sentido de inestabilidad social genera una actitud defensiva respecto a lo distinto y la otredad. Esta especie de clima cultural colectivo mediado por la presencia de poderes armados, afecta también las prácticas de las organizaciones y movimientos sociales en muy diversos sentidos, en algunas ocasiones porque asumen y encarnan ese tipo de relaciones y en otras porque son víctimas de esas lógicas autoritarias.

“Antier salió el amigo de la junta con que lo amenazaron y dicen que a los pastores también les han dicho que no mas culto por aquí, que no se puede mover mucho uno de noche, a los del consejo comunitario pues los han ido sacando, con esa matazón por esos lados, entonces uno resiste aquí en el territorio pero en cualquier momento hay novedad”.

Habitante rural de Municipio de Tumaco.

En muchos casos los asuntos de la identidad y del lenguaje común están en disputa entre lógicas tradicionales y lógicas modernizantes, lo cual produce la tendencia entre las organizaciones a responder al exceso de requisitos técnicos y de ilustración letrada con cierto conservadurismo programático y a una gran prevención

de los abordajes institucionales, generando especialmente dificultades en la comprensión y entendimiento con las estéticas y éticas metropolitanas y urbanas que llegan con los agentes institucionales. La dificultad en los procesos de participación está anudada con las categorías fundamentales de tiempo, espacios, agentes pertinentes, tipos de saberes y mediaciones posibles en la comunicación, este escenario requiere de gran apertura técnica e institucional para poder avanzar sobre bases firmes en horizontes que involucren la perspectiva interétnica e intercultural.

3.4 El Acceso a Recursos un Factor de Autonomía o Cooptación.

Los factores de cooptación de las organizaciones ligados al acceso a recursos financieros y a oportunidades escasas mientras se amplían las demandas han generado especial atención en el proceso de observación. Veamos algunos aspectos claves:

Hay una gran cantidad de agencias internacionales en la orientación programática de las acciones sociales ligadas a la implementación de los Acuerdos a través del financiamiento y del seguimiento a las dinámicas de construcción de paz y democracia; estos agenciamientos, que son una fortaleza, están dispersos desde el punto de vista territorial y aunque están debidamente alinados con metas institucionales, en ocasiones tienen rasgos de externalidad en las comunidades y no son vistos como parte de la agenda de reconciliación y construcción de paz; solo cuando se articulan en plataformas más amplias logran construir interlocución territorial.

“En el contexto de reivindicación de derechos y empoderamiento social y comunitario, y el re-surgimiento y creación de nuevas organizaciones que propenden a la lucha común en el Departamento del Cesar, se destaca la participación de sectores que históricamente se mostraron distantes a tal situación. Por tal, es como hoy se consolida la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Departamento del Cesar, la cual está integrada a organizaciones sociales y comunitarias diversas y acompañada por la institucionalidad, el ministerio público, y organismos internacionales; que más allá de cumplir con funciones lo que propenden es la creación de condiciones para una visión conjunta y de desarrollo territorial para las comunidades. Las organizaciones sociales que convergen en este espacio están orientadas de manera consciente a buscar fines y objetivos específicos que

racionalmente y de forma organizada permitan cumplir propósitos priorizados; como es la defensa de los derechos humanos”.
Informe observación Corredor del Cesar.

El acceso a los recursos de la cooperación, como se ha dicho antes, es fuente de grandes desconfianzas y competencias entre organizaciones en los niveles locales y regionales. Hay confusiones sobre las capacidades del gobierno, los posibles aportes de la cooperación internacional y los aportes de tipo académicos de las redes de la sociedad civil y los centros de investigación.

“Mire lo que pasa es que vienen y hablan de proyectos y de iniciativas, pero después no vuelven, por aquí han venido a talleres y a informes así como este, pero no se entiende bien cuál es el aporte concreto al proceso y a las comunidades; a la hora de la verdad ni el gobierno, ni las agencias internacionales, ni las organizaciones concretan iniciativas que sean realmente con las comunidades. Esto no se mueve solo apunta de foros y reuniones, yo no sé dónde se concreta el aporte de la comunidad internacional, no lo veo claro...”.

Entrevista municipio de La Paz, Cesar.

Las organizaciones también son subsidiarias de las empresas y políticas públicas, y cada vez más, de las inversiones de responsabilidad social de las empresas privadas. Esto suele estar vinculado más a la gestión de iniciativas de asistencia y educación para las poblaciones. En la novedad de los PNIS y los PDET existe la tendencia a replicar los modelos y tecnologías participativas que se han repetido y agotado en los territorios. Se discute mucho hasta dónde estas prácticas generan una relación de dependencia, es decir, si hay condiciones para establecer estas articulaciones desde la autonomía y los vínculos razonables, pues muchas veces la comprensible relación desde la perspectiva de los derechos se confunde con enfoques y prácticas asistencialistas y desarrollistas que generan gran desánimo en las comunidades.

“Por otra parte está el movimiento cocalero en el Putumayo y el Caquetá. Estos hombres y mujeres son de tradición agrícola, que con la bonanza cocalera llegaron de departamentos como Caquetá, Cauca y Huila, la gran mayoría en condiciones de pobreza en los que la coca ha terminado siendo el mecanismo mediante el cual garantizan las condiciones básicas de vida y el sostenimiento de la existencia familiar. De las organizaciones de cocaleros hacen parte

los cultivadores, los raspachines y los cocineros menores quienes han tenido presencia organizativa e identidad colectiva desde los años 90, manifestándose en las llamadas marchas cocaleras en estos departamentos y que hoy en su mayoría son representados por la Comisión de Sustitución Gradual de Cultivos de Coca de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, para oponerse al proyecto de erradicación forzada y concertar la sustitución gradual y concertada. Ellos han repetido a las agencias que el modelo de sustitución no va a funcionar porque no resuelve el problema del sustento a mediano plazo, sus aportes han sido vistos como una resistencia al cambio, pero ellos insisten en que sí están dispuestos a sustituir la coca, pero en condiciones mínimas de dignidad y que no les pongan en riesgo su manutención y sostenibilidad. La tendencia ha sido a responderles con erradicación forzada”.

Notas de Campo Visita Putumayo.

En medio de los esfuerzos por repotenciar los procesos organizativos en el contexto del pos-acuerdo, el modelo de ONG subsidiaria del Estado y en particular de las gestiones clientelares de recursos se generaliza, vinculándose con prácticas de corrupción en las esferas de gestión pública. Un indicador en estos territorios es el reciente crecimiento y activación de personerías jurídicas, tanto desde el punto de vista de nuevas formalizaciones de asociaciones, corporaciones, asociaciones, redes y/o cooperativas, como de la compra y reforma de las inscripciones de Cámara de Comercio para ponerlas en operación, a la espera de la gestión de recursos del “posconflicto”, mientras tanto hay contraste con organizaciones de derechos humanos y de víctimas que evidencian dificultades para sostener sus gestiones:

“En el Meta hay fuertes procesos de asociación a nivel organizativo que se movilizan en la implementación asumiéndola como una oportunidad, por ejemplo la Red departamental de Mercados Campesinos, la acción de la Diócesis de Granada, la Organización de Familias de desaparecidos. Sin embargo, en el Meta también hay fragmentación y debilitamiento de organizaciones sociales como la Mesa humanitaria del Meta, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y en general las ONGS defensoras de derechos humanos están dejando de funcionar o tiene problemas para desarrollar sus acciones y planes por exclusión de la implementación de los recursos del posacuerdo.”

Observadora del Oriente del país.

En algunos territorios, sobre todo los afectados por las disidencias de las FARC, el ELN y las bandas criminales, las economías y empresas delictivas buscan seducir o constreñir a la población y a sus organizaciones para que convivan y cohisten con la actividad criminal. Los diversos tipos de organizaciones se sostienen en medio de los eventos de violencia, intentos de captación y constreñimiento con mensajes muy disímiles: ofertas económicas para mantenerse en la actividad de negocios ilícitos, propaganda contra los reincorporados, suplantación de autoridades o de grupos armados, cobro de vacunas, imposición de reuniones y tareas a las comunidades, y lo más radical amenazas y asesinatos.

“Aquí estamos es trabajando, nosotros escuchamos a veces por la televisión que por aquí cerca están dejando las armas los de las FARC y que ahora sí llegó la paz; a veces también pasan muchos contingentes del ejército y se ven más relajados, pero aquí todavía llega el abigeo a robar o llegan armados de toda la vida a decir que esta semana no se puede sacar el lulo o la mora, entonces se nos daña el producto. Han venido a hablar también de proyectos rápidos de beneficio de la paz y han prometido arreglar la vía que es el anhelo, pero que eso en invierno no se puede, que toca esperar otros meses. Como siempre...”.

Poblador alta montaña en límites Norte del Cauca, Sur del Valle.

En ocasiones las tácticas de sobrevivencia de las organizaciones implican procesos de adaptación a los actores legales e ilegales que llegan o que se mantienen. El “argumento” de las armas es definitivo, el que tiene armas y/o dinero tiene capacidad de mando y de hacerse obedecer. Es claro que al salir unos actores armados y unas armas de circulación, en la medida en que no llegan de manera precisa y permanente las fuerzas del Estado, se mantienen disputas armadas y se conservan tentativas y prácticas sobre estas áreas que han sido tradicionalmente manejadas en esa perspectiva de poder armado ilegal que regula tiempos, movilidad, actividades productivas y convivencia social, asumiendo una suplantación del Estado.

“Aquí antes venían y nos decían que teníamos que salir a la carretera y que teníamos que aportar todos para el transporte de la protesta, y ahora ellos ya eso no lo pueden hacer, porque además de esas movilizaciones solo unos sectores se beneficiaban y otros nunca vimos mejoría; el problema es que pensábamos que

ya íbamos a salir de esa, pero no... vea que hace un mes no más pusieron la bomba ahí en la esquina; apareció otro grupo a decir a qué hora y por dónde nos podemos mover y no demoran en venir a cobrar, entonces así es muy difícil...".

Líder social comunidad del Guaviare.

Se evidencia especialmente un gran limitante de la sostenibilidad y desarrollo financiero de las organizaciones civiles, al punto que se observa comprometida su independencia y su capacidad de persistencia. También se evidencian grandes limitantes respecto a la posibilidad de acuerdos y gestiones conjuntas en los territorios, por el ambiente de competencia interinstitucional y social que potencia la lucha por las sobrevivencias organizativas; la tendencia, con pocas excepciones, no es al encuentro fraterno y cooperativo entre territorios, la solidaridad es más familiar y local, pero a nivel territorial más amplio falta capacidad para desarrollar consensos e identidades. Este escollo se siente tanto en la implementación de PNIS y PEDT, como de las conversaciones previas respecto a las esperadas Circunscripciones Especiales de Paz.

"La participación de estas organizaciones de base en las próximas elecciones con candidatos propios en la Circunscripción Especial de Paz ha despertado notable interés en sus líderes, que aspiran a alcanzar figuración nacional y cierto poder regional. A todos, sin embargo, les preocupa que ante la proliferación de liderazgos, la delantera la logren aquellos que hagan acuerdos con los partidos políticos tradicionales, manejadores del poder desde las alcaldías municipales y quienes cuentan con el respaldo de la tradición social y de los recursos que les permite la administración pública".

Notas de Campo Departamento de Córdoba.

3.5 Síntesis Sobre las Tensiones y Desplazamientos en el Campo de la Organización Social.

- La firma del Acuerdo para poner fin al conflicto armado y el año de implementación que va corrido ha generado una dinámica de reactivación de procesos organizativos en todos los niveles, provocando una emergencia en la constitución de nuevas formas organizativas y asociativas. Aunque esto es ya una ganancia del proceso, también es una condición propicia para que el conjunto de las dinámicas de justicia, reparación, rectificación, reconciliación, avancen en un plano de democratización del país desde la vida cotidiana hacia sus estructuras colectivas

en lo local, lo regional y nacional. La movilización del proceso de participación requiere una oportunidad de fortalecer las iniciativas organizativas de las comunidades y entes territoriales desde un enfoque de pluralismo, concertación, encuentro y generación de identidades que está apenas comenzando y que demanda de grandes energías y esfuerzos de Estado y sociedad.

- En los diversos territorios se observan fuertes fracturas en la relación entre organizaciones de primer nivel, tipo grupos mutuales, comunales, pastorales, poblacionales y del territorio, y organizaciones de segundo nivel, más relacionadas con dinámicas asociativas y de implementación de iniciativas para la realización de derechos y de empoderamiento social. El aspecto más sensible de esta tensión inter-organizaciones se mueve en términos de la estructuración de los liderazgos muy mediado por influencia de lógicas poco procesuales y con influencia de prácticas autoritarias.

- Hay una dinámica permanente y naturalizada de cooptación de las organizaciones y redes sociales en razón de los regímenes de captación y distribución de recursos públicos, de cooperación internacional y de aportes privados vía responsabilidad social empresarial. La lógica de las intervenciones externas, sin adecuados protocolos de abordaje, con daños colaterales, establece relaciones indeseadas de dependencia social de agencias particulares y no públicas, respecto de la expectativa de establecer relaciones de independencia, mediadas por intereses generales, por bienes comunes y espacios públicos.

- La lógica de poderes políticos mafiosos afecta las autonomías de los tejidos de organización social en todos los niveles, generando inestabilidad en razón de dos formas de coacción: la primera, ligada a acciones que tienden a fracturar la cultura democrática común de las organizaciones y a vulnerar sus liderazgos y vocaciones de política transformativa. La segunda, relacionada con el uso de amenazas a líderes y de desplazamiento, confinación y asesinato, asociados a disuadir a los grupos organizados de movilizarse por sus fines colectivos.

- La forma en que se está discutiendo la conveniencia de los acuerdos y la manera en que se mezclan y tensionan procesos diversos como la participación de las comunidades en asuntos sustantivos de la implementación, el proceso de reincorporación y la movilidad en el territorio de

las excombatientes, como los asuntos de transformación e inclusión política en el marco del nuevo periodo electoral, generan un entorno de desconcierto y polarización complejo para el desarrollo y el aporte de las organizaciones. En expectativas como las Circunscripciones Especiales de Paz se está poniendo en juego el avance del proceso en términos del sentido de pluralismo y de reconciliación, este reto implicará confrontar la lógica de individualismo, el gregarismo organizacional, la ruptura de las cadenas y los relevos intergeneracionales, privilegiando la emergencia de nuevas subjetividades y personalidades democráticas.

- Ante el cúmulo de retos y demandas de participación efectiva que implican altas competencias para la concertación en medio de las diferencias y para gestión de la acción con sentido prospectivo sobre los territorios, se evidencian vacíos en la formación sociopolítica, ética y técnica en los grupos organizados y en los liderazgos sociales. En este campo los desarrollos organizativos existentes están por lo menos desactualizados, prima el empirismo y la lógica de la sobrevivencia, lo cual termina generando el riesgo de abortar procesos, exceso de conflictos y cortes en los ritmos de gestión.

- También se reporta una dinámica institucional de desconocimiento, trato prevenido y poco atento a las lógicas, tiempos y espacios de las culturas populares, étnicas y campesinas que son muy disputadas por las lógicas mafiosas y que son poco interpretadas, interpeladas y potenciadas por los ejercicios institucionales de implementación de los Acuerdos.

- Las agendas institucionales de implementación de los acuerdos tienen una tendencia a ser muy verticales, centralistas, desorganizadas y dispersas; en los territorios existe la percepción de que hay desorden y que no existe un plan maestro que articule todas las variables y procesos inherentes a la dinámica propuesta, lo cual contribuye a la fragmentación y a la polarización de los tejidos organizativos locales y regionales que buscan encontrar sin mucho éxito una comprensión del conjunto del proceso y una agenda práctica para el periodo de transición, pero que en muchos casos no se logran por falta de rutas y mediaciones adecuadas. Este asunto involucra una demanda de intervenciones más claras para tratar los procesos y los conflictos que

se van presentando con un sentido procesual y pacífico, con énfasis en la coexistencia y la convivencia.



COLINAS - SEPTIEMBRE 2017

4

**LAS TRANSFIGURACIONES DE
LA CULTURA CLIENTELAR Y
LA CORRUPCIÓN EN EL
POSCONFLICTO**

El avance en la negociación de una porción importante del conflicto armado que se concreta en el Acuerdo de noviembre de 2016 con las FARC es un evento fundamental que impacta las matrices de poder real y que busca generar condiciones para la transformación social y política del país. En esta posibilidad se juegan múltiples tensiones en la relación de permanencia y cambio en los rumbos del poder político en Colombia.

Hemos descrito en la introducción del presente informe el marco de la larga duración en el cual se inserta el Acuerdo y hemos examinado aspectos territoriales y organizativos del mismo asunto; ahora hagamos una breve aproximación a la coyuntura. Tres hechos son claves en el momento actual:

En primer lugar, el Acuerdo se suscribe dos años antes de finalizar el mandato del presidente Santos, lo cual implica un traslape entre la toma de medidas necesaria para concretar la implementación del Acuerdo y los inicios de la campaña electoral. En segundo lugar, entre finales del 2016 y principios del 2017 se han abierto investigaciones por corrupción (Obredecht, Reficar entre las principales) que han impactado de manera importante el debate público sobre asuntos que antes no eran tan visibles. En tercer lugar, las inconformidades que quedaron por la manera en que se refrendó el Acuerdo, después del plebiscito del 2 de octubre del 2016, hacen que exista una polarización en el Congreso con referencia a los proyectos necesarios para la implementación del Acuerdo, como son la Reforma Política, la Jurisdicción Especial para la Paz y las Circunscripciones Especiales de Paz, la Reforma Agraria Integral entre los más significativos.

En ese escenario es de vital importancia reconocer la manera como se movilizan las estructuras, redes y matrices de poderes políticos regionales y nacionales respecto a las tensiones sobre las expectativas de democratización generadas en la implementación de los Acuerdos, específicamente en lo que tiene que ver con el punto 2 del Acuerdo relacionado con las transformaciones políticas. La intuición que acompaña este proceso de observación gira en torno a las ventanas que abre o cierra al ejercicio político a futuro, en este acápite nos centramos en explorar las tendencias sobre esas expectativas de apertura política democrática.

4.1 Las agencias Económicas Corruptas en la Política.

“Este río Guayabero es esplendoroso, yo acá me olvido todos los días del mundo. Viéndolo

uno no puede dejar de soñar. Ah, mal haya⁷, será que ese Acuerdo nos ayudará a hacer que la política sea más limpia. Porque en esta tierra el que más tiene más manda. Y los poderosos siempre encuentran el atajo, la manera de salirse con la suya. Yo aquí transporto gente, ¡si yo le contará las cosas que se escuchan!”.

Conductor en Guaviare.

Esta inquietud expresada por el hombre que nos transportaba hacia la Zona Veredal de Charras la escuchamos de muchas maneras en todos los corredores por donde transitamos, aunque está dicha con escepticismo en su interior se encuentra cargada de esperanza. La pregunta que abordamos a continuación se centra en la relación entre poderes económicos y políticos en el marco de la implementación del Acuerdo, específicamente se interroga sobre el impulso que puede generar esta nueva coyuntura a la regulación de los poderes socioeconómicos respecto a la injerencia indebida en política.

“De lo que si estoy seguro es que sin las FARC todo va a mejorar en esas zonas, yo no sé mucho del asunto, pero un amigo que trabaja en un ministerio me contó que ya se están haciendo alianzas con inversión extranjera para generar empleo, ahí también hay que empezar a meterse, buscar relaciones. Usted sabe, si uno se mete en la pomada logra cosas, yo fui a La Habana, como víctima, me pareció bien lo que nos dijeron, toca dejar tanta rencilla para sacar adelante el país y la región, incentivar la productividad del campo, así tendremos más desarrollo”.

Agente institucional de sector gremial de Cali.

“Yo estuve ayudando en la conversación con las FARC desde tiempos del presidente Uribe y en los dos mandatos del presidente Santos, nos tocó conversar con todo el mundo y convencerlos. Los empresarios al principio tenían muchas dudas, hay un sector con el que no pudimos conversar, como es el caso de los ganaderos, pero luego de muchos diálogos fueron viendo las posibilidades, para ellos mismos como sectores gremiales, eso ayudó mucho a impulsar el proceso”.

Empresario del Valle del Cauca.

La negociación del Acuerdo de la Habana generó acercamientos con sectores y actores gremiales e intergremiales, sensibilizando sobre los beneficios y los riesgos que brinda el cierre del conflicto armado con la guerrilla de las FARC-EP,

⁷ Expresión llanera que significa: qué tal que se pudiera.



Bajirá - Chocó 2017

en términos de oportunidades para el desarrollo del país, seguridad territorial y democracia. El empresariado medio, sacando los portavoces gremiales, piensa en términos de la estabilidad de su entorno de desarrollo económico y no alcanza a traducir ese interés central en asuntos políticos que vayan más allá de esas intencionalidades de lucro. Esta circunstancia genera dificultades para aproximar posiciones y diálogos con actores que piensan diferente.

“Nosotros nos asesoramos, pero no sólo con personas de izquierda, conversamos con gente del INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) y funcionarios de la ANT (Agencia Nacional de Tierras). Uno con la negociación encima y con la interlocución permanente con el gobierno conoce funcionarios que son buena papa, que están interesados en ayudar, que ven esto como una oportunidad para hacer que propuestas que les parecen justas y realizables se impulsen. Nosotros nos damos garra para trabajar lo que está haciendo la CSIVI, trabajamos propuestas para los compañeros que están representando. Cuando conocí el borrador de propuesta de Ley de Tierras que estaba formulando no era la reforma agraria que queríamos pero... hasta me animé. Entonces algunos funcionarios del gobierno empezaron a decir que les estaban jalando las orejas porque algunos Ministros no estaban contentos, porque llegaban los gremios y se quejaban. Luego el ministro Iragorri y el director de la ANT, Miguel

Samper, salieron con una propuesta distinta a la que se conocía entre los técnicos y la CSIVI.
Excomandante FARC Tierra Grata.

El caso citado muestra cómo se crean desequilibrios en el trámite de leyes que por la vía *fast track* pretendían operativizar el Acuerdo, en la medida que se agencian demandas desde intereses particulares por fuera de los canales establecidos. No es que se generen demandas válidas desde los diferentes actores sociales, el nudo problemático es que no se brindan condiciones de igualdad con todos los sectores sociales, los cuales se quedan sin representación en el proceso de formulación de iniciativas. No hay que olvidar que el carácter histórico de esta problemática fue la que hizo que se incluyera en el Acuerdo y por eso abordarla implica una gran concertación democrática de cara al país.

“Vivo en Bogotá pero trabajo en el sector minero, a pesar de que toca viajar mucho y eso con el tiempo ya cansa. Nosotros estamos contentos, nos ha ido bien con el Acuerdo de paz. La semana pasada el doctor Lloreda⁸ de la ACP dijo que al sector ha vendido más. ¡Ay, qué pena!, su merced no debe saber, ACP es la Asociación Colombiana del Petróleo... Ya sin las FARC delinquiendo, la inversión extranjera tiene más confianza, toca es moverse con palancas para aprovechar el cuarto de hora”.
Agente institucional de petrolera Arauca.

⁸ Se refiere Francisco José Lloreda Mera.

En medio del diálogo se esboza la gran capacidad del sector minero para encontrar vías de desarrollo de la industria que no siempre van en el sentido de tributar y compensar a los territorios y comunidades donde se opera; pero sí centrados en la macrooperación económica con capitales foráneos que no necesariamente está claro se ejecuten en el marco de una relación virtuosa entre agentes económicos y políticos.

“Una campaña acá en Putumayo puede estar alrededor de los tres mil millones de pesos, si es para la Alcaldía pero al Senado unos cinco mil millones. Los candidatos muchas veces los consiguen pidiendo aquí y allá. Uno se pregunta cómo hacen para devolver los favores los Congresistas si ellos no tienen billetera como los alcaldes. Pues es sencillo, con los famosos cupos indicativos. El problema no es que el Representante a la Cámara busque cómo hacer llegar proyectos a la región, el problema es que recomienda que se contrate a fulano o a sutaño y entonces la empresa cobra el servicio y se saca lo que había abonado, con los intereses por delante. Eso sucede porque en estos lugares tan apartados no hay líderes que luchen contra la corrupción, las elecciones se mueven con las necesidades de la gente. Ahora, por ejemplo, van a haber regalos de navidad para todos”.

Concejal Putumayo.

El anterior relato es producto de la entrevista a un Concejal en Putumayo que en la conversación hablaba con tono inquisitivo y por momentos se exaltaba. La manera cómo se enuncia evidencia la naturalización de una práctica que no sólo es ilegítima sino ilegal, y que se ha vuelto común y ha ganado aceptación en varios territorios visitados por la falta de acción de los órganos de control.

“En este país el dinero y la política tienen una relación muy íntima, acá no es posible que alguien haga campaña sin una gran cantidad de dinero, terminan vendiendo el alma porque le hacen favores a uno y otro sector. Yo le cuento el milagro pero no el santo...”

Acá hay un señor que presta plata, nadie sabe de dónde saca tanto dinero porque apoya a varios candidatos, cobra alto el impuesto, pero es algo así como una institución, siempre participa (jajaja). Aunque sinceramente, ¿usted cree que este señor les prestaría a las FARC?... Yo creo que no necesitan, ellos tienen de sobra, pero hay dudas respecto a lo que vayan a hacer. Yo soy un demócrata pero ya tenerlos en la plaza pública y con ese poco de dinero, pues el partido de uno puede estar quedando en desventaja”

Concejal Tolima.

Un concejal del Tolima nos cuenta su percepción sobre la manera cómo se está dando esta relación entre economías y elecciones. Regularmente cuando se piensa en mafia la imagen es la del narcotráfico, pero olvidamos que la mafia en la política también puede estar en el plano de las inversiones, la política como un renglón rentable que se vale de métodos que no están ceñidos al ordenamiento jurídico. La inquietud por la procedencia de las fuentes de financiación de las campañas se extiende sobre las rentas de las FARC. El manejo que este partido político naciente haga de sus finanzas será determinante para la imagen que construyan en términos de transparencia, aspecto central a la hora de reconocer las posibilidades de transformación o permanencia de lógicas corruptas en política.

“Estamos pendientes de los PDET. Porque ahí pueden darse oportunidades, en este sector, pero la Agencia se reúne más con las fundaciones de los cañeros y con industriales que con nosotros la comunidad, aquí vienen con formatos a sacar la información y no entregan información de los recursos, en cambio allá en esas reuniones si muestran dispuestos a contar de todo; nos tratan con desconfianza y como niños chiquitos”.

Líder social Sur del Valle.

Sobre la relación economía y política se evidencia el optimismo sobre la posibilidad de crear condiciones de desarrollo en el país. No obstante, en la medida que no se han generado los canales de comunicación pública que permitan a todos los sectores reconocer las transformaciones que se están produciendo, las oportunidades se agencian desde actores gremiales y empresariales que tienen ventajas en términos de información y de redes de relación para dinamizar su capacidad de incidencia.

4.2 Los Entornos Culturales de la Política en el Posacuerdo.

“Ajá, tu sabes, yo de política entiendo poco, yo la otra vez pude hablarles porque esta tierra cordobesa mi marido y yo sí que la conocemos... pero yo si te digo una cosa, una mujer como yo quisiera que alguna vez la política no sea esa pelea de perros y gatos de siempre, si estamos en la época de la paz, dejar de hablar mal del otro y de echar zancadilla”.

Dueña hotel en Tierralta.

En las expresiones cotidianas son recurrentes las luchas entre una mirada optimista y un prejuicio respecto a cómo son y se resuelven los asuntos del poder político por parte de la población en los territorios marcados por el conflicto. En ese contexto se abordan situaciones de la política en el posacuerdo y emergen distintas preguntas que pueden sintetizarse en estos términos: ¿hasta dónde en el posacuerdo se constituye en un momento que impulsa una cultura política democrática? Veamos algunos elementos que surgen al respecto.

4.2.1 La socialización del Acuerdo una opción para construir cultura de paz.

“El mayor choque que tuve al ir a la ZVTN fue encontrarme con un ser humano, y no con el ser peligroso, ese personaje mítico del que se habla en la región cuando se conversa sobre la guerrilla de las FARC. Para mí la importancia de pedagogía de las FARC cuando salió a las comunidades era que los vieran y entonces se dieran cuenta que son campesinos, indios y mestizos humildes. No tanto porque convengan a la gente de sus propuestas, que eso lo veo difícil, sino por la posibilidad de relacionamiento, de compartir ideas, de verse ambos como hijos de Cristo”.

Párroco Diócesis de Montelíbano.

Este testimonio muestra cómo el habilitar espacios de encuentro entre los excombatientes y la ciudadanía permite transformar la mirada intersubjetiva y desmontar ideas preconcebidas, especialmente cuando las gestiones de la reincorporación han estado diseñadas para trabajarse conjuntamente entre el Gobierno, las FARC y la ONU, pero sin claridades respecto al relacionamiento social más amplio. El encuentro y diálogo con el diferente son imprescindibles para construir una cultura política democrática fundamentada en la diferencia y el respeto por el otro; la pedagogía para la paz en el momento de llegada era una oportunidad para generar ese diálogo.

“He trabajado muy fuerte, de noche y de día. Hay asuntos que las FARC misma no calcularon. Movieron contingentes de personas que iban de un Frente a otro, por eso los excombatientes que hoy están esta ZVTN (hoy ETCR) no conocen la zona, ni sus líderes, ni sus problemas, tampoco la gente los conoce a ellos. Por ejemplo, acá la Carmelita era una zona dominada por el Frente 48, la comunidad reconoce a los muchachos de ese frente pero a muchos de los

que están acá no, entonces termina sucediendo que aquí hay otros que no tenían presencia, ni dinámica en la región. Yo siempre colaboré para que hicieran pedagogía pero les tomó un tiempo organizarse para eso y no siempre estaba clara la tarea, qué era lo que deberían hacer en la comunidad, esto último lo digo yo desde lo que he visto, es mi percepción”.

Agente OACP.

Las FARC diseñaron una estrategia política de concentración de la fuerza en el periodo de dejación de armas de cara a la reincorporación: los que eran de Putumayo o Caquetá o determinado lugar debían hacer el proceso de dejación en esta zona dejando el Frente en el que estaban combatiendo. Esto implicó una fractura en el vínculo territorial que hizo lento el proceso y probablemente repercutió en la capacidad para generar las condiciones para hacer la pedagogía política y tener las interacciones necesarias con la comunidad.

“Yo le puedo contar cómo nos ha ido con eso de la socialización de los Acuerdos que para nosotros es una pedagogía política. Algo pudimos hacer en Meta, Guaviare, Cauca, Putumayo, Caquetá, Planadas, Icononzo pero en Córdoba, Bajaría, Vidrú, Dabeiba, Anorí, Santander y Arauca no tuvimos las condiciones de seguridad para salir. Aunque en todas partes muchas veces tuvimos que ir solos, sin el protocolo de seguridad, pocas veces tuvimos acompañamiento, salíamos porque las comunidades mismas nos contaban cómo estaban las cosas, pero...”

Componente FARC en reunión Mecanismo Tripartito de Monitoreo de Córdoba.

“Yo he ido a las reuniones de socialización de los Acuerdos que ha hecho las FARC, han dicho que se van a quedar en la zona, nosotros no sabemos dónde, aquí tenemos es territorios colectivos. Yo si quisiera que nos dijeran cómo va a ser, porque los que tienen familiares acá pues llegaran a sus casas, se reencontraran, pero ¿y los otros? Dijeron que primero nos contaban qué era el Acuerdo para que nosotros supiéramos que tenía de bueno, de beneficioso para nosotros, pero luego no he podido ir aunque los vecinos que han ido tampoco saben muy bien cómo va a ser la convivencia”.

Habitante Buenos Aires Cauca.

En algunos territorios los escasos espacios de pedagogía política entre las FARC y las comunidades no posibilitaron el intercambio humano

necesario para abordar las dudas de la comunidad sobre la dinámica del proceso de reincorporación y tampoco los suficientes acercamientos para facilitar un intercambio subjetivo que permitiera desmontar estigmas y potenciar más allá de la coexistencia cotidiana, una convivencia pluralista, proyectada al ámbito de las interacciones políticas.

“En Tierralta al principio cuando alguien iba para el PTN de Gallo, le preguntaban: “¿ya para el hospital?” Porque inicialmente a este campamento llegaron combatientes de las FARC que tenían alguna discapacidad. Aunque realmente ese nombre lo colocaron los tierraltenses por la primera impresión que tuvieron, porque con los días han llegado más excombatientes. Claro que la inquietud más genuina de los tierraltenses, su asombro, es por la cantidad. No pueden creer que ese poquito de excombatientes haya puesto en jaque la zona, siempre tuvieron la sensación que eran más, consideran que hay tan poquitos, La pregunta que hacen es: ¿será que esa gente si va a cumplir?”.

Nota de campo visita PTN de Gallo.

Este tipo de testimonios de los cuales hay decenas, reseñan la persistencia de estigmas en los territorios sobre quiénes eran los combatientes que llegaban. En medio de esas circunstancias y ese ambiente gravitan preguntas sobre la manera en que se iba a generar la relación con los excombatientes, y en la medida en que en algunos sectores hay poca interacción existe la tendencia a resolverlas con supuestos y con preconcepciones muy arraigadas.

4.2.2 La comunicación y la movilización de Sentimientos de odio y venganza.

“Uno no sabe qué creer. Ayer me llegó por el whatsApp el pedazo de un programa de televisión. Estaba el que es cieguito, el de las FARC... ¿cómo es que es? Santrich. Discutían por eso de la justicia para la paz. Mejor dicho se gritaban. Yo no recuerdo quién era el entrevistador, no era conocido, yo de política no sé. Lo cierto es que abajo del nombre escribían: terrorista de las FARC. Eso me llamó la atención. No que ya se desmovilizaron, yo no entiendo, ¿ya están en la normalidad? Aunque esa gente verdaderamente”.

Vendedora en restaurante.

En las poblaciones visitadas hay un gran contraste entre lo que acontece en las Zonas Veredales y los mensajes de algunos medios de comunica-

ción que llegan a sus hogares; las noticias generan dudas y sentimientos de odio y venganza. De esta forma, por la simbología utilizada, el ciudadano que no sigue detenidamente la implementación, porque no hace parte de sus preocupaciones cotidianas, termina estigmatizando el proceso y a las FARC, pero sobre todo movilizándolo sentimientos que conducen a la polarización.

“A mí me gusta es poner el programa de la mañana de radio porque ahí en la radio es que uno encuentra la verdad de lo que pasa por aquí; llevamos días de tranquilidad, no pasa nada; pero todos sabemos que cosas si van a pasar, entonces uno escucha y ahí van diciendo toda la malicia que se está montando y que nos va a fregar la vereda con gente de esa que ya se había ido y ahora vienen dizque a reclamar lo que dejaron tirado...”.

Poblador Putumayo.

La mayoría de propuestas comunicativas locales y regionales están dinamizadas desde la necesidad de la adhesión a una posición particular que de la posibilidad de abrir una discusión pública de cara al momento. Así se genera un clima de estigmatización que busca, a partir del manejo de las emociones, excluir de la vida social y política a los reincorporados y a las comunidades de los entornos del conflicto.

En los recorridos de observación fue posible constatar cómo existe una gran trama de expansión entre los dispositivos comunicativos que tienen impactos en públicos muy diversos y el despliegue de rumores y especulaciones que se extienden por todo el plexo de las relaciones sociales cotidianas. Siempre que hemos preguntado por el fundamento de múltiples afirmaciones que por lo menos resultan temerarias has salido a relucir argumentos de autoridad “lo dijo suttano y él es serio” o creencias arraigadas, “siempre ha sido así”

4.2.3 El anhelo del orden regido por las armas.

Otro asunto recurrentemente observado en las poblaciones es el arraigo al porte y uso cotidiano de armas, que remite a un espectro comunicativo en el cual las armas están cargadas de significación y de funcionalidad.

“Cuando iba de Timba para allá vimos un montón de gente al lado del puente, miraban hacia la distancia y murmuraban. Un agente de policía estaba a la orilla del río y el otro en la



San José del Guaviare - Guaviare 2017

moto en el puente. Como íbamos en un vehículo particular paramos y preguntamos: ¿qué está pasando? Usted sabe, uno no puede ir siguiendo así como así, de golpe arriba haya un calentao. Nos contaron que el ladrón cuando vio que la policía ya lo iba a alcanzar se tiró al río y dejó acá la moto. Allá va nadando, pero ahí sí, quién lo alcanza, ya se les voló. Jajaja Los policías lo persiguieron desde Santander de Quilichao hasta acá pero ya tirarse al río, ahí sí ya les dio... ustedes saben. La verdad a mí me parece que si hace falta quien acabe con tanta sinvergüencería, acá antes no robaban como ahora, ¡las motos se las llevan es todas!"

Nota de campo de visita a La Elvira.

No sólo es que exista desinformación y se fomenta la estigmatización, sino que en los sitios en donde ha sido común la presencia armada, la lógica para enfrentar los problemas de convivencia está ligada a la utilización de la fuerza. En ese contexto, se demanda un actor que ponga orden, renovando la tendencia autoritaria e impidiendo que se exploren alternativas diferentes al control militar en la medida en que se considera que el armado es más eficaz para evitar robos y mantener un cierto ordenamiento.

"Vea mijito, es que cómo van a querer controlarnos las escopetas, eso ya uno no puede tener su fierrito para la defensa de los animales y del robo; antes uno tenía su arma; su escopeta, su changon y los muchachos no molestaban

por eso solo lo quitaban si había trago y pelea familiar; pero eso es como una herramienta; ahora con ese poco de retenes el que tenga una cañafístula pa cazar es un terrorista."

Poblador Miranda Cauca.

Cuando se ha convivido con las armas y se han dispuesto manuales tácitos y explícitos para regular la vida cotidiana desde un sentido de autoridad que emana de éstas, el tejido social se vulnera y se acostumbra a resolver las relaciones humanas, sociales y políticas con autoritarismo, impidiendo la aparición de vínculos más democráticos. El proceso de implementación tiene el gran reto de transformar el guerrerismo hacia perspectivas de convivencia y reconciliación.

En resumen, la pedagogía relacionada con el acercamiento al otro, al diferente es una vía para renovar la cultura política con una ética tolerante y civilista. Desafortunadamente en la coyuntura de implementación esta alternativa no logra aun contrarrestar la polarización generada por la desinformación auspiciada entre otros espacios, por algunos medios de comunicación y por el deseo de la ciudadanía de contar con la presencia de grupos armados para resolver conflictos locales, en un clima de competencia y rumores, todo lo cual impide que la tendencia autoritaria en las comunidades se pueda transformar.

4.3 La Implementación del Acuerdo y las Redes Políticas.

“Uno mantiene la esperanza, por eso fue que votamos por el Sí. Yo creo que la política va a cambiar, esto no puede seguir siendo lo mismo, imposible que esta tierrita no tenga mejor suerte. Yo si tengo mucha fe, yo creo que una negociación como esta que dicen es la mejor pues tiene que servirnos, yo creo que eso debe acabar con esas mano de familias y grupos que se juntan sólo por interés particular. Muchos dudan pero esto tiene que cambiar cosas en la política”.

Habitante de Arauca.

El cambio en las relaciones políticas y en las oportunidades para sectores que no acceden a la participación en la vida ciudadana y a la presencia del Estado es un deseo de muchos de los grupos sociales que consideran que la implementación del Acuerdo va a significar estas transformaciones, es decir, se espera que los cambios que se originen por la implementación de los acuerdos impliquen un avance en la agencia política democrática, esa expectativa es ahora nuestro centro de exploración.

4.3.1 La política sin violencia el gran anhelo.

“Hay dos cosas muy positivas: el cese de hostilidades y la posibilidad de hacer política y acercarse a zonas que la institucionalidad nunca había podido ir, eso es un avance, por acá había funcionarios que no conocían muchos lugares del municipio y ya estamos yendo”.

Funcionario de la Montañita.

En términos del entorno político la expresión más optimista está centrada en los evidentes logros del año de implementación en relación con el desmonte del conflicto armado, este aspecto ha implicado un desdoblamiento del territorio, una nueva posibilidad de reconocimiento y de la integración de las localidades en sus zonas rurales y urbanas. Por esa vía emergen también posibilidades de reencuentro entre actores que alguna vez convivieron o incluso que fueron enemigos, y que ahora tienen la oportunidad de reconocerse desde un lugar diferente.

“Mire hay un resguardo qué está para los lados de ese Frente 59, y ellos pasaban por esta cabecera y la relación era mala, nos veíamos mal, con desconfianza, eso escasamente se les vendía o se les compraba algo, ahora están viniendo más tranquilos y el pueblo también los

recibe de otra manera, es que la vecindad con ese infierno dejaba mucho problema...

Testimonio poblador del Caribe.

Esta circunstancia se visualiza como un catalizador del crecimiento de la incorporación de las poblaciones y comunidades en los procesos electorales y en la gestión de las políticas públicas locales, sobre todo de los sectores que por efectos de la guerra han estado históricamente marginados de los procesos democráticos.

“¿Sabe dónde se siente la paz? Cuando uno sale a hacer recorridos y los puede hacer sin inconvenientes, yo creo que los candidatos esperan lo mismo, poder moverse como nos movemos en esta Administración, vea es que allá ni puestos había de votación, tenían que salir con mucha dificultad y mucho riesgo, ahora si va a crecer la oportunidad de hacer buenas elecciones”.

Funcionario de Tolima.

En los agentes institucionales y sociales hay una sensibilidad que se ha despertado gracias a la tranquilidad que ha traído el Acuerdo. Se estima, según la mirada de algunos, que esto va a suponer una mayor movilidad y dinámica política de sectores que antes no eran tenidos en cuenta o sobre los que se posaba algún estigma por ser considerados como zonas rojas o de alto conflicto. Sin embargo, una vez entramos en periodo preelectoral, se evidencian las tensiones y disputas propias de la contienda política y vuelven a emerger sentimientos colectivos y tentativas de estigmatización que son asumidos por las comunidades como una dura prueba a superar.

“Pues es que ahora uno tiene que ver cómo van a ser las cosas porque antes venían a hacer política los de afuera, y aunque algo dejaban nos miraban por encima del hombro; ahora gente de acá, sea como sea, se está metiendo en política, toca sopesar como se arreglan esas cargas; toca es evitar más violencia, eso si no”.

Testimonio Tierralta Córdoba.

En el próximo período de la vida pública en el país del posacuerdo las comunidades van a verse envueltas en la tarea de resolver ese tipo de dilemas y preguntas, tendrán que resolver ojalá en las mejores condiciones de participación política y social, la manera en que se organiza la gobernabilidad local y se le da espacio a nuevos actores y nuevas formas de relacionarse con los poderes institucionales y políticos. La coexistencia y la convivencia política son aspectos que

generan gran inquietud y tensión y que poco a poco van demandando de espacios para que se tramiten estos resentimientos y prevenciones.

4.3.2 El meandro de la Reincorporación:

“Nosotros estamos viendo que se han juntado cosas que están relacionadas pero que son diferentes: una cosa es la dinámica institucional de la reconciliación, en la cual estamos viendo mucho incumplimiento del Estado, otro asunto es nuestra relación como reincorporados con las comunidades, como parte de la vida de la localidad y otra es nosotros como partido que está comenzando organizar su participación política; eso todo está mezclado y nuestra gente apenas está comenzando a manejar esos tres frentes de trabajo y no es fácil, muchas cosas son nuevas y difíciles”.

Excombatiente en Tierra Grata.

El momento político está signado por una gran carga de agendas sociales, comunitarias, institucionales, políticas y electorales que se mezclan generando confusión y dispersión de las acciones, no solamente para las FARC, sino para los actores sociales y los agentes institucionales. Ilustremos un poco la manera cómo la reincorporación ha incidido en la conformación del Partido:

“A nosotros nos han dicho que hay que llenar los papeles para la acreditación, pero ni siquiera eso le llega a todos, algunos están todavía en vueltas porque el nombre no coincide, porque hay homónimos, mejor dicho una cantidad de líos, estamos a quince días que el gobierno deje de proveer los alimentos y aquí todavía tenemos gente sin posibilidades para acceder a esa bicoca que van a dar. El problema es que aquí no se va a sostener más el ETCR y entonces qué van a hacer. Se quedan estudiando para la reincorporación o salen de jornaleros como ya hay muchos. Se dijo que se iba a comprar el terreno para que puedan quedarse aquí los muchachos pero no se ha podido llegar a nada con el gobierno.”

Excombatiente en Dabeiba.

“Nosotros sentimos que la paz está resultando ser más dura que la guerra, en el monte uno no se preocupaba, pero ahora ya en estico tenemos que comprar cada uno la comida y todo, y sinceramente yo no veo cómo van a hacer. Además nos dijeron que los proyectos productivos iban a ser la opción, pero nada, aquí no ha pasado nada”.

Excombatiente en Ponedores.

Desde los Espacios Territoriales de Reincorporación se señala que en términos prácticos no está clara la ruta de la reincorporación. Más allá de los aportes personales que se comienzan a entregar a cada reincorporado, aspectos como la entrega de tierra, los proyectos productivos, el funcionamiento del espacio territorial aún no cuentan con mecanismos y acciones específicas para su concreción, lo que genera incertidumbre y desánimo en los excombatientes respecto a su futura situación socioeconómica y jurídica.

“Un compañero entregó la boleta que le dieron, el paz y salvo ese, y ahí mismo le dijeron que eso no servía para nada, lo detuvieron como si nada. Él llamó lo sacaron al otro día, así le está pasando a un poco. El problema es que si uno se va a un trabajo pues lo pierde ahí mismo, porque ningún patrón se va a aguantar que uno esté faltando al trabajo. Entonces uno se queda aquí pero se siente como en una cárcel”.

Excombatiente de La Carmelita.

De otro lado se percibe que la libertad de los presos se está llevando a un limbo jurídico. Muchos no han logrado ser amnistiados, la movilidad de los reincorporados, sobre todo de los agentes que fueron objeto de medidas legales, se encuentra constantemente limitada; por un lado se ha devuelto la ciudadanía plena, pero por otro hay constreñimiento a las libertades de circulación por el territorio nacional.

“La mayoría de los excombatientes han abandonado el campamento de Vidrú y se han vuelto al seno de sus familias o comunidades de origen al sentir que no estaban dadas las condiciones para su restablecimiento social y el desarrollo de su proyecto de vida. Actualmente permanecen cerca de 60 personas, en una ZVTN que alcanzó a reunir 160 excombatientes”.

Informe bimestral Chocó.

“Nosotros estamos unos días y volvemos y nos vamos porque ahora que la familia está pues toca responder por ella, antes uno simplemente no respondía y listo. Como estamos cerca de Cali vamos y volvemos. Algunos seguro van a estudiar y otros van a lograr quedar de escoltas pero la mayoría estamos pasando trabajos”.

Excombatiente ETCR Miranda.

Las limitadas condiciones para la reincorporación de los excombatientes han hecho que en la práctica se esté priorizando la reincorporación

individual y dispersa sobre la colectiva que es la opción más abanderada por parte de las FARC, en la medida en que esperan mantener y potenciar su movilización política en los territorios.

“La reincorporación nos ha afectado como partido político. Muchos se fueron y piensa que les incumplimos, que nosotros les engañamos. Otros consideran que no debimos haber entregado las armas tan rápido. En fin, hay muchas opiniones. Lo cierto es que han existido muchas presiones que nos condujeron hasta este punto. Pero aquí toca seguir luchando, ¿qué más nos queda?”

Vea yo le digo, nosotros vamos a cumplir en eso de no volver a coger las armas, pero el Partido que con mi voto no cuente. Muchos aquí sí pero el mío personal no. Yo estoy es en el rebusque y ellos no me van a ayudar entonces no les ayudo a ellos”.

Excombatiente de Miranda.

El proceso de reincorporación genera descontento e incertidumbre de la posibilidad de agruparse haciendo que el partido político de las FARC tenga el riesgo de afectar su cohesión social y política. En ese contexto, la idea de una negociación en donde se entregan las armas en función de un espacio político para expresar las diferencias pierde expectativas de realización práctica, en la medida en que son muy fuertes las dificultades para mantener la copresencia.

Aunque las FARC tienen fuertes niveles de cohesión, la fractura que genera la ausencia de una ruta clara y la incapacidad institucional del Estado expresa que las circunstancias de la implementación de los Acuerdos en el año 2017 le han restado potencia a esa fortaleza.

“La capacidad del gobierno está muy apocada y los partidos políticos sólo piensan en su interés y no en el país. Para sacar el Acuerdo adelante se necesita de esfuerzos que exceden a un solo actor, esto justifica la necesidad de fortalecer confluencias sociales, más que convergencias políticas.

Miembro de dirección partido de FARC.

Sin embargo sigue habiendo niveles de tensión cotidianos por efectos de la presencia de las FARC como un nuevo actor político, actuando en nuevas condiciones en los territorios en los cuales desarrolló su influencia en tiempos de la confrontación armada.

“Los partidos tradicionales ven a la FARC como un contendor político. Precisamente, el principal miedo del gobierno municipal de La Montañita es la instalación de la Zona Veredal de Agua Bonita, porque sienten una cercanía de la FARC con la cabecera municipal y cerca al poder político. Con FARC en la zona se empieza a generar una dinámica política, pues empiezan a invitar a muchas personas a visitar a la Zona con el fin de realizar acercamientos políticos. En un fin de semana llegaban los mototaxistas de Paujil, al otro llegaban todos los presidentes de las JAC de La Montañita, al siguiente llegaban todas las comunidades, llegando a reunirse en eventos culturales, deportivos y conferencias”.

Informe bimestral Caquetá.

En ese contexto, la acción política de las FARC ha consistido en priorizar la relación con las poblaciones, especialmente a través de las organizaciones comunales, haciendo énfasis en las asociaciones productivas y posponiendo el diálogo con los poderes locales a nivel de partidos y liderazgos políticos para un momento posterior.

“Uno de los problemas más grandes que tendrá que enfrentar las FARC es la brecha ideológica que hay entre las zonas rurales y los cascos urbanos, considerando que la forma de hacer política tiene a la gente muy aburrída que incluso algunos sectores están promoviendo no la abstención, sino el voto en blanco. Las FARC como partido político tendrían fuerza en las zonas rurales porque en las cabeceras municipales no, en Ataco por ejemplo, ni sueñan, ni truenan”.

Líder político de Ataco.

La violencia en el municipio no solo ha sido física sino también simbólica, por ejemplo acá a la gente le decían (las FARC) por quién votar y eso es atentar contra la libertad, eso los pone hoy en desventaja, porque ellos apoyaron partidos de Izquierda como la UP y hace poco el POLO y entonces ahora la gente si le dan la oportunidad en lo electoral los van a castigar.

Agente institucional del Tolima.

Sumado a lo anterior, en un plano más regional y local, la principal apuesta de las FARC ha sido trabajar en torno a la articulación con organizaciones y movimientos sociales; no obstante, persisten inquietudes públicas sobre las políticas que impulsarán de cara al poder regional, los métodos de trabajo que desarrollarán y los vínculos que priorizarán, asuntos que no se han abordado en la medida en que la política ha

sido especialmente interna, y de contingencia por subsanar la dimensión de reincorporación de la implementación.

“Cuando se ha preguntado coloquialmente por las condiciones políticas ‘el Profe’ ha expresado abiertamente que a estas alturas está claro que el problema de superar el conflicto armado no es desarmar guerrillas, es cumplir a cabalidad con el Acuerdo, pues esto tiene profundas implicaciones políticas. Sin ese mínimo de garantías, otros aspectos como la participación en política quedan en veremos ante la cadena de maquinarias electorales antidemocráticas que usan el Estado en su beneficio, que incluso buscan cooptar los espacios y programas del Acuerdo para politiquear”.
Excombatiente de FARC.

La principal respuesta práctica y discursiva que se observa en los territorios por parte de la nueva fuerza política es el acento en la implementación de los Acuerdos, asunto que opera de manera simple como su línea programática y su énfasis organizativo; el asunto es que al ligarse de manera tan específica a la dinámica de implementación, su destino queda inscrito a este devenir de la gestión institucional.

“Con respecto al nuevo partido Político de la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) al principio tenían mucha presencia pero en la medida es que eso de los famosos PNIS no ha progresado, han quedado como mal. Ellos no tienen mucha fuerza, tienen la misma gente afín a las FARC. Pero cómo van a crecer si les están quedando mal. Aunque yo sinceramente creo que se dejaron presionar y no la pensaron bien. Por acá quién va a votar por Timochenko o por Catatumbo. Les tocaba juntarse, hacer alianza. Aunque sin claridades de la reincorporación pues ellos se lanzan a ver que ganan. No se ponen a pensar que ahora no es como antes, para ellos con las armas uno manda y listo, pero ahora les toca es convencer, mejor dicho, cambiar de armas”.
Líder Comunitario de Timba.

Las FARC son ya un partido político legal, su negociación los ha llevado hasta unos espacios relativamente lejanos de los centros poblados y su relación con las ciudades se está configurando lentamente. Sus redes locales se han reconfigurado en un proceso lento que se ha visto afectado por las incertidumbres de la reincorporación y la implementación. Su aparición pública en los territorios está más centrada a las organizacio-

nes sociales, sin que aún logre estar clara la política que van a dinamizar; según los términos de los propios voceros de la FARC, para que avancen en ese sentido, requieren tiempos medios y largos.

4.3.3 La polarización en la coyuntura electoral.

“La implementación de los Acuerdos se ha hecho con mucha voluntad del alcalde acá en Icononzo, porque todos saben que el Gobernador Oscar Barreto Quiroga no apoyó y no apoya el acuerdo de paz. Él dirá que sí por quedar bien, pero la verdad es que ha tenido una actitud guerrerista, esperemos a ver quién gana la presidencia y uno así sabe que tan tranquilo puede estar, ese es una de las mayores tensiones para que la gente plantee su posición política, porque en este municipio el paramilitarismo también gobernó y a la gente le quedan resabios”.
Funcionario Alcaldía Icononzo.

“Esa vaina sí que dividió opiniones, aquí y allá pero aja, ganó el mejor... votar por el Sí era desconocer el valor de los héroes de este país que habían derrotado a la guerrilla, Santos es un sinvergüenza, aun así le entrego el país a las FARC por encima de la voluntad de la gente decente, ¿cómo va ser eso?...dígame usted, qué mensaje le hubiéramos mandado a los niños si gana el Sí. Que está bien hacer el mal porque todo va seguir como si nada, Nooo Dios es bueno y misericordioso, es verdad, pero Dios también castiga y esos hombres ya no son de Dios. Por eso el Pastor nos está diciendo que votemos por el que diga Uribe, yo le voy a hacer caso.”
Testimonio Cesar.

Tal como lo expresan cada uno de los entrevistados, las contiendas están centradas en favor o en contra de una solución política negociada, situación que se repite desde la elección del gobierno de Andrés Pastrana. En la actual coyuntura, la construcción de paz se tramita desde prácticas y discursos que tienden a la polarización entre quienes apoyan la implementación del Acuerdo manteniendo el espíritu de lo suscrito y quienes abogan por transformaciones radicales en los mismos. Esta tensión se junta con la cuestión pública de la corrupción y la falta de transparencia que sale repetidamente en los testimonios acopiados en las regiones.

“Uno de los más grandes problemas de Putumayo es la corrupción de los funcionarios y los intermediarios y el negocio que tienen entre

ellos, de allí que los recursos antes de llegar a la gente primero pasan por un poco de manos, la corrupción ha hecho más daño en Colombia que todas las guerras, sólo que apenas lo estamos viendo. A mí me alegra ver que se habla de eso en muchas partes".

Concejal de Putumayo.

La corrupción es un asunto que se expresa todavía con timidez, las agencias especializadas y los medios de comunicación han puesto énfasis en evidenciar las sagas criminales en los últimos meses, sin embargo el asunto está muy naturalizado en los contextos locales y escasamente se escuchan voces que tratan de expresarse al respecto, casi siempre señalando a los competidores de ser los abandonados de este flagelo público.

"Yo soy liberal pero a uno le toca votar es por quien no deje caer más este país en manos de los corruptos, que para mí, son la mayoría, y uno si ha visto que eso se está moviendo por todas partes, todos los candidatos hablan de corrupción y hasta por eso será que no hablan desde sus partidos, porque quedarían salpicados, imagínese, cuantos de Cambio Radical no están sancionados y destituidos, aquí no más el alcalde Benjamín, la Fiscalía lo investigó por un poco de delitos de corrupción y quedo libre por vencimiento de términos, o sea uno se queda con la duda".

Líder comunitario Arauca.

El asunto comienza a reconocerse en rostros y a evidenciar cuerpos sociales y mecanismos concretos a través de los cuales se posiciona "la trampa" en política y se tramitan asuntos de interés económico particular de familias y redes de compadrazgo, en detrimento de la transparencia en la gestión pública, de la realización de los derechos y de la probidad en los servicios para las poblaciones.

"Acá en Córdoba tú ves que una Burgos es Senadora y el otro dirigente ganadero, que los López están en la política y también en la economía. Esto es un mundo aparte. Eso aquí no lo cambia nadie. Entre la U y la paraparlítica han mermado el poder de los López que son "La leyenda" en esta tierra, pero en el fondo la cosa es la misma: las familias ricas se casan entre ellos y los recursos públicos se sacan a chorro. Eso acá no es nuevo, acá tuvimos políticos presos por el 8.000, por paraparlítica hay un poco, también por corrupción hay investigados, condenados, e inhabilitados. Eso se había quedado quieto pero este año con el ventila-

dor que prendió exgobernador Alejandro Lyons y salpicó al fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, a Musa Besaile; mejor dicho esto es la sapeadera de la sapeadera. Dicen que hay 56 políticos metidos en la colada".

Agente institucional de Tierralta.

La tensión genera el crecimiento de la desconfianza en las instituciones, pues los anuncios y las capturas de agentes públicos han vulnerado incluso la dignidad de las entidades encargadas de investigar y sancionar la corrupción, las instancias encargadas de garantizar la pulcritud en el manejo de los asuntos públicos; cuando así se presentan los temas de la corrupción, lo que queda es una gran desorientación y malestar en la población.

"En el Chocó existe la percepción de que los partidos políticos pueden mantenerse en el poder por el manejo corrupto que hacen de los recursos públicos mediante prácticas clientelistas. La corrupción muy extendida en las alcaldías e institutos públicos alcanza para permear a las instituciones de control: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, lo que les garantiza la impunidad a los saqueadores del erario público".

Informe bimestral Chocó.

Los testimonios presentados dejan ver cómo en la coyuntura electoral hay un desplazamiento de los temas de la guerra a la corrupción, este último como un gran problema nacional que se había invisibilizado. Ambos debates públicos se desarrollan en medio de una polarización que lejos de abonar camino a la democratización y la reconciliación agranda las distancias entre sectores sociales y propicia la aparición de grupismos y cohesiones acrílicas a partir de sistemas de compensación de alto alcance en la coonestación con el delito político y público.

"Acá en Riosucio todavía no se ha movido nada, acá estamos esperando, es que en las elecciones es mejor estar con el ganador. Se dice que va a ser Vargas Lleras, entonces estamos esperando que venga un representante de él para que nos diga cómo va a ser todo, con compromisos claros. Para eso es muy pronto todavía, acá no tenemos afán".

Líder social de Bajirá.

El asunto crítico es que más que debate, hay disputas ligadas a posiciones de interés particular y a negociaciones entre caudillos y entre comunidades y caudillos, en una escena repetida de la saga clientelar en Colombia; no se percibe el

crecimiento de las reflexiones de la política en clave de rectificación y democratización.

“Por ejemplo mucha gente del PIN se pasó para Cambio Radical, como el exgobernador Hugo Aguilar y sus dos hijos Richard y el otro que no me acuerdo, Mauricio, creo, y nos dimos cuenta porque le estaban recogiendo firmas a Vargas Lleras, y es que el exgobernador tiene fama de mover muy bien votos, esto no es ningún rumor el mismo don Hugo dijo públicamente que ahora sería de cambio Radical”.

Concejal Norte de Santander.

Cuando se habla de la expectativa de las elecciones respecto al asunto de la paz y de los Acuerdos se presentan relaciones algo lejanas; los diálogos político electorales se nos vuelven al mundo de los caudillismos y de vinculación a las cadenas del funcionariado local y regional, situando toda expectativa de paz en el horizonte de los cálculos burocráticos.

“Ahhh el partido Conservador no ha elegido candidato presidencial, eso nos trae problemas en las bases, no vaya a creer, hacer política en este país es difícil, toca hacer malabares. Acá en el Caquetá habíamos logrado estar juntos, para la pasada tuvimos representante, el doctor Luis Fernando (Urrego). Pero ahora disque Gasca (Arnulfo) no lo va a acompañar, ahora se va con los verdes, por lo menos eso dicen. Es que el líder de un partido unifica, ayuda a generar cohesión y produce resultados concretos”.

Concejal de Florencia.

En medio de esa dinámica de preparación y de mudanzas partidarias, la paz y las reivindicaciones sociales poblacionales terminan conectadas con las lógicas clientelares y de aprovechamiento de los liderazgos que han pasado por el Estado recientemente, asunto que no es ilegal, pero que sí evidencia la continuidad de una trama de cultura política ligada al establecimiento de clientelas que usufructúan las posiciones institucionales.

“Aquí votamos por el sí, sobre todo nosotras las mujeres, y es que somos nosotras las que no le queremos parir más hijos a la guerra, nos unimos a la campaña un millón de mujeres por el Sí que se impulsó desde el Ministerio de Trabajo con la Doctora Clara López, es que mira a quien se le puede ocurrir que es mejor que se sigan matando o llevándose a los muchachos a la fuerza, por eso apoyamos la campaña del Sí,

y también hemos apoyado la implementación porque sabemos que la paz no se hace en un momentico. Ahora estamos recogiendo firmas para la candidatura a la presidencia, porque las mujeres nos tenemos que ayudar entre todas”.

Lideresa Organización de Mujeres en Antioquía.

Así el ejercicio político electoral coloniza no solo las poblaciones sino la territorialidad, afectando la movilidad y la espacialidad social para el ejercicio político, limitando las posibilidades de que las diversas opciones se expresen de manera pluralista y poniendo en riesgo la posibilidad de que la lógica agresiva y excluyente comience a desplazarse hacia relacionamientos políticos de mayor tolerancia.

“Esta alcaldía hizo una coalición entre Partido Liberal y Conservador contra el Polo Democrático, acá en la zona no hay Centro democrático, ni en Florencia, hay uribistas pero no del Centro democrático, acá la gente difícilmente reconoce a alguien que sea del centro democrático, eso tiene que ser que le haga campaña a Uribe”.

Líder de organización social Florencia.

En este periodo también se observa cómo el discurso de la anticorrupción es instrumentalizado y usado como bandera por quienes en la contienda electoral buscan “blindarse” de investigaciones por efectos de la responsabilidad en cargos públicos que devienen en procesos jurídicos e inhabilidades.

“Mi niño yo te cuento, en la costa este revuelo por Obredecht, ha inhabilitado a un poco y tiene a otro tanto asustados, con miedo. Dicen que cuando hace algunos meses vino un candidato de los duros, a mediados de junio, en una correría, un poco se reunieron con él, confían en que si le ayudan él le habló al oído al fiscal, pero eso son habladurías que algo de verdad tendrán. Lo cierto es que por eso acá todavía no se definen candidatos, unos hacen cuentas, miran si entre la familia o amigos pueden encargar la curul, ¿se buscan candidatos a peso!”.

Junta de Acción Comunal de Córdoba.

La polarización de la campaña electoral, la captura de líderes políticos debido a la corrupción, la preocupación porque las FARC puedan ganar espacios políticos, han llevado a un movimiento de las redes tradicionales del poder político, que descansa en cálculos propios de lo electoral,

pero que se teje alinderado entre quienes apoyan la implementación del Acuerdo con el sentido que se firmó, y quienes mantienen el proceso de reincorporación, pero buscarían transformar en lo fundamental lo acordado. Más allá de esos cálculos que implican una mirada de mediano plazo, en el corto plazo el mayor eje movilizador de la trama de organizaciones y liderazgos políticos son los posibles relevos dentro de las propias tradiciones políticas y las posibilidades de entrar en coaliciones con futuro ganador.

“¡Tener la familia metida en política es la manera de mandar por siempre!, por ejemplo aquí, los Cristo que han estado en el poder local y nacional desde el papá Jorge Cristo quien fue senador, hasta el menor de los hermanos: Andrés Cristo y el más sonado de la familia: Juan Fernando Cristo que estuvo en la consulta liberal para las presidenciales, pero también están los Flórez Dávila: Miguel Ángel Flórez Rivera que fue representante a la cámara y Roció Dávila exsecretaria de Desarrollo Económico, los esposos que heredaron el poder político a su hijo Miguel, Concejal por el partido de la U y otras tantas familias en Norte de Santander, según ellos el altruismo y el servicio a la comunidad son sus motivaciones, pero dígame donde si no les generara poder se quedarían, ahora a eso le llaman altruismo?”.

Testimonio Presidente Junta Norte de Santander.

“Aquí en el Cesar, si un candidato cuenta con los Gnecco, las posibilidades de tener votos y de ganar aumentan, eso lo sabe todo el mundo, mejor dicho, todos los partidos, hasta hace poquito militaban en la U, yo no estoy segura si ahora también, lo cierto es que militen con el partido que sea, ellos ponen candidato, pero eso sí, siempre mantienen a su familia primero en lo local y en lo nacional, por ejemplo esta José Alfredo Gnecco del partido de la U en el Senado y que espera permanecer allí, y el que fue Gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, pero también ponen gente que no es familia, como el Señor Gobernador Franco Ovalle que es amigo cercano de Vargas Lleras; acá se dice que eso fue una forma de congraciarse con él porque le habían hecho desplantes cuando Monsalvo fue Gobernador porque ellos tenían en lista a otro para Gobernador, pero se le voltearon, igual, le han puesto votos para curules de Cambio Radical y del partido Conservador”.

Testimonio lideresa social Cesar.

En los testimonios y relatos anteriores se puede reconocer cómo se mueven las redes del poder político local en medio de la polarización del alcance y la implementación de los Acuerdos. La redefinición de dichas redes y de los liderazgos políticos a nivel micro local se mantiene por vía de la consanguinidad y por la administración que las casas políticas hacen de sus influencias para la consecución de avales para los candidatos y votos para los partidos. Como dicen en las comunidades, se renuevan nombres en la política pero muy pocos apellidos.

4.3.4 El Fast Track de espaldas a la paz.

“Mire seño, la situación es la siguiente, en el conflicto colombiano se cometieron crímenes que involucran a otros actores no armados, y muchos delitos se declararon como crímenes de lesa humanidad para que no prescribieran porque a pesar de los años el Estado colombiano no ha esclarecido los hechos y así han ido quedando en la impunidad, pero también en la memoria... Yo no sé si uno esperaba mucho de la justicia, pero que exoneren a terceros de tener que comparecer de manera obligatoria... ummfff pues es una desinflada muy brava y una ofensa para las víctimas. Pero uno sabe que muchos de los políticos de acá presionan para eso”.

Integrante organización de víctimas Córdoba.

De los desarrollos normativos por la vía rápida se habla a media voz y con angustia, con un poco de desesperanza, en la medida en que se espera que lo literal de los Acuerdos se vuelva camino, respuesta, acción, participación; sin embargo los signos que llegan al territorio son por lo menos contradictorios.

“El primo de Don Nebio también fue Gobernador, esa gente es muy verraca, es que ellos llegaron acá siendo pobres a trabajar en una ladrillera...y eso en un momentico pusieron supermercados, ferreterías y otros negocios como buenos paisas, porque ellos no son de acá, pero si han ayudado mucho, de eso nadie puede decir lo contrario, como todo el mundo habrá cometido errores, pero dígame si las FARC están allí como si nada, nadie los va a meter a la cárcel, por qué tendrían que meterse con la gente que le ha aportado tanto a esta región que ha sido tan golpeada, de don Nebio si se dicen muchas cosas pero no pueden comprobar nada, además eso de meter a gente buena a la fuerza en un proceso de esos, a mí en lo personal no me parece”.

Testimonio habitante Guaviare.

El asunto es que las definiciones del Congreso también están muy conectadas con lo que va pasando en los territorios y con las previsiones de poderes políticos y económicos a nivel regional. Los debates en el Congreso sobre la aprobación de la JEP cambiaron de forma importante los contenidos que inicialmente se habían pactado, en una cadena de acuerdos sobre el Acuerdo. Muchas de estas transformaciones corresponden a las presiones de intereses locales, de sectores políticos y empresariales que no consideran que la negociación sea tan vinculante como para desplegar un dispositivo de memoria y, los congresistas en la medida en que mantienen una relación con los poderes locales hacen valer esas presiones. El problema de fondo no es que los congresistas sean la expresión de esos poderes, pues eso son en teoría democrática los cuerpos legislativos, el problema son los vínculos con poderes que están por fuera de marcos legales y que en un proceso de verdad tendrían que reconocer su participación.

“Estas elecciones van a ser muy atropelladas, todo el mundo estaba esperando algo de la bendita Reforma Política para organizar la lista, inscribir el candidato, ver si se podía cambiar de partido, mejor dicho. Pero el gobierno los dejó con los crespos hechos porque retiró el proyecto, ¡cómo sería el chanchullo que mejor le quitó el aval! Este Congreso sí... ¡Dios mío!”

Líder Comunitario del Quinamayó.

En el plano más electoral de los territorios se reporta como negativo el hundimiento de la Reforma Política pues era vista como la posibilidad de generar licencias políticas para entrar en nuevas negociaciones de poder a partir de la mudanza de partidos y la relocalización de votos, argumento bien lejano de los criterios que generaron la reforma en el marco de los Acuerdos. Se observan las dinámicas de movilización en función de los nombres para definir las listas de candidatos donde priman los entronques familiares, los delfinazgos, y los pactos entre casas políticas, incluso más allá de los partidos y movimientos políticos; sin embargo, no hay una dinámica que sitúe la relación entre los acuerdos de paz y la posibilidad de reforma política para el contexto actual.

“Yo por eso digo que primero cae un mentiroso que un cojo. El año pasado para aprobar lo que era realmente difícil un Acuerdo que en las urnas no había ganado ahí si estaban más de setenta senadores a favor y más de cien representantes, ahí les parecía bueno el Acuerdo a

un poco de Cambio Radical, del partido de la U, los liberales y el Partido Conservador. Pero ahora que tocaba ver quién estaba comprometido con la paz esto se puso bueno porque Cambio Radical encontró problemas que antes no veía y se le quitó al gobierno y lo mismo los Conservadores. No cuentan sino los intereses de ellos, si hay menos muertos, menos víctimas eso a ellos como que ni les va ni les viene. Entonces el año pasado no se movían en favor del proceso de paz, era por otra cosa. Así cómo se construye la paz, ¿decime vos?”.

Líder comunal de Santander de Quilichao.

Tal como lo expresan los líderes sociales, la aprobación de la reforma política evidencia el escaso compromiso del Congreso con el proceso de paz, en el sentido de reconocer que las transformaciones democráticas fueron un eje nodal pactado para el posconflicto. De otro lado, el hundimiento de la reforma es un indicio de la falta de capacidad política para conducir el proceso del posconflicto y el frágil consenso político existente para avanzar de manera permanente en una propuesta de paz, especialmente cuando se trata de abrir canales de participación y democracia concretos en las localidades y regiones.

La dificultad para hacer del fast track una medida efectiva para avanzar en la consolidación de la paz muestra los escasos márgenes público-políticos para movilizar una estrategia de reconciliación nacional.

4.4 La Movilidad Social en el Tejido Público y Político.

“Nosotros trabajamos día y noche sin descanso, en verdad quisiéramos que hubiera un cambio, creemos que es una gran oportunidad para el país, no solamente para las FARC para la gente que desea más democracia, renovar la política”.

Funcionario de la OACP Nacional.

La expresión del funcionario de la OACP concentra de alguna forma la inquietud de muchos colombianos habitantes de las zonas de conflicto centrada en la búsqueda de transformación social y de la apertura a sectores democráticos y sociales que no han tenido una participación en política. Veamos algunas referencias de la población, respecto a esa expectativa.

4.4.1. Las Circunscripciones una opción recortada.

Una de las cuestiones de la implementación de los Acuerdos que más expectativa genera en los territorios son las Circunscripciones Especiales de Paz. En la voz de uno de los campesinos en el Sur de Córdoba aparece esta reflexión:

“Con las circunscripciones va a salir el que más hable para elegir ese representante, entonces la renovación política, ¿cuál será? Aquí ya se ve movimientos de personas. Los que quieren ser elegidos van a ir donde las FARC o a los partidos políticos.

No todos están de acuerdo con esa apreciación, algunos también tienen la idea de que nunca ha existido una posibilidad real de participación que no esté tutelada por las formas tradicionales y que si se abre ese espacio existirían muchas posibilidades de recomponer el tejido social y político, por eso una de ellas respondió:

“Soy nativo de la zona, aquí nací, aquí me hice viejo. El proceso electoral podría permitirnos a los campesinos llegar al poder electoral, eso sería un regalo divino. Nosotros no sabemos que puede ser la historia de este país si lo logramos. Si uno no se involucra la silla queda coja, esa es una verdadera tarea de reconciliación. Hacer que los 26 corregimientos participen. Somos 45 mil víctimas en Tierralta, podemos tener un representante propio de acá, por eso hay que luchar. Lo que pasa es que allá en Bogotá no están es bananeando con eso”.

Relato grupo focal de Tierralta Córdoba.

Aunque con muchas dudas y dificultades las comunidades reconocen en la Circunscripción Especiales de Paz una opción para participar y lograr transformaciones territoriales a partir de una vocería política que permita elevar las demandas regionales y realizar gestiones haciendo que la democracia llegue a estos territorios.

“Acá para las circunscripciones tenemos la gente de las agremiaciones de ganaderos que están interesados en participar y ellos van a contar con nuestro voto porque a ellos también les interesa sacar adelante los PDET y para eso hay definidos unos recursos que solo se pelean en el Congreso y en ellos confiamos porque además de haber estudiado son campesinos como nosotros; el problema es que nos tiene parados si decisiones concretas desde Bogotá”

Líder comunitario San Vicente del Caguán.

De igual forma los Acuerdos movilizan diferentes programas y proyectos que despiertan el interés de las poblaciones frente a posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades para el progreso territorial, entonces los ejes discursivos giran en torno al desarrollo local y regional, el relanzamiento de las oportunidades productivas ligadas a la concreción de la paz y el desarrollo de una gestión moderna distanciada de la corrupción y relacionada con la democracia territorial.

“La posibilidad que ven las organizaciones de base en las próximas elecciones con candidatos propios en la Circunscripción Especial de Paz, ha despertado notable interés en sus líderes, que aspiran a alcanzar figuración nacional y cierto poder regional. A todos sin embargo les preocupa que ante la proliferación de liderazgos, la delantera la logren aquellos que se alíen con los partidos políticos tradicionales, manejadores del poder desde las alcaldías municipales y quienes cuentan con el respaldo de la tradición social y de los recursos que les permite la administración pública”.

Reporte de Observación Chocó.

“Suenan algunos intereses de Circunscripciones Especiales entre actuales concejales y también en miembros de juntas de acción comunal, pero eso se queda allí por ahora, porque de eso se sabe muy poco”.

Agente institucional de Ataco.

La posibilidad de apertura democrática se enfrenta a grandes riesgos especialmente en los territorios de conflicto, en la medida en que las Circunscripciones Especiales de Paz logren potenciarse para el 2018. Las redes políticas tradicionales pueden terminar por cooptarlas, ya que las clientelas y las microempresas electorales acceden a los escenarios de Juntas de Acción Comunal y a otras formas de organización comunitaria con altas demandas sociales y derechos insatisfechos; estos escenarios son los principales focos de intervención política en función de transacciones materiales que alejan de la perspectiva de derechos y ciudadanía a las familias, asentamientos y comunidades más vulnerables y necesitadas, en muchos casos subsidiadas o aspirantes a subsidios.

“En cuanto a las Circunscripciones Especiales hay inquietud, de los presidentes de asociaciones y de líderes y lideresas pero eso no está claro, con eso lo único que hay es ilusión de poder aportar en algo, pero se siente que va a haber



Tibú 2017

desilusión, seguimos esperando que aprueben la ley y que se establezca el marco normativo y en eso también resuelvan el dinero de la financiación, hay algunas personas que ya están moviéndose con eso, pero agazapados porque ni saben si van a terminar inhabilitados yo por ejemplo también estoy interesada, yo soy víctima, ¿acá quien no? Con todos los problemas que existen de muchos que se quieren colar es una oportunidad que las elecciones no sean simplemente un carro para votar por alguien que no se conoce, eso devolvería esperanzas”.

Líder comunitario Caquetá.

La obstaculización a las dinámicas de mejoramiento de los procesos políticos y de participación ciudadana en el Congreso muestra cómo la implementación del Acuerdo es un escenario diario de nuevas negociaciones, y sobre todo cómo pone en evidencia la coyuntura los bloqueos, los intereses y la dinámica legislativa que va de espaldas, no sólo del Acuerdo, sino de la posibilidad de paz y reconciliación del país.

La ampliación de la democracia que es el corazón del posconflicto, no sólo se juega en la reincorporación de aquellos que tuvieron las armas, sino en la recuperación y ampliación de las garantías para la participación social y política, para las comunidades y territorios afectados por el conflicto. Así las cosas la actuación del Congreso deja ver la falta de voluntad de sectores políticos que tradicionalmente han tenido una

estrecha relación con los sectores gremiales y económicos.

“Con esta coyuntura político electoral se da la posibilidad de que las comunidades étnicas participen de manera directa en las próximas elecciones, oportunidad que el pueblo negro y afrocolombiano del Norte del Cauca, organizados en los Consejos Comunitarios y articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC ha decidido aprovechar. Nuestra decisión tiene que ver con que la implementación de los Acuerdos ha traído sus problemas, nos preocupa la titulación de territorios colectivos que no se ha culminado no genere problemas, también que la minería ilegal y la megaminería nos impida mantener el plan de vida que hemos soñado ancestralmente en nuestro territorio. Por eso tomamos la decisión, pero vemos con preocupación cómo se desvanece la posibilidad que seamos nosotros mismos quienes expresemos en las altas esferas qué y cómo deben hacerse las cosas, no sólo acá en el PDET que uno ni sabe a la final cómo es que sistematizan la información”.

Informe bimestral del Norte del Cauca.

Las comunidades étnicas y campesinas han encontrado en la expectativa de la Circunscripción Especial de Paz, no sólo la posibilidad de tener una representación en el Congreso para tramitar problemas históricos, sino también una forma de evitar distorsiones institucionales en sus

planes de vida que se generan en la implementación y puedan terminar afectando las posibilidades de desarrollo propio. El asunto es que el debate y el bloqueo que ha tenido la definición de este mecanismo en el proceso legislativo generan gran decepción en los territorios.

4.4.2. Los nuevos actores políticos.

Una tendencia ligada al debate sobre la refrendación de los acuerdos que sigue operando fuertemente en las comunidades es la relación de creencias arraigadas en la espiritualidad popular con la toma de posiciones respecto al proceso de implementación de los Acuerdos y a las dinámicas políticas que están en curso.

“La política de hoy es muy difícil de entender, uno ve pastores y pastoras en el Senado, tristemente en nombre de Dios siembran mucho odio en la gente, créame que con ellos es muy difícil la reconciliación verdadera, yo soy cristiana, pero yo soy cristiana del amor y del Perdón, no de la venganza y el odio”.

“Hace pocos días se hizo una ceremonia de liberación en la iglesia yo esperaba que se hablara de la familia y los problemas que tiene uno ahora, al final eso no era un culto sino una reunión política, hablaron de las candidaturas y hablaron de impedir que se cumplan un poco de cosas que dizque se pactaron en esos Acuerdos con las FARC. Le digo una cosa yo no volví a la Iglesia Católica porque me gustaba más la oración en la Iglesia Evangélica, pero le aseguro que mejor me quedo en mi casa, yo a los políticos nada, pero allá tenían a todo el mundo comprometido con votos, yo entiendo poco de política, pero de Dios sé que es bondadoso, yo soy víctima como mucha gente de aquí de Florencia pero no necesito que nadie me llene el corazón de odio”.

Testimonio habitante de Florencia.

El asunto crítico, más allá de las posibilidades que tiene todo ciudadano y todo grupo humano de participar en los asuntos colectivos, es que se observa una abierta manipulación de las creencias particulares de las personas, que operan en la esfera privada e íntima, para proyectar sentimientos direccionados hacia posiciones públicas y político-partidarias.

“Aquí es obvio que a la gente la controlan por la ideología religiosa, los políticos hablan en las plazas públicas de Dios y le entregan las ciudades al señor Jesucristo, como si todos los ciuda-

danos fuéramos cristianos, y no es así aquí hay otras religiones y otras creencias, eso deberían respetarlo los políticos pero no lo hacen”.

Testimonio líder Juvenil Arauca.

Al interior de algunos grupos religiosos también se ha generado polarización sobre la implementación de los Acuerdos. Lo más evidente es que la coyuntura ha conducido a que se amplíen la politización de las iglesias, de las comunidades religiosas y de los entornos más familiares y domésticos.

“No podemos negar que hay una crisis ética y moral en Colombia, votar es un deber con la sociedad, con el mundo y con Dios, pero no debe ser a los partidos políticos corruptos, los cristianos tenemos el deber de estar unidos pero también ser justos y los partidos políticos son los principales representantes de la crisis de la que le hablo, nosotros en la iglesia sabemos que lo principal es la familia y que el pastor Ronald podría hacer un gran trabajo en el congreso y Colombia Justa Libres podría ser una gran opción para toda Colombia”.

Testimonio habitante del Huila.

El asunto es complejo puesto que relaciona la moralidad personal con posiciones éticas de carácter comunitario que se anidan de inmediato con la mirada a situaciones sociales que terminan siendo valoradas como asuntos de decisión política. Esta serie de torsiones de los símbolos terminan desdoblándose en afirmaciones, posiciones cerradas y acciones.

“Creo en lo personal que el mundo se ha alejado de Dios y que si es verdad que necesitamos perdón y reconciliación, pero los Acuerdos de la Habana no representan a los colombianos de bien, a quienes trabajamos por este país, nosotros ganamos y el gobierno hizo lo que quiso, pero hoy podemos ser fuerza y cambiar el país, yo apoyo el Centro Democrático porque creo que el presidente Uribe hizo muchas cosas buenas por este país y Santos le quiso entregar el país a las FARC”.

Testimonio habitante de Putumayo.

Se puede observar cómo sobre la base de raciocinios genéricos se construyen agendas y empoderamientos políticos de fuerzas políticas provisionales o emergentes que forman miradas distantes de una observación rigurosa de la realidad y que se asientan en posiciones irreflexivas.

“Para nadie es un secreto que los movimientos cristianos, protestantes y católicos son en Colombia una fuerza política, desde finales de la década de los 90 con el Partido Nacional Cristiano se abrió la puerta para la participación de otras iglesias en política, un lugar que tenía hegemonía católica, en la práctica, en eso consiste el estado laico realmente, y estos movimientos cristianos fueron la principal fuerza política que rechazó los acuerdos de la Habana, para ellos el plebiscito se perdió como voluntad de Dios, así que la implementación fue desobediencia, es decir pecado”.

Líder social Florencia Caquetá.

La influencia que tuvieron las iglesias cristianas y evangélicas durante la campaña contra el plebiscito ha hecho que muchos sectores de la política miren este escenario como un espacio decisivo para la dinámica electoral. Adicionalmente se evidencia como uno de los discursos que toma fuerza en el contexto de la implementación la “crisis ética y moral del país” que ha servido como slogan de campaña tanto a partidos tradicionales como de colectividades emergentes de carácter cristiano y de otros sectores involucrados en el conflicto que se busca superar con los Acuerdos a la espera de disputarse el poder para hacer oposición a los mismos.

“No solo la guerrilla quiso cambiar las armas por la política, ahora está el movimiento político de los militares retirados, acá en Ibagué estuvo el General Mendieta, recogiendo firmas para las presidenciales, el partido o movimiento político que está recién creado Patria Nueva se llama, Pero esa candidatura presidencial solo ésta para hacer visible el partido porque ellos vienen es con la intención de sacarse votos para el senado y la Cámara, según lo que escuche Mendieta representa a las víctimas de la FARC”.

Testimonio habitante de Ibagué.

En ese horizonte, la necesidad de superar, reelaborar, resignificar la tradición contrainsurgente de las fuerzas armadas y los agentes del orden es clave, en la medida en que la mentalidad de guerra que se ha estructurado en los cuerpos oficiales también tiene unas inercias culturales y unas expresiones sociales que sin duda se dejan ver en ciertas regiones del país.

“Los Acuerdos de paz tiene muchos opositores, yo pienso que los principales después del Centro Democrático son los militares retirados y aja, ellos ahora buscan tener un lugar en el congreso, yo no sé cuál sería el candidato de

aquí pero han estado recogiendo firmas para la candidatura de Mendieta y se habla de tener candidato de acá para cámara y senado, esto es muy importante para saber cómo iría la vaina en la implementación durante el próximo gobierno si tenemos en cuenta que por ejemplo los que más reparo le pusieron a la JEP fueron ellos”.

Testimonio líder Cesar.

Específicamente otro de los grupos que se ha opuesto a la implementación de los acuerdos han sido los militares retirados, grandes opositores de la JEP, que buscan evitar ese mecanismo de carácter transicional o de potenciar ventajas en su favor para asumir ese proceso y que esperan tener un lugar y una voz en el poder político nacional.

4.5 Síntesis Parcial.

Sin duda, la radiografía de las tensiones y los comportamientos políticos es crítica en la medida en que se superponen en las dinámicas territoriales (a) las dinámicas de reincorporación de los combatientes y su presentación como nueva fuerza política de arraigo en los sectores rurales, (b) se siguen discutiendo y acordando asuntos delicados sobre la implementación de los acuerdos a nivel legislativo y gubernativo, y (c) se sobreviene un debate electoral para cambio de gobierno que promete seguir poniendo en discusión los alcances y efectos de los acuerdos que están en proceso de implementación.

En el año de implementación emergen inercias políticas y búsquedas latentes que exigen procesos de maduración colectiva e institucional en el mediano plazo. Muchos de los asuntos que aquí se plantean como cuellos de botella solo encuentran salidas en la medida en que se generen reformas políticas al Estado y al funcionamiento de políticas económicas, sociales y culturales; otros asuntos remiten a la repotenciación de los partidos políticos, los movimientos sociales, la organizaciones sociales y cívicas, y de sus lazos con las políticas públicas y con el manejo de los asuntos colectivos. Con todo, a mediano y largo plazo, el gran reto está situado en transformar los elementos de nuestra cultura política compartida que opere en el campo de la significación y empoderamiento de las ciudadanías, para el ejercicio de la democracia y para trabajar en el reconocimiento y conquista de derechos, por lo que es urgente problematizar el sólido cuerpo de costumbres clientelares ligadas a la corrupción institucional. Veamos algunos

de los asuntos más relevantes afirmados en este acápite sobre las relaciones políticas.

- Se encuentra que la incidencia política es un medio utilizado por sectores gremiales y empresariales para influir en la formulación de leyes y procesos relacionados con la implementación de los Acuerdos que favorezcan sus intereses. Esto es comprensible, legal y legítimo, el asunto es que, respecto a todos los otros actores, existe un desbalance en el acceso a la información, así como a los contactos que se tienen y usan para ejercer la incidencia, lo que genera desventajas en la medida en que no existen canales regionales o nacionales para que sectores territoriales, campesinos, afrodescendientes e indígenas, especialmente quienes viven en las zonas de conflicto, puedan acceder en igualdad de condiciones.

- Se evidencia en la coyuntura la persistencia de relaciones entre política y mafias, especialmente en la dinámica electoral que se reacomoda y genera desplazamientos y relevos significativos, buscando ampliar las bases de electores, pero disminuyendo la base de elegibles con posibilidades reales, por factores de financiación y mecanismos de interacción social, continuando dentro de la misma lógica clientelar que ha generado crisis en lo público.

- Se evidencian acciones encaminadas a la configuración de una cultura política relacionada con el respeto por el otro, especialmente en los espacios de socialización de los Acuerdos en las comunidades más afectadas por el conflicto y desde iniciativas de movimientos sociales, poblacionales y culturales de arraigo local. No obstante, hay agencias centradas en generar polarización apelando a sentimientos de odio y venganza que, por los medios que utilizan, tienen una mayor capacidad de despliegue sobre todo en centros poblados y en áreas urbanas claves en los corredores del conflicto. Esto conduce a que los espacios de reconciliación sean débiles.

- El nuevo partido de la FARC se circunscribe aún a sus propias bases y acumulados históricos en territorios rurales, y solo en pequeños pasos se reporta una actividad política de alcances más regionales y /o nacionales, más allá de su propia fundación, que está siempre centrada en reivindicar y abogar por el cumplimiento de los acuerdos.

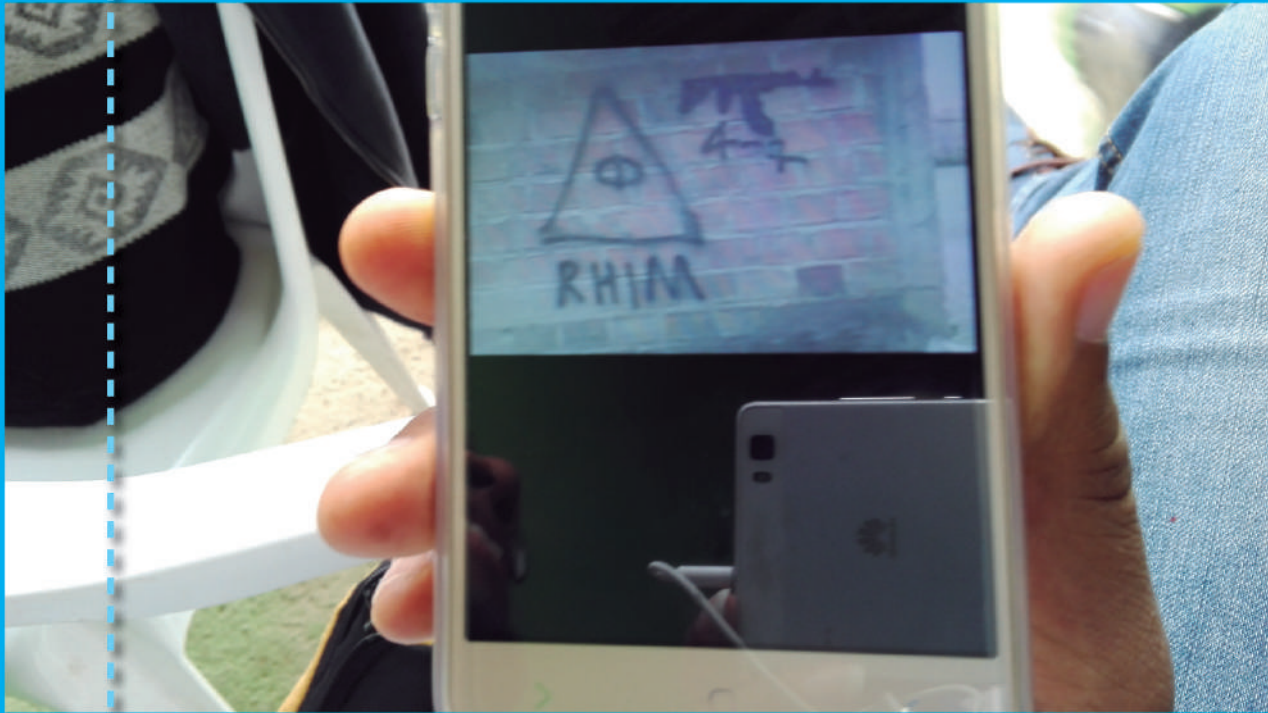
- Los movimientos sociales y ciudadanos independientes, especialmente los proyectos de incidencia social de comunidades campesinas afrodescendiente e indígenas, que tienen una dinámica muy fuerte y permanente de movilización y protesta social, se observan en posiciones de subordinación al momento de llegar a la esfera política y de producir incidencia en la representación institucional, centralmente por los altos costos del ejercicio político y por la falta de acuerdo entre bases sociales y dirigentes formados y reconocidos para asumir tales roles.

- El debate legislativo frente al *fast track* evidencia la dificultad del gobierno para conducir el posconflicto y lograr la adherencia necesaria a una apuesta estratégica de paz territorial que cuente con unos mínimos consensos de los sectores políticos representados institucionalmente en los poderes públicos. Buena parte de las aristas de implementación del Acuerdo están definiéndose en el marco de la nueva gobernabilidad.

- El proceso de promulgación de la JEP y la discusión parlamentaria en torno la reforma electoral y las Circunscripciones Especiales de Paz evidencian cómo la legislación lejos de atender a los requerimientos del país está centrada en intereses particulares y demandas personales. El corto proceso de implementación en curso, permite entrever el Estado en acción, evidenciando que no hemos logrado incorporar aspectos de arquitectura y operación institucional que garanticen un desarrollo del derecho a la paz.

- Las estructuras políticas y las redes se reconfiguran en torno a la dicotomía entre la implementación en el sentido en que fue concertado y la transformación total de los Acuerdos. Estos movimientos implican que líderes se cambian de partido, pero que en lo fundamental mantienen las casas políticas consanguíneas y no tienen una definición estratégica de la reconciliación como prioridad estratégica del país.

- Las investigaciones por corrupción han conducido a una inestabilidad frente a la coyuntura electoral, haciendo que no se tenga claridad frente a los espacios institucionales a desarrollar para el avance en la implementación de los acuerdos; pero sobre todo dejando un gran desconfianza y desorientación de las poblaciones de los territorios priorizados para vivir la transición, así como de la ciudadanía de carácter más urbano en las regiones.



AMENAZA A EXCOMBATIENTE
MIRANDA - SEPTIEMBRE 2017

➔ **5** LA INSEGURIDAD Y LA
VIOLENCIA

La conflictividad violenta es un fenómeno constante en la vida social y política en nuestro país. En el siglo XIX se presentaron ocho guerras nacionales y catorce regionales, en los primeros cincuenta años del siglo XX hubo expresiones violentas interpartidistas que desembocaron en la comúnmente llamada Violencia, y a partir de la década de los sesenta emerge una nueva conflictividad que hemos denominado el conflicto político armado o las guerras contemporáneas (Willis Obregón, 2015, pág. 813-817).

Aunque cada uno de estos momentos ha tenido diferentes expresiones en la vida local y nacional, una de las características de los últimos sesenta años ha sido la afectación a la vida de civiles dejando una cantidad importante de víctimas. En Colombia a la fecha hay registradas 8.270.812 personas que han sufrido algún hecho victimizante: 7.325.975 fueron obligados a desplazarse de sus zonas de origen, 267.050 no combatientes perdieron la vida en el marco del conflicto, 46.944 fueron desaparecidos, 11.220 fueron impactados por minas antipersona o munición sin explotar, 36.443 padecieron el secuestro, 10.740 fueron torturados, 24.284 fueron agredidos en su integridad sexual⁹.

En ese marco, la dejación de armas producto de los Acuerdos suscritos entre el gobierno y las FARC es un evento importante. Durante este proceso la Misión de las Naciones Unidas pudo certificar que 8.994 armas han sido retiradas del conflicto político armado, entre las que hay 1.817 pistolas, 170 revólveres, 6.177 fusiles de asalto, 28 de precisión, 6 escopetas, 13 subametralladoras y 274 ametralladoras; además se destruyeron 750 escondites con armamento.

Siendo este un gran avance, persisten condiciones de seguridad en los territorios y prácticas violentas que ponen en riesgos la vida de diferentes actores civiles, entre ellos excombatientes, comunidades étnicas (afro e indígenas) pobladores campesinos y líderes sociales y comunitarios.

La permanencia y reacomodo de grupos armados ilegales, ya sea por la persistencia de grupos posdesmovilización, de bandas criminales o de otras insurgencias diferentes a las FARC, tipo ELN o EPL, afecta el proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes y las comunidades que habitan los territorios, pues prolongan las dinámicas delictivas que sostienen la lógica violenta y el uso de las armas.

⁹ Los datos son extraídos del Registro Único de Víctimas.

Así pues, para abordar la dimensión de inseguridad y violencia en el contexto del primer año de implementación se presenta a continuación un relato que da cuenta las principales situaciones y riesgos de seguridad que comprometen a las comunidades de las áreas de conflicto, a las organizaciones sociales y a los excombatientes como grupos humanos que configuran la población civil de los escenarios de construcción de paz.

5.1. Las Rentas Ilegales y la Violencia.

“Yo le digo, las FARC eran muy poderosas. Aquí nosotros hemos mantenido autonomía, pero la verdad uno quisiera saber qué va a pasar con ese poco de negocios ilegales, quién va a poner orden, que no sea que la concentración y transformación de las FARC sea más muertos en las comunidades... porque en esta guerra nosotros los negros y los indios y campesinos hemos puesto la mayor cantidad de muertos”.

Líder de Comunidades afrodescendiente.

Una de las principales inquietudes de las comunidades ampliamente enunciada en medios públicos del país está relacionada en la manera cómo la reincorporación de las FARC a la vida civil va a influir en el crecimiento de las empresas ilegales presentes en los territorios, en la medida en que la salida de un actor con dominio territorial puede implicar que entran a copar el espacio territorial otros actores, generando nuevos procesos de victimización a las poblaciones. Veamos algunas observaciones en ese sentido:

5.1.1 El narcotráfico: la Guerra que Permanece en Medio de las Comunidades.

“...Acá en Tumaco usted tiene que preguntar es que grupo no está, así me la deja más fácil, acá hay de todos los grupos, desde las BACRIM hasta la gente que se quedó de las FARC, y cambian de nombre y de bando cada rato de acuerdo a las conveniencias del negocio y a las enemistades que surgen entre ellos, si hasta mexicanos hay, o eso dicen que...¿ Sinaloa?, ¡no le digo!, todos detrás de la plata que deja la coca, se matan entre ellos y lo terminan matando a uno, en últimas va tocar que irse”.

Testimonio habitante de Tumaco.

“La coca ahora está más barata, pero la gente mantiene allí los cultivos porque piensan que es temporal, que por el revuelo de la paz, el que la compra está quieto, debe estar de vacaciones (jajaja...), eso siempre ha sido así, cuando hay



Corregimiento el Capricho - Guaviare

mucho movimiento del Ejército por ejemplo, el precio baja, pero los cultivos uno los mantiene, porque los dueños del negocio están por ahí, además eso es mejor no meterse a quitar las matas, quien le asegura que luego no vienen a matarlo a uno, porque los que cuidan que se mantengan los cultivos, ahí están, esos no se han ido para ningún lado...pues aquí hay muchas bandas, como la gente de "la Constru", "los Urabeños" y otros narcos, y uno si quisiera sustituir y eso, pero se arriesga mucho, allí si le digo que la que mata no es la mata"

Cultivador de Coca Putumayo.

Los testimonios anteriores no solo evidencian la permanencia de los cultivos y la empresa criminal, sino también los niveles de inseguridad y violencia en los que actualmente viven las comunidades que se ubican en los territorios que estuvieron bajo el control de las FARC y que hoy son disputados por otros grupos armados ilegales, lo que puede significar nuevas dinámicas de victimización. Específicamente la lógica del negocio del narcotráfico sigue operando con la clave del ejercicio de la violencia en toda la cadena; pueden existir hechos de victimización en cada una de las mediaciones económicas y sociales existentes y sobre múltiples actores que no se reducen a los cultivadores; como economía de enclave y de bonanza, la producción de narcóticos produce muertes, amenazas, desplazamientos, constricciones, enfrentamientos colectivos, etc. En este momento, cuando se bus-

ca iniciar la implementación del punto cuatro, no son pocos los reacomodos y ampliaciones de las dinámicas violentas insertas en los territorios asociadas a la economía ilegal del narcotráfico.

"En estos meses con todas las protestas ha quedado claro que aquí siguen todos. Con decirle que desde finales de agosto 12 integrantes de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira están viviendo en la cabecera municipal, mejor dicho desplazados en su propia tierra. ¿Todo por qué? Porque fueron acusados de ser los promotores de las erradicaciones forzadas, cuando lo que han promovido es la sustitución de cultivos para sus comunidades. Pero usted sabe todo tiene su límite, hasta el miedo, por eso es que se sacó el comunicado, los líderes del Consejo decidieron romper el silencio, venga le leo: "durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al Consejo Comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza labores de erradicación forzosa". Desde el Consejo Comunitario se intentan alternativas propias de protección pero no siempre pueden desarrollarse, es que no es fácil".

Testimonio de miembro de la comunidad.

No sólo es la permanencia del narcotráfico y de las redes internacionales que movilizan un importante negocio ilegal, sino también moda-

lidades de violencia que mantiene intimidación y agresiones contra las comunidades, como los escudos humanos, el señalamiento de miembros de la comunidad de ser promotores de políticas de sustitución, disgregando el tejido social local y haciendo que se limiten las opciones territoriales para generar planes propios de seguridad humana.

“Aquí vinieron los del gobierno, hicimos la reunión y todo eso para la sustitución voluntaria y luego vinieron los policías y nos dieron una muenda, eso casi le vuelan la mano a un compañero...hirieron a varios, y entonces uno en ¿quién cree? El comandante de la Policía dijo que él tenía orden de erradicar, y eso no valió que le mostráramos acuerdos ni nada, echaron a tumbar matas y nosotros a no dejarlos... eso fue feo, pero estamos en las mismas desde principio de año y vamos a seguir por la misma”.

Cultivador de Coca Guaviare.

“Es que nosotros no hemos dicho que no a la sustitución, al contrario nosotros nos hemos organizado para eso, y ellos vienen de una vez echando gases lacrimógenos y atropellando a la gente, nosotros estamos defendiendo lo que se pactó con nosotros, y vienen y nos violentan, en Morales mataron a un compañero en una situación igual, aquí nadie está exagerando”.

Cultivador de Coca Norte del Cauca.

De acuerdo a los testimonios anteriores es preciso decir que la lucha contra el narcotráfico en el proceso de implementación ha tenido dos estrategias disímiles que se ejecutan al tiempo: sustitución voluntaria y erradicación forzada. En términos de seguridad humana el choque entre ambas iniciativas gubernamentales pone en riesgo las comunidades en los territorios e impacta negativamente la legitimidad de los acuerdos locales para la implementación global del Acuerdo y del gobierno.

5.1.2. Minería ilegal en el portafolio de las empresas criminales.

“Cuando este negocio lo controlaban las FARC pues ellos tenían mucho poder y no había tanto problema, pero ahora que si son Gaitanistas o del ELN y otra vez lo van a poner a uno en esa friega que a quién apoya y a quien no, y a que si uno es guerrillero ¿o qué?”.

Minero Informal Buenaventura.

“Durante un tiempo dijeron que era la “Constru” la dueña de ese negocio, pasa de mano

en mano pero se mantiene, el problema no es para ellos, es para uno que ni sabe bien quién es que manda”.

Testimonio habitante indígena del Putumayo – Puerto Vega Teteyé.

La minería ilegal hace presencia en diferentes puntos de la geografía nacional, y uno de los actores armados que tuvo influencia directa o indirecta sobre ésta actividad fueron las FARC; sin embargo, ahora que se han retirado de estos territorios otros actores armados intentan ejercer control sobre el negocio minero, esta condición configura riesgos para la vida y la seguridad de las comunidades en tanto este control territorial de la economía ilegal permanece en disputa.

“Se han hecho muchos operativos en los que participa el Ejército, se llevan o destruyen las excavadoras y dragas, pero después del operativo el Ejército se va y esa gente reemplaza una máquina de esas en un momentico, luego suben más arriba del Atrato y el negocio sigue, y eso pasan meses para otro operativo y así se la han pasado años, uno entendía antes, porque había mucha presencia de las FARC pero ahora uno no entiende porque no se quedan permanentemente”.

Concejal de Norte del Cauca.

Se observa en los recorridos sobre el suroccidente que la principal actividad minera ilegal es en relación con la extracción de oro. Esta actividad permite el lavado de activos de otras carpetas criminales ligadas al narcotráfico, el contrabando, la extorsión y el tráfico de armas en los territorios, disparando la mentalidad de guerra y el funcionamiento de especies de comunidades secretas que generan al lado de las grandes riquezas sendos procesos de victimización y malestar colectivo.

“Las FARC estaban en 244 municipios en donde había de todos los tráficos y tenían un control. El gobierno con el Plan Victoria ha entrado a muchos municipios pero ha sido poco a poco. Ahora en diciembre van a llegar refuerzos pero en lugar de encontrar municipios sin FARC van a encontrar el control de otros grupos ilegales sobre la población, pero sobre todo colocando sus reglas y con amenazas sobre poblaciones”.

Funcionario público del departamento del Cauca.

Yo te digo una cosa, aquí la mitad de la seguridad tiene que ver con conocer la geografía, aquí puede llegar Ejército y todo lo que sea pero mientras no conozcan los recodos de estos

ríos pues se pierden. Pero no es sólo aquí en el Atrato en muchas partes, entonces eso no es solo mandar tropas a copar los sitios que dejaron las FARC, se necesita algo más.

Líder comunitario Tagachí.

El control territorial por parte de la fuerza pública ha venido desarrollándose en el marco del Plan Victoria que tenía como objetivo copar los 244 municipios de influencia de las FARC para impedir que otros actores ilegales tomaran posesión de estos sitios. Producto de esta labor, hasta el 15 de noviembre se habían realizado 147 operativos contra la minería ilegal (Fuerzas Militares, 20 de noviembre de 2017); no obstante, el modelo operativo tiene varias falencias. De un lado, no se logra consolidar una presencia permanente de la fuerza pública que disuada y cope los territorios, pues en gran medida se sigue operando en la lógica de la lucha contrainsurgente, mientras se enfrenta es a redes micro zonificadas con gran capacidad de mimetizarse entre la población y en sus labores cotidianas; por otro lado, se requiere conocer las zonas no sólo en sus accidentes geográficos, sino también en sus dinámicas culturales, lo cual no es solo un asunto de ingreso de tropas sino de relacionamiento de la institucionalidad pública con las poblaciones.

“La verdad es que uno de esas cosas no habla mucho, pero lo que pasa es que acá sí hay bandas y están los Elenos. No serán los dueños del negocio pero controlan, y a alguna gente la ponen a que salga a protestar y todas esas cosas pero, la verdad sea dicha, también hay muchos que salen por cuenta propia nadie los obliga, a protestar, y con todo derecho, creo yo. Además como decimos nosotros, si negociaron con las FARC porque no se puede llegar a acuerdos con los mineros, nosotros queremos legalizar”.

Mujer habitante Remedios.

El punto es que los procesos de formalización minera han sido parte de la lucha histórica del Estado colombiano por controlar las rentas ilegales, por tanto, en el Acuerdo se pactó el control de la minería ilegal como uno de los principios orientadores para el fin del conflicto. La apuesta era que con la salida de las FARC de los territorios se agilizaran procesos diferenciados de formalización en los que se dieran tratamientos distintos a la minería ancestral de la minería ilegal. Al no establecer una ruta institucional que logre tener mecanismos acordes a cada realidad se generan no sólo tratos que no corresponden con la justicia sino nuevos circuitos de violencia, especialmente para las comunidades locales.

5.1.3 Fronteras y empresas criminales.

“Se la pasan entre Cúcuta y Tibú, van y vienen por la frontera, dicen que son Los Pelusos, pero acá hay otros grupos, si entre ellos mismos hay peleas, por aquí extorsionan, roban y matan y le venden vicio a los muchachos. Hace poquito mataron a un presidente de Junta creo que fue en la vereda M 24 allá en Tibú, la gente dice que fueron sicarios y uno se la pasa es con miedo porque acá también hay gente del Clan del Golfo”.

Testimonio Líder Comunal Catatumbo.

En territorios como Norte de Santander el control del microtráfico es ejercido por bandas criminales como “Los Pelusos”, sin embargo existe una disputa con otras bandas criminales por el control de esta red y se han presentado enfrentamientos, ajusticiamientos y asesinatos selectivos a miembros de esta organización; estos asesinatos han aumentado el terror urbano por el carácter de sevicia con el que se llevan a cabo modalidades que en su momento fueron atribuidas a prácticas paramilitares. El escenario crítico en las diversas regiones tiene diversos móviles y formas de configuración.

“Acá en la Guajira se trafica gasolina, armas y coca y eso no es nuevo, es más uno puede decir que todo el mundo lo sabe, pero, ¿Cuál es la diferencia? Pues que el negocio cambió de dueño y no a todo el mundo le gustó, cada uno quiere su pedacito, La Majayura por ejemplo, allí mandaba Las FARC ahora se ha vuelto una calentura, roban a todo el mundo y meten ganado y gente va y viene y a veces está el Ejército pero no siempre”.

Testimonio líder Guajira.

“La gasolina veneca se vende en pimpinas baratas, a cuatro mil bien medida y con ñapa; la otra cara de este contrabando son las caravanas incendiarias de la muerte que fluyen por la frontera y que rompen la autoridad, la institucionalidad, las comunidades y que solo dejan pobreza”.

Notas de campo Cesar.

Las fronteras no sólo facilitan el tráfico de drogas de uso ilícito, sino otro tipo de actividades delictivas que, por ausencia de controles y ante la precaria presencia estatal, se convierten en territorios proclives a la actuación de empresas criminales en las que la violación a los derechos fundamentales hace parte de la cotidianidad. En Arauca, Catatumbo, Putumayo y el corredor

Caribe, por ejemplo, se reporta aumento de actividades delincuenciales como robos, tráfico de armas, extorsiones, contrabando de combustible y ganado; negocios controlados por grupos armados ilegales que ejercen el control fronterizo, como lo son el ELN y Bandas posdemobilización, bandas emergentes y las disidencias de las FARC.

“En Arauca se conocen 40 rutas de acceso ilegal que están siendo controladas por grupos armados ilegales y es común ver en las calles de los principales municipios del departamento, venezolanos en busca de recursos que permitan su subsistencia mediante actividades informales o delictivas. Los migrantes venezolanos ofrecen sus servicios laborales muy por debajo del precio que se acostumbra a pagar por día laborado a los trabajadores colombianos, por lo cual, muchos propietarios de negocios, obras particulares y predios rurales, han optado por contratar informalmente, la mano de obra que le es más favorable en términos económicos, este es al caso de obras civiles particulares, (obras de construcción) lavaderos de autos y motocicletas, restaurantes, salones de belleza, ferreterías y depósitos, fincas ganaderas y agrícolas, almacenes de venta de ropa y cacharrería, pero también se han vinculado a actividades delictivas como robo y extorsión, han ido apareciendo modalidades de robo que nunca habíamos visto en Arauca”.

Informe Corredor Arauca.

El flujo migratorio de ciudadanos venezolanos hacia Colombia por las fronteras de Arauca, Catatumbo, Guainía, Vaupés, la Guajira y Cesar no sólo ha aumentado, sino que en muchos casos afianza las actividades delictivas que en el cotidiano surgen de manera abrupta. El sentir de las poblaciones fronterizas es que hay un estado de latencia, un sentimiento de emergencia y de inseguridad permanente.

“Acá hace poco hubo una balacera allí no más en el puente Simón Bolívar, y ha habido otras, eso riegan balas cada rato, pues lo que han dicho es que se enfrentan entre el ELN, el EPL y otras Bandas, para controlar lo del contrabando y la entrada y salida por las trochas, mejor dicho, por ver quién es que manda en la frontera...el ejército si llega pero no siempre”.

Testimonio habitante Norte de Santander.

Hoy las fronteras están en disputa entre los grupos armados por el control sobre la distribución del contrabando y el narcotráfico generando

un clima de terror en las poblaciones fronterizas de Colombia y Venezuela. Las fronteras son entonces espacios donde se internacionalizan, en doble vía, actividades delictivas que generan percepciones como fácil penetrabilidad e inseguridad, incapacidad estatal para controlar, legitimando entre las comunidades la aparición de controles paraestatales de orden armado que cumplen con esas funciones.

5.1.4 El tráfico y el uso de armas de fuego.

“Viajé temprano desde Cali hacia Buenos Aires Cauca, debía bajarme en Robles y allí tomar un vehículo para subir hasta la Elvira en Buenos Aires, calculé que el viaje duraría 40 minutos, pero me quedé dormida, me bajé unos 5 kilómetros adelante, en la vía que conduce a Suárez. Debía esperar algún vehículo para devolverme, una señora, que salió de una de las dos únicas casas en la carretera, me dijo que me iba a acompañar porque era peligroso estar por allí sola a esa hora de la mañana, minutos después pasaron 6 motos cada una con dos hombres a bordo, vestidos de civil y portaban armas largas, la señora me miró y dijo: - “ya casi pasa un conocido en moto yo le pido el favor y él la baja hasta Timba”.

Notas diario de campo Norte del Cauca.

“En Chaparral existe una proliferación de pandillas que hacen hurtos en las noches en los que utilizan armas de fuego para la intimidación, a dos de los muchachos de acá los pararon en la carretera, les hicieron quitar la camisa y los zapatos, los robaron, eran cinco hombres armados, los muchachos cerraron los ojos pensaron que los iban a matar”

Excombatiente ETCR El Oso.

Las armas en los territorios de transición son de uso naturalizado y cotidiano, armas pequeñas y ligeras o armas largas, hechizas (de fabricación casera) y originales entradas ilegalmente por las fronteras o adquiridas legalmente pero sin mucho examen de su porte y sus usos, construyen los relatos frecuentes y no se evidencia un control riguroso sobre las armas en poder de particulares. El cese al fuego con la ex guerrilla de las FARC-EP y la dejación de armas por parte de los excombatientes disminuye eventos de victimización y elimina riesgos que en muchos lugares del país hoy se celebran con razón; sin embargo, se hacen muy visibles procesos de rearme de grupos pos desmovilización y de generación de nuevas iniciativas de armarse en la vida local.

Aquí los dueños de las fincas ya han ido contrahuyendo seguridad privada, y tienen casetas con hombres armados, porque no van a dejar que lleguen otros a hacer lo mismo que las FARC y como ellos sí tienen plata, pues ellos tienen como cuidarse a uno de pobre sí le toca tener fe. Testimonio conductor moto taxi Caquetá.

Contrario a los que se esperaba, la disponibilidad de las armas en manos de civiles no se ha reducido; bajo la percepción del riesgo en los que se ven muchos ciudadanos - algunos dueños de grandes extensiones de tierra-, se legitima la tenencia y uso de las armas como elemento de protección o provisión de seguridad. Esto genera una demanda ampliada y por lo tanto activa los mecanismos de oferta.

“Aquí llega remesa a veces y la gente ahorra pa tener lo suyo, lo que más se ve en estos días es el revolver Llama y las pistolas sí de todo tipo, han crecido las armerías de barrio y para conseguir solo hay que tener la plata; se vende como pescado por aquí; usted hasta en las partes más turísticas puede conseguir un arma o alguien que la tenga y esté dispuesto a usarla...”

Agente eclesial Tumaco.

La persistencia de economías ilegales, ligadas al narcotráfico, a la minería ilegal, al control de las fronteras y a la permanencia de armas en manos de civiles son fuentes de victimización que no han logrado ser contrarrestadas en lo que va del proceso de implementación de los Acuerdos, aunque se combinan estrategias de presencia de la fuerza pública en el territorio con la persecución específica a bandas criminales, la situación es que el sentimiento o percepción de inseguridad se dispara y genera una sostenibilidad de la economía de la guerra la violencia y las armas.

5.2 La Seguridad y los Riesgos Políticos.

La dejación de armas de las FARC es una de las acciones centrales para aportar a la construcción de paz. Este hecho genera una respuesta positiva y alegre de la población civil presente en los corredores históricos del conflicto; también expresa tensiones respecto a la dinámica de reincorporación y a las demandas de seguridad para los excombatientes y las comunidades donde se ha desarrollado el proceso de dejación de armas. Veamos algunas de las referencias más observadas.

“Cuando llegamos a Arauquita había banderas blancas en cada casa, la gente salió a recibirnos sin que nadie les dijera, nosotros no nos lo esperábamos, estábamos felices, ellos y nosotros; después, con los días es que van apareciendo las dificultades y los resquemores de algunos sectores que se resuelven hablando, cuando nos conocen más”.

Excombatiente FARC Arauquita.

“Después se vino una conversa con Julián Conrado, habló del lugar del arte para que la paz sea transformativa, habló del amor, de las músicas y de las narrativas populares, lo hizo cantando y rememorando su lugar cívico y popular de procedencia, insistió bastante en la prioridad de la unidad, en la urgencia de superar la lógica de la violencia y la muerte. También se sentía en su expresión de incertidumbre frente a la marcha de los procesos de implementación.”

Notas de Campo Observación ZVTN Pandores.

El asunto político ha estado eclipsado especialmente por los riesgos de la implementación en términos de las tensiones de seguridad en múltiples sentidos y por el manejo de alternativas que estén en los marcos de convivencia y reconciliación, reconociendo que este último aspecto existe pero que es pequeño respecto a los retos de recuperación de los tejidos dañados por la guerra.

“Aquí apenas nos dieron los documentos y la boleta que uno no debía nada con la justicia, muchos se fueron, cogieron camino para hacer su vida con la familia. La verdad es que desde que se empezó con el cese bilateral la mente nos cambió a muchos, nos veíamos era en la casa. Aunque mucha gente no lo crea la guerra cansa, algunos estaban pensando era en empezar una nueva vida, en nada más. Uno en el fondo agradece porque aquí aprendió muchas cosas. Yo por ejemplo era un chamaco cuando llegué a las FARC. Si yo no tuviera tantos pendientes con la justicia también me iría”.

Excombatiente FARC Miranda.

“No fue fácil hacer el tránsito de la ACR¹⁰ a la ARN¹¹. Pero finalmente ya lo hemos hecho. La población cree que quienes se van de la ETCR abandonan el proceso pero no es así, nosotros como entidad los tenemos localizados por el pago, ahí los volvemos a ubicar y realizamos procesos con ellos. Es más demorado y un poco

10. Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas

11. Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

inseguro por la situación de la región, pero lo-gramos trabajar con todos”.

Funcionaria ARN Córdoba.

El proceso de dejación de armas y la dinámica de reincorporación ha generado expectativas de nuevos rumbos de vida en muchos de los excombatientes, lo cual implicó que rápidamente buscaran alternativas de ubicación personal. Esto es una muestra de la voluntad política de las FARC respecto al proceso de paz; sin embargo, lo que más se reporta en los espacios en los cuales se mueven es el temor que sienten ellos, sus familiares y vecinos respecto al entorno agresivo, de presencia de actores armados y de amenazas al proceso de implementación y a las comunidades en las cuales se desarrolla.

“En el grupo de excombatientes se observan mujeres en gestación, mujeres lactantes, y mujeres con hijos entre 2 y 5 años, han tenido dificultades para la movilidad durante la atención prenatal y en algunos casos no la han recibido, manifiestan preocupación y miedo por la presencia de grupos armados ilegales como el ELN, bandas posdesmovilización y narcotraficantes”.

Notas de campo ZVTN Tumaco.

Rápidamente en las antiguas ZVTN, hoy ETRC, se generó un clima de incertidumbre por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial. Esto tensiona los grupos de excombatientes y a las comunidades donde circulan y se asientan generando cuestionamientos fuertes respecto a el destino del proceso y a la viabilidad del camino de reconciliación generando nuevos riesgos latentes de seguridad.

“Yo voy a cumplir la palabra que comprometí al Secretariado aquí o donde esté, al menos mientras no vea en peligro mi vida, no voy a hacer otra cosa, pero esto es lo único que yo sé hacer, y eso fue lo que se le olvidó a ellos, el proyecto de vida, que aquí los que estamos somos seres humanos, nos quisieron encerrar aquí y sin garantías de nada, Yo creo que en la guerra estábamos mejor al menos uno le podía dar seguridad a la gente de uno, ahora estamos aquí, como de limosna con miedo a salir y que lo maten, eso para un comandante de tropa es muy duro”.

Excombatiente FARC.

“¿A cuántos han matado ya? ¿Cómo a tres docenas? Mire, uno esperaba eso, la muerte era con lo que nos podíamos encontrar cualquier día, una bomba o un tiro cualquiera nos

podía matar, pero nosotros estábamos en la guerra, estábamos armados, era un enfrentamiento, hoy nosotros no tenemos armas, además ahora nos amenazan la familia, a varios compañeros les han matado hermanos y le tienen amenazada hasta la mamá, ¿cómo se siente uno con eso?”.

Excombatiente FARC.

En los Espacios Territoriales de Reincorporación y capacitación la percepción de inseguridad es generalizada, los excombatientes sienten que su vida está en riesgo, hay miedo debido a los asesinatos contra ellos y sus familiares. El 14 de agosto la Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa del Cauca publicó una radiografía sobre estos hechos, donde se indicaba que desde el mes de abril hasta la fecha eran 32 los asesinatos a excombatientes y sus familiares, estas cifras han aumentado si consideramos que tan solo entre los meses de octubre y noviembre se registra en prensa el asesinato de 6 excombatientes, indicando que, en promedio cada 10 días ha ocurrido uno de estos asesinatos.

“yo también me fui, pero más bien me regresé para evitar darle problemas a la familia. Vea esta foto, todavía estoy averiguando si es una amenaza, algo parecido le dejaron al último compañero que asesinaron. En mi caso, después de que fui a visitar a mi mamá lo dibujaron al lado de la casa, en caso de ser una amenaza, pues no puedo volver, es muy difícil sobre todo porque parte de mi moral siempre fue el arma y ahora no tengo...”

Notas de Campo Observación Monterredondo.

Esas condiciones de inseguridad generadas por las amenazas y muertes han ocasionado que muchos excombatientes abandonen los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, situación que se interpreta como una medida para la protección de la vida. Otros se mantienen en el territorio pero la sensación de riesgo e indefensión crece. En buena medida el efecto de las situaciones de incertidumbre gana un espectro subregional y regional, pues recordemos que el proceso no se reduce a los Espacios de Reincorporación y Capacitación, sino que involucra un amplio tejido de corredores que buscan potenciarse en una transición de la guerra, a la reconciliación y a la paz.

“A los que estaban en Gallo les tocó irse, los motivos son varios, pero el principal se refiere a una medida para proteger la vida y poder continuar con el camino de reincorporación co-

lectiva, pero los que salieron de Gallo para La Fortuna no era la misma cantidad que llego. Ya muchos se habían ido, es más, de los que salieron para Chigorodó muchos eran familiares de excombatientes, se ha dicho que algunos de los que se habían ido antes, hoy hacen parte del Clan del golfo o de otro grupo, la gente se pregunta que por qué se salieron, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo creyó que debían estar allí encerrados y eso no es así, también es que si se quedaban acá los iban a salir matando”:

Testimonio habitante Corredor Sur de Córdoba.

“El día domingo fueron asesinados 6 excombatientes que hacían parte del proceso de reintegración en el Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración “Aldemar Galán” en el corregimiento San José de Tapaje en el Charco Nariño, en hechos que aún no se esclarecen; inicialmente se dijo que correspondía a enfrentamientos entre disidentes y las FARC pero no se ha probado que los asesinados portaran armas, entre tanto el comunicado público desde el ETCR se niega algún enfrentamiento y mencionan que se trata de un crimen perpetrado por una banda criminal encabezada por Robinson Alirio Cuero Obando (Álvaro Galán) y Eliecer García Estupiñan (Marcos Arteaga) entre otros”.

Reporte de Observación Nariño.

De los asesinatos contra excombatientes y amenazas contra su vida han sido sindicados diferentes actores: bandas criminales, disidentes de las FARC e incluso actividad sicarial ligada a ajustes de cuentas personales. Sin embargo, la continuidad y el aumento de los asesinatos y amenazas muestran que las medidas de seguridad y los planes especiales para el posconflicto no están operando de manera eficiente, en la medida en que la operación en micro redes es dispersa, identificable pero poco abordable sin una decisión integral de seguridad que involucre a las comunidades, desde una perspectiva de vigencia de los Derechos Humanos y de la reconciliación. Las expectativas de transformación de los corredores del conflicto en territorios de paz se han visto afectados por la presencia de actores armados que en la medida que mantienen métodos violentos y mecanismos de presión sobre los excombatientes generan miedo y entorpecen el proceso de reincorporación.

5.3 Tejidos Cotidianos Locales y Violencias Actuales.

Estamos también situados en medio de una extendida red de relaciones locales y regionales que han sido afectadas cotidianamente por las violencias y que de alguna manera se han

adaptado a ellas. En algunos casos las violencias se han incorporado a formas de interacción domésticas, internalizándose en comportamientos sociales y en otros caso operan como formas de coacción y constreñimiento muy institucionalizados; veamos algunas escenas de lo que está pasando con esas dinámicas en los tejidos locales en el contexto de la implementación.

5.3.1 Violencias cotidianas.

“Ahora hay almacenes con ventanales y fachadas de vidrio, antes eso no era posible por los combates, este año remodelamos y compramos las vitrinas para exhibir la mercancía, eso es muy favorable para nosotros, uno está muy tranquilo por ese lado”.

Testimonio propietario miscelánea Norte del Cauca.

La ausencia de combates implicó transformaciones en la percepción de seguridad que redundó en inversión en infraestructura física: embellecimiento de casas, ampliación de negocios; haciendo que la territorialidad se transforme y el clima de seguridad no solo sea una apreciación sino que se objetive en nuevos emprendimientos y en la diversificación y ampliación de las formas de relacionamiento social y productivo.

“Aquí todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, el vecino de aquí pone ese equipo a todo taco y el de al lado aumenta el volumen, es como una pelea a punta de ruido, anoche no me dejaron dormir, aquí estoy trasnochada, eso antes nadie lo hacía habían normas claras. Me han dicho que hay un código de policía, pero acá lejos de todo ¿dónde se van a ir a pagar multas? Y ¿cuál policía? Antes uno iba donde el comandante y él resolvía todos estos temitas”.

Testimonio lideresa comunitaria Planadas.

Emerge entonces ahora otro tipo de asuntos relacionados con la regulación y la autorregulación vecinal que genera grandes preocupaciones y demandas al Estado. Los problemas vecinales y de violencia cotidiana en muchos lugares eran resueltos por las FARC y ante la ausencia de ésta no se han incorporado mecanismos de justicia para tratar los conflictos de convivencia ciudadana.

“Han aumentado los robos de ganado y animales de engorde, se le atribuyen a los indígenas Nukak, pero para ellos eso no es robo, ellos creen que todo es de ellos, y se meten a las fincas y sacan los animalitos, eso ha sido un

problema, porque para los campesinos eso es un robo, pero para los Nukak eso se los da la naturaleza. Con las FARC eso no pasaba, ellos sabían que se metían en problemas, la verdad eso es muy complicado porque ya ha habido peleas y eso puede terminar mal, toca que el gobierno intervenga".

Testimonio habitante Guaviare.

El entramado de relaciones que se tejen en torno a los Nukak evidencia las dificultades para generar mecanismos propios de regulación cultural frente a diferentes maneras de habitar los territorios, se reproducen así una gran cantidad de conflictos que tiene la base en tensiones interculturales y de relacionamiento con la naturaleza, las cuales tienden a desembocar en agresiones e intolerancia. En lo observado es bueno resaltar que las alternativas de presencia institucional llegan con lentitud pero el asunto no se resuelve mecánicamente "llevando el Estado a las zonas de pos acuerdo", pues la referencia es que el Estado se tiene que generar a partir de una concertación con las dinámicas locales de esos sitios apartados teniendo en cuenta los grupos de interés y las prácticas culturales presentes.

"Aquí los negocios siguen pagando vacuna, a los ediles los citaron como siempre y les dijeron que se olvidaran de no pagar, que nada había cambiado, que a ellos no les importaba ningún Acuerdo que eso no era con ellos, y que le dijeran a los dueños de los negocios".

Testimonio Líder Meta.

"Acá la gente siempre ha podido tener su moto, pero ahora a uno le da miedo comprarle esa vaina a los hijos porque han estado robándose las en la carretera y pues uno no va a exponer la vida por una moto. Antes los ladrones sabían a qué se atenían, pero ahora creen que pueden hacer lo que les dé la gana, como si esto fuera tierra de nadie. Por eso nos ha tocado salir nosotros también a cascarlos, porque tampoco nos vamos a dejar".

Testimonio habitante Norte del Cauca.

Los anteriores relatos muestran cómo persisten dinámicas de violencia cotidiana como el hurto y la extorsión. La actividad delincinencial se acrecienta y se están resolviendo bajo la lógica de justicia por mano propia, lo cual es un indicador de las dificultades para generar una reconversión cultural que aborde las conflictividades territoriales en un marco o una esfera ética en la cual se puedan tratar las tensiones desde relaciones cívicas y democráticas.

"Para nosotras sigue siendo lo mismo, nos da mucho miedo dejar salir a las muchachas solas, incluso nos da más miedo ahora, porque nosotras tenemos historias de abusos que cometieron los militares, para nosotras ellos son unos bandidos, pero no solo fueron ellos, las FARC el ELN y los paras, también abusaron de mujeres en Arauca, eso todo el mundo lo sabe, y nadie ha pagado cárcel, eso quedo así, como si nada".

Lideresa en Arauca.

El temor al abuso sexual persiste en los corredores de las antiguas ZVTN hoy ETCR, aunque no es un problema visible en tanto no se denuncia de manera sistemática y permanente. Hay sensación de desprotección y falta de garantías de las mujeres para ejercer el derecho al libre desplazamiento por el territorio. Es importante que en muchas de las regiones se encontraron mecanismos de encuentro entre excombatientes mujeres y mujeres de organizaciones y comunidades que vienen haciendo experiencias de reencuentro y de visibilización de las problemáticas de discriminación por género, aspectos entre los que se encuentra la seguridad y el fomento de una campaña sostenida de no violencia contra las mujeres y las orientaciones sociales diversas.

"Las mujeres no debemos andar por allí y menos tarde, nosotras corremos mucho peligro, no solo es por los robos, acá están desatados los violadores y degenerados, eso antes tenía un castigo de verdad, pero ahora las que más peligro corren son las niñas, ¿ustedes si escucharon lo del profesor allí en Cartagena? ¡Qué tal la porquería esa! Manoseando y violando estudiantes".

Testimonio lideresa Montañita.

En el contexto de la percepción de inseguridad muy arraigada en los territorios es muy ponderada la sensibilidad respecto a la vulneración persistente de los derechos sexuales y reproductivos en contra de mujeres adultas, niñas y adolescentes. Además, hay reclamos de muchas mujeres por la impunidad en casos de violencia sexual que se espera disminuyan en el posconflicto y hay iniciativas de documentación y apoyo psicosocial de las víctimas.

"Usted ve las peladitas el domingo allí en el parque, fumando marihuana o ese perico y dejándose tocar por cualquier peso, eso no se veía antes, de algún modo los muchachos cumplían con las reglas de las FARC; ahora



Tumaco - Nariño 2017

estamos buscando organizar alguna alternativa desde las mujeres para que eso no se nos salga de las manos”.

Testimonio habitante de Planadas.

“Usted ve mujeres venezolanas hermosas, que entre sus actividades de rebusque esta la prostitución, lo que a uno le da muchísimo pesar es que muchas son niñas, no tendrán 15 años”.

Testimonio habitante de Arauca.

Los derechos sexuales y reproductivos no sólo están siendo vulnerados con modalidades que producen temor y nuevas víctimas de violencia sexual, sino que la presencia de nuevos actores y nuevas dinámicas están incentivando la prostitución, la incorporación a grupos armados y la trata de personas, especialmente con menores de edad. Sobre este asunto se encuentran campañas institucionales del Ministerio Público y de instancias sociales de municipios y departamentos; el problema es que se quedan en mera información y no hay acciones preventivas disuasivas y de abordaje alternativo de espacios y poblaciones que están en riesgo y/o han sido vulneradas.

5.3.2 Liderazgo social en riesgo de victimización.

Lo más afectado que se ha encontrado en los territorios en este periodo pos acuerdos ha sido el conjunto de liderazgos sociales en los territorios, no solo por amenazas y asesinatos, también por el constreñimiento, el silenciamiento y la falta de interlocución.

“Desde principios del año cuando inició la implementación de los Acuerdos, en Tumaco se vive la manifestación más representativa de la protesta social relacionada con la implementación de los acuerdos. Cuando empezó, se realizaron bloqueos sobre la vía al mar de Nariño y la protagonizaron cultivadores de coca que se oponían a la erradicación forzada tras la firma de acuerdos de sustitución voluntaria, aquí el gobierno Nacional y las FARC, dijeron que Tumaco sería territorio piloto para iniciar los PNIS, durante las protestas la fuerza pública de nuevo se excedió en el uso de la violencia hacia los manifestantes”.

Notas diario de campo corredor Pacífico sur.

La relación de las comunidades y sus liderazgos con la fuerza pública tiene una tradición de tensiones y cooperaciones complejas en el marco del conflicto. Ahora se vivencian desplazamientos y retos inimaginados en ese campo, pues fácilmente se pueden desprender transformaciones progresivas en esa relación o generarse nuevos episodios de ruptura y resquemor de las comunidades. Estamos ante lo que estrictamente se puede denominar como un momento de posibilidades transicionales, pero el campo de la seguridad se puede mover solo en la media en que cada agente social e institucional contribuya a un proceso de cooperación con altas exigencias en la comunicación y la concertación.

“Quién puede creer en ellos, si ellos llegan es acompañando a las empresas y se enfrentan con los indígenas como si fuéramos un actor armado o peor, uno siente, se lo digo con el corazón en la mano, que la guerra con las FARC acabó, pero ahora empieza de manera más directa contra las comunidades étnicas ancestrales, en este año ya han asesinado a casi 30 comuneros para nosotros la fuerza pública no es garantías de protección y seguridad”.

Líder indígena Norte del Cauca.

Durante el año de implementación en diferentes regiones del país ha existido un número significativo de manifestaciones y protestas sociales muchas de ellas motivadas en el cumplimiento del Acuerdo de paz y de los pactos de implementación en los territorios. Dichas protestas han terminado en enfrentamientos entre la población civil y la fuerza pública, lo cual no solo muestra la falta de una práctica garantista de derechos en la actuación gubernamental sino que al generar nuevas víctimas, profundiza la desconfianza frente a la capacidad para implementar el Acuerdo de una forma que devuelva confianza en el Estado social de derecho.

“Nosotros hemos tenido voluntad política, nos hemos sentado hasta con el Gobernador y el alcalde de acá -de Segovia- para hacer la formalización, de verdad uno no entiende cuando estando metido en hacer tanto papeleo y voltee y voltee lo terminen señalando de ser un delincuente o un guerrillero, porque eso fue lo que dijeron, que éramos del ELN y del Clan del Golfo al mismo tiempo, todo para justificar el trato que dieron a las protestas de julio, hasta a un pelao mataron”.

Líder organización Minera Antioquia.

Problemas como la estigmatización que persiste sobre los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos ponen en evidencia el relacionamiento violento y autoritario con que se están abordando las conflictividades presentes en los territorios. Específicamente la lógica de las estigmatizaciones es un caldo de cultivo fructífero para generar nuevos ciclos de violencia, en buena medida el rumor, la falta de información pertinente y de canales de comunicación directas entre autoridades y comunidades son asuntos que avivan los escenarios de impacto humanitario que se sostiene en varias regiones, en detrimento de la integridad y la vida de las comunidades, sus organizaciones y líderes.

“¿Bajo los intereses de quién se atenta contra la vida de quienes defienden el medioambiente y los bienes comunes? nosotros luchamos por defender algo que es de todos y sin lo que no podríamos tener vida, uno no señala a nadie, pero tiene que haber un responsable y uno exige que se investiguen a las empresas, pero el Estado no hace nada, ¿uno en quién puede creer?”

Testimonio líder ambientalista corredor Pacífico Andino.

“De todas las plataformas a los que más amenazan es a los líderes ambientalistas sobre todo a raíz de las consultas populares para impedir proyectos mineros como el de CAJAMARCA”.

Funcionario defensoría del Pueblo Corredor Tolima.

En lo observado durante este periodo también se evidencia que las poblaciones y líderes con mayores riesgos sobre la seguridad, la vida y la permanencia en los territorios son las comunidades étnicas ancestrales que impulsan la defensa del medioambiente, del territorio y de condiciones de equidad en el desarrollo local; en esa dinámica se observan que la organización de los victimarios recurre tanto a grupos establecidos con siglas y con tradición y presencia robusta en los territorios, como grupos pequeños e informales de sicariato que aparecen y desaparecen fácilmente en la esfera local y que operan como redes periféricas de los grupos más arraigados en formaciones armadas permanentes.

“Uno siempre está esperando que lleguen el mensaje de texto o el panfleto, y pues más por estos días hemos decidido apoyar de frente la implementación de los Acuerdos, nos señalan de ser de las FARC, aunque realmente acá todo el que se meta con ese tema de los PNIS se está ganando problemas. Unos porque los cultivadores se sienten engañados por los líderes de las JAC que nos pusimos a ayudar a organizar las listas de los que podían entrar en el programa y entonces la gente por acá todo ha aprendido a hacerlo es a las malas y otros porque los dueños del cultivo los quieren rociar”.

Líder social del Cauca.

Otra de las razones que ha generado riesgo para la seguridad e integridad de los líderes sociales está relacionada con la mediación respecto a la sustitución de cultivos, dado que hay una cadena compleja de actores involucrados y las medidas de interlocución gubernamental no han sido claras, las victimizaciones emergen en varios frentes de esos procesos: en el mal mane-

jo del control de la protesta social, en los incumplimientos frente a los acordados, como el respeto por la voluntad en procesos de sustitución de cultivos, en el control territorial de los grupos de mafias, en el enfrentamiento entre los grupos de seguridad, en los ajustes de cuentas entre grupos, en el desplazamiento de comunidades, en el despojo y en el asesinato.

“El señor no era reclamante, él era presidente de la Junta pero le gustaba ayudar a la gente, usted sabe que muchas personas pa esas vueltas no son muy hábiles, entonces el colaboraba y se involucró en eso; ahí tiene...”

Testimonio habitante Corredor Caribe.

“Las amenazas han sido permanentes, y no pasa nada, se calman un tiempo los asesinatos y vuelven, yo ya estoy pensando en no seguir con eso, el gobierno nos dijo que estuviéramos tranquilos que nos garantizaban la seguridad pero eso no han sido sino palabras”.

Reclamante de Tierra Antioquia.

Otra de las situaciones que aporta a los riesgos sobre la seguridad y la vida durante el proceso de implementación de Acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las FARC es la restitución de tierra, que adquiere gran relevancia en los territorios, pues las expectativas de paz que se han generado incluyen la posibilidad de retorno sin la presencia del actor armado. Sin embargo durante el 2017 se han presentado asesinatos a reclamantes de tierras con patrones y métodos muy precisos de tipo selectivo y contrario a lo que muchas víctimas esperaban, los esfuerzos por dismantelar las organizaciones criminales que se oponen a la restitución de tierras no han brindado las garantías suficientes.

La amenaza y muerte de líderes es el principal factor de vulneración a los procesos de superación del conflicto armado, de enero de 2016 a agosto de 2017 han sido asesinados 101 líderes sociales y defensores de derechos humanos¹² y según la Defensoría del Pueblo 51 de estos crímenes ocurrieron entre enero y julio del presente año, es decir, hay un incremento aproximado del 31%, lo que significa que en promedio cada 3 días es asesinado un líder o defensor de derechos humanos en Colombia¹³. Los móviles que ponen el riesgo sobre la vida de los líderes y defensores se hacen bajo señalamientos diversos, sobre los cuales el oponerse a la sustitución de cultivos ilícitos, la defensa de los ecosistemas ambientales y por la restitución de tie-

12 Informe de Indepaz, Iepri-UN, Cinep/PPP, CCJ

13 Cálculos propios

rras, se encuentran los más relevantes.

5.4 Las Nuevas Tramas de Organización y Violencia.

“Vea una cosa son los muchachos siempre que se identifican y reconocen la gente y uno los reconoce y otra cosa es tipos extraños que de pronto comienza a controlar caminos de sorpresa, eso bandidos si no se pueden aceptar, esos son gente que no es de por aquí...”.

Poblador del Catatumbo, norte de Santander.

Es posible encontrar una fisonomía de los grupos armados que siguen generando violencia en los territorios, asociada a formaciones armadas grandes y con memoria sobre varios periodos de confrontación en los territorios, con articulaciones regionales e incluso nacionales que vienen de las desmovilizaciones de las autodefensas y los grupos paramilitares y que hoy funcionan más como redes o grupos federados que se comunican en torno a variadas carpetas criminales y localidades. Se destaca su presencia en el Urabá antioqueño, el Caribe colombiano y la región Pacífico.

“Pues ellos dicen que están en tregua, pero cada rato están presionando y como están por aquí no más sin mucho control, pues molestan porque si o porque no y ahí sigue ese problema, como poniéndose más difícil...”.

Poblador Medio Atrato

También se observan tramas de la tradición insurgente, ELN y EPL, que tienen arraigos en subregiones concretas y que en su lógica de control territorial producen confinamientos y victimizaciones en su afán por generar manejo poblacional y capacidad de fuego hacia las fuerzas institucionales. Estas estructuras no han estado en una operatividad ofensiva, sino más bien tratando de avanzar sobre los territorios dejados por las FARC y en disputa con las bandas criminales y grupos posdesmovilización; en esa dinámica han generado eventos dolorosos para comunidades indígenas y campesinas: sus áreas de influencia son principalmente de alcance regional en el nororiente, el suroccidente y el suroccidente del país.

“Aquí la amenaza no para, el boleteo y la presión sobre los muchachos y las niñas pa echarlos pal monte, eso no tiene control y ellos si conocen terreno; saben cómo salir y como entrar; aquí uno no sabe en qué momento eso se vuelve a prender con los que han quedado y se están reentrenando”.

Líder Cívico Charras Guaviare

Además se pueden observar las tramas de grupos posdesmovilización de las FARC que buscan reagruparse en torno a las economías ilegales de enclave y a la construcción de rutas de movilidad sin una marcada intencionalidad política. Su centro de operaciones se sitúa en mantener un gran corredor se perfila sobre el sur del país de tal manera que les permitiría mantener control de rentas ilegales y la influencia sobre zonas de desarrollo agroindustrial y minero en proceso de apertura.

Son tantos los nombre y los grupitos que van apareciendo que uno hasta se confunde; cualquier pendejo que no ha sido bien criado está cogiendo ahora de extorsionista y de timador, vea eso nos tiene cansados por aquí. Yo a eso no le veo salida rapido..

Poblador Norte del Cauca

En medio de esas tres fisonomías de agrupamiento y acción de los actores armados, existe una gran dispersión de micro organizaciones y redes que operan a nivel barrial, veredal, local, o subregional que tienen entrenamientos para el ejercicio de la violencia, portan armas las usan y/o están en capacidad de hacerlo en cualquier momento; estas pequeñas redes y estructuras están muy vinculadas a la informalidad rural y urbana, operan en muy diversas cadenas delictivas o están propensas o en riesgo de hacerlo. En ese contexto de movilización armada, se pueden identificar varios asuntos críticos; veámoslos.

5.4.1 Permanencia de actores armados.

Es claro que en la situación de inseguridad que se presenta en algunos territorios todos los actores armados producen confrontación violenta y generan victimización de distintas formas; el asunto es cuáles son los motivos que les movilizan y las posiciones de influencia que logran ejercer. Identificando ese asunto se pueden ver claves para la comprensión de la situación y para visualizar otros entornos y relacionamientos no violentos.

“Yo te digo una cosa, para nosotros esta experiencia no es nueva, el sur de Córdoba fue un escenario de concertación tanto con el EPL (años noventa), como con las AUC (década pasada). Y los reductos que quedaron de ellos, que luego les llamaron posdesmovilización, Bandas criminales, que Clan del Golfo y Urabeños (para nosotros es la misma friega), se quedaron haciendo sus diabluras por toda la zona saba-

nera, entonces ahora, se hace el proceso con las FARC y quedan también las disidencias y los reincorporados, ¿cierto? La pregunta es ¿Quién nos garantiza a nosotros que cuando se retire el mecanismo de seguridad del territorio sobre los
Espacios de Reincorporación no van a tomar represalias con la gente de la zona rural por haber sido escenario de dejación y reincorporación, como pasó en los procesos anteriores?”.

Líder social Sur de Córdoba.

Ninguno de los actores que hoy actúa en medio del proceso de dejación de armas de las FARC y de la implementación de los Acuerdos es nuevo en los territorios, ellos son parte de sagas armadas de amplia trayectoria; lo que sí está aconteciendo son reacomodos y mudanzas en relación con los espacios que ocupan y las formas de estar presentes; lo que hay es una disputa entre sí y con las fuerzas del Estado por el control militar del territorio que deviene en seguida en la expectativa de tener control armado y social sobre franjas regionales importantes. Con la salida de las FARC se extingue un actor armado hegemónico en muchos de los territorios, pero el régimen de guerra no cambia porque el Acuerdo lo busque o porque las comunidades lo quieran, sino porque se logra concertar la implementación del acuerdo en condiciones de probidad y transparencia.

“Ay, pues si eso se da sería lo mejor que nos podría pasar en esta zona de Antioquia, pero uno conociendo cómo han sido las cosas en Colombia uno no confía mucho en esa gente, los del Golfo o Gaitanistas o como sea, primero se fueron de acá del campo, dijeron que se habían desmovilizado y lo que hicieron fue irse a las ciudades, ahora volvieron al campo y están diciendo que se van a someter; yo lo único que puedo decir es que ojalá”.

Testimonio habitante de Carepa.

El Clan del Golfo uno de los grupos posdesmovilización que hasta el momento ha logrado mayor presencia e impacto de sus acciones ilegales asociadas a las lógicas mafiosas y de amenazas y asesinatos selectivos en todo el territorio nacional. En el último tiempo la organización delictiva expresó su voluntad para someterse a la justicia ante la fuerte persecución por parte de la fuerza pública, pero el proceso no tiene un horizonte claro de concreción. No obstante, esta dinámica en algún sentido significaría disminuir el riesgo de victimización de muchas poblaciones y el desgaste en términos de afectaciones a los tejidos territoriales en los cuales estos agentes se mueven.

“En el Alto Baudó, por ejemplo, hay disputas por el control de las rutas de acceso para el narcotráfico hacia la costa Pacífico, entre ellos y el ELN éstas han generado desplazamiento masivo hacia Catrú y Pie de Pató afectando de manera directa a comunidades indígenas del sector”.

Informe de Observación Chocó.

“En el Meta los lugareños mencionan extorsiones a ganaderos por parte del Clan del Golfo y en el Guaviare se reporta siembra de bombas explosivas atribuidas a bandas criminales para el control territorial y mantenimiento de los cultivos y donde ha resultado muerto un policía miembro de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural”.

Informe de Observación Centro Oriente.

En el período de implementación del Acuerdo se avanza en disminuir los enfrentamientos armados entre fuerzas combatientes, pero producto de la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo o los Gaitanistas se ha obligado a población a abandonar sus territorios y en muchas zonas hay confinamiento por campos minados y por desplazamientos explícitamente generados por amenazas a las poblaciones. Es decir que las poblaciones, las comunidades mantienen riesgos y situaciones en las cuales, como en las décadas anteriores, se viven angustias y sufrimientos sociales producto del accionar de los grupos armados que persisten.

“Ahora se pusieron de Moda los celulares Flecha, así le dicen los lugareños a uno, ya que al parecer hay una orden dictada por Bandas Criminales en la que queda prohibido utilizar celulares de alta Gama con Cámara de video o fotografía, así que tuve que guardar el equipo y recorrer la vereda con lápiz y papel”

Notas Campo Norte de Santander.

La intervención militar que ejercen los grupos emplean para su permanencia en los territorios sistemas de símbolos y gestos de habitualidad que buscan naturalizar de manera consuetudinarias prácticas violentas de control social, basadas en la exhibición de la capacidad de fuego y en la demostración de accionar letal que inciden sobre las libertades de los pobladores, lo que representa un verdadero obstáculo para la seguridad humana y la superación del conflicto.

No obstante es importante mencionar que estas organizaciones han recibido duros golpes en el transcurso de este año; en la operación “Aga-

menón II” creada para perseguir y desmantelar al Clan del Golfo, se dio de baja a Roberto Vargas Gutiérrez, alias el Gavilán, segundo al mando de esta organización y quien en meses anteriores habría dado inicio al llamado “plan pistola” (El país, 31 agosto de 2017) De igual forma les fue incautados el que podría ser el laboratorio más grande de esta Organización delictiva (Caracol radio, 21 de octubre de 2017) y 13,4 toneladas de cocaína empacada y lista para exportar (Semana, 12 de noviembre de 2017). A pesar de esas noticias, el cuadro observado indica que los cuerpos armados de estas estructuras criminales en esencia siguen vivos y en operación.

5.4.2. Las disidencias mantienen el clima de conflicto.

“Lo que pasa es que a uno no pueden venir y decirle que son las disidencias y que son las FARC así como así, uno los conoce hace mucho y uno sabe cómo es que ellos van a cobrar y esas cosas”.

Testimonio Poblador rural Guaviare.

“Mucha gente está preocupada por las disidencias, sobre todo en la Unión Peneya, en esta vereda se sigue sintiendo en extorsiones y cobros de vacunas”

Entrevista Funcionario de la alcaldía de La Montañita.

Una de las situaciones más preocupantes para las comunidades de los corredores donde se adelanta el proceso de reincorporación es la presencia y acción delictiva de las disidencias, que es hablado en tonos bajos en las comunidades, en la medida en que son parte de una fuerza que ha dejado las armas y que conocen muy bien los sistemas de vida de las comunidades, lo cual les da ventajas comparativas al momento de mantener control armado sobre los territorios. En este problema se evidencia ausencia de medidas de protección colectiva para las comunidades.

“La visita a Colinas fue bastante corta porque cuando llegamos al Capricho, la vereda más cercana, habían detonado una bomba hacia solo 30 minutos, aun había romería alrededor del lugar, una casa que sirve de residencia en el segundo piso y en el primero es una pequeña cafetería. Según nos contaron resultaron 3 civiles heridos y dos miembros del ejército los hechos fueron atribuidos a la disidencia de séptimo frente de las FARC, este día estaba programada una reunión para socializar PNIS”.

Informe de visita Observación Guaviare.

La dinámica de la disidencia está centrada en reagrupar y reclutar fuerzas para mantener control sobre territorios, poblaciones y sobre actividades productivas legales e ilegales; solo en algunos casos motivados por esos propósitos confrontan con las fuerzas del Estado; la tendencia es a fortalecer sus grupos y a sostener un régimen de guerra en los territorios que les es funcional. Sin embargo también se evidencia que en algunos casos estos grupos gozan de la favorabilidad en sectores de las comunidades que, bajo el temor o la idea de protección, les otorgan; además para ellas, resulta más fácil identificar su accionar y posicionamiento, en la medida en que también son conocidos por la población y han tenido históricamente relacionamiento con ellas.

“Entre la gente se escuchaba que es mejor no hablar con nadie o que mejor era irse, otros miembros de la comunidad dicen que son respuestas a los golpes que la fuerza pública le ha dado a la disidencia, incluso hubo quienes dijeron que se trataba de celos porque la policía y los excombatientes ahora tienen buena relación y otros hablaron de que el ataque se debe a que la policía está ubicada en una escuela y la disidencia señala esta acción como violación al DIH”.

Informe de visita Observación Guaviare.

A un año de iniciado el proceso de implementación de los acuerdos, puede ser especulativo el número de disidentes del proceso adelantado con las FARC; lo cierto es que en los territorios comienza a tener una fisonomía propia y tiene un efecto de victimización muy complejo sobre la seguridad de los excombatientes, sus familiares, las comunidades de los corredores de transición y sobre los entornos regionales. La situación más visible es la presión de estas estructuras por mantener parte de la base social de la fuerza que dejó las armas, especialmente sobre grupos milicianos que no entraron en los inventarios del proceso y que solo verían beneficios en la medida en que se concreten los planes de implementación dirigidos a las comunidades, pero estos asuntos están fluyendo de manera muy lenta. En la medida en que crezcan los grupos aun incipientes se mantiene lo que ellos han definido como “resistencia” y que en términos concretos significa levantamiento contra el Estado, constreñimiento y desplazamiento a las comunidades, potencialización de economías criminales, victimización.

5.4.3 Reclutamiento forzado una práctica persistente en todos los grupos armados ilegales.

En las observaciones realizadas todos los actores que se mantienen en armas tienen como una de sus principales tareas hacer crecer los grupos armados para lograr tener capacidad de controlar territorios; en ese contexto la tareas más callada pero más grande la dedican a cooptar poblaciones, reclutar civiles y generar procesos acelerados de entrenamiento y reentrenamiento; si esa saga no se interviene estamos asistiendo al involucramiento de una nueva generación en confrontaciones armadas de nuevo tipo que en el corto plazo configurarían nuevas ofensivas y una crisis humanitaria que ya está latente.

“Ha habido nuevos reclutamientos, la estrategia es usar a mujeres como carnada para enamorar a los jóvenes adolescentes y después amenazarlos con asesinar a su familia, en otros casos les hacen promesas de trabajo donde les van a pagar muy bien, el asunto es que son muchachos muy jóvenes y algunos son huérfanos”

Testimonio líder Guaviare.

“Los del ELN se han llevado niños hasta de 10 años, a uno realmente le da mucho miedo porque esos peladitos matan por probar y no les da miedo nada”.

Testimonio habitante del Chocó.

“Acá se valen de todo para convencer a los muchachos que se pongan a trabajar con esas porquerías, les dan plata y como muchos son tan pobres y desorientados, pues los muchachos terminan en ese tema, allí metidos con los que eran antes rastrojo”.

Líder Comunitaria Corredor Pacífico Sur.

Aunque el reclutamiento forzado ha disminuido en relación con el actor que ha dejado las armas, hoy es una práctica más radicalizada y extendida de los grupos armados ilegales que siguen operando. En territorios como Guaviare, Meta y Caquetá con mayor presencia de las disidencias, han continuado realizando este flagelo para sostener una nueva agenda de dominio sobre las zonas, al igual que la guerrilla del ELN en el Chocó; este problema pone en riesgo principalmente a menores de edad de ambos sexos, y no es exclusivo de los territorios rurales. En el corredor Pacífico Sur se reportan casos de reclutamiento de menores por bandas criminales en zonas urbanas, que se valen de diferentes maneras de manipulación y amenazas para hacer partícipes de sus grupos a la población vulnerable.

“El ELN es de antigua presencia en el Chocó, pero no en los municipios que este año dejó libres la FARC, dominaban en el Baudó, el alto Atrato y el San Juan, ahora se les encuentra dispersos por todo el territorio, la fuerza pública sostiene que no son numerosos, pero su accionar belicoso se siente en muchas zonas del departamento, donde siembran minas antipersona y crecen a partir de reclutamiento de menores de edad, situación que afecta en diversas medidas a comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas”.

Informe de observación Chocó.

La tendencia es que la población adolescente y joven es vinculada a partir de la motivación del manejo de dinero, vehículos y armas, y que las áreas donde más se concentra el reclutamiento es en los centros educativos rurales y sitios de encuentro social y deportivo a nivel suburbano. No se encontró una tentativa de prevención y respuesta visible a la situación en ninguno de los sitios visitados; es posible afirmar que la población de mayor urgencia a involucrar en estos procesos es la infancia y la juventud, y sus familias; en la medida en que es la que está siendo directamente afectada. En medio del silencio muchas familias y familiares son quienes plantean casi que en secreto escenas críticas y dolorosas del reclutamiento que casi siempre llega inesperadamente, marcado por la seducción de las armas, del dinero y la falta de horizontes y oportunidades en el campo y las zonas deprimidas de pueblos y ciudades.

5.5 Síntesis Sobre Seguridad y Violencia.

Detrás de la gestión de la seguridad y de las demandas de la población ante la crítica situación de inseguridad y violencia en algunas áreas, así como la latencia y riesgo en la mayoría de los territorios observados, se encuentra la dificultad para establecer lenguajes compartidos, gramáticas morales y mecanismos de comunicación que se orienten a resignificar la violencia, a desnaturalizar el arma, a des familiarizar la exclusión y la agresividad contenida en los entornos cotidianos y en las prácticas rutinarias. A nuestro pesar se evidencia la incorporación de nuevos contingentes de población en la continuidad de unas violencias dispersas que son más difíciles de reconocer e intervenir; asunto que cuestiona no solo a las instituciones sino también a las comunidades y a los tejidos locales y regionales de sociedad. Veamos los rasgos sintéticamente.

- A los territorios dejados por las FARC han llegado otros grupos o se ha incrementado su hegemonía sobre el control de los negocios ilícitos de grupos que ya hacían presencia, entre las acciones delictivas existen casos donde el control sobre los territorios lo están ejerciendo mediante siembra de minas antipersona, lo que incrementa el temor y el confinamiento de comunidades.

- Las diferentes organizaciones delictivas que controlan, tanto el narcotráfico como la minería ilegal, han establecido ejércitos que se dedican a la protección y agenciamiento de la estructura delictiva por medio de la violencia, colocando a las comunidades que habitan éstos territorios en medio de las disputas por la permanencia, sin que se logre establecer rápidamente por parte del Estado, estrategias que desmantelen la práctica criminal y al tiempo protejan la vida en las áreas más afectadas.

- Las fronteras colombianas son territorios que atraen agentes de negocios criminales desde siempre; sin embargo en este periodo se presentan situaciones externas e internas, algunas de ellas asociadas a la transformación de la geopolítica del conflicto armado que se está dando, en las cuales la violación a los derechos humanos a poblaciones de diferente nacionalidad hace parte de la cotidianidad y persiste la ausencia de controles y la inseguridad.

- El comercio de armas y la militarización cotidiana son base de grandes riesgos en las zonas de conflicto y esta dinámica no para de crecer en términos de las redes informales y de demandas de diversos actores sociales, motivados por la defensa de propiedades y comunidades o por la disposición a vincularse a actividades productivas de carácter ilícito.

- Persiste y crece la estigmatización sobre las comunidades rurales, étnicas y campesinas, en las cuales se desarrolló el conflicto. Esta circunstancia en no pocas ocasiones es el móvil de delictivos procesos de victimización entre los cuales resalta la obstrucción a la movilidad, la amenaza y el asesinato entre otros aspectos.

- La amenaza y muerte de líderes es el principal factor de vulneración a los procesos de superación del conflicto armado y no se observa frente a ello una respuesta integral y operativa por parte del Estado en su conjunto en el primer año de la implementación. El cuello de botella en este

asunto radica en la fragilidad entre los procesos de control de orden público, de funcionamiento policivo, de mecanismos de prevención social y de investigación judicial y operación de la justicia con probidad y transparencia.

- Las poblaciones que presentan mayor situación de riesgo a la vulneración del derecho a la vida corresponden a comunidades indígenas y afrocolombianos, en la medida en que su reivindicación de la diversidad de modos de vida y de la autonomía en sus territorios, es confrontada con la violencia por parte de los actores armados

- La presencia de las fuerzas armadas y de la policía no logran generar, transmitir un ambiente de tranquilidad y respeto a los derechos humanos en gran cantidad de las zonas de transición, por el contrario situaciones repetidas en las cuales se presenta el uso desmedido de la fuerza incrementa los niveles de desconfianza de las poblaciones civiles hacia ellos como agentes públicos.

- Hay sectores de las bandas criminales que han expresado su voluntad de someterse a la justicia, pero hay también proceso de reconfiguración de estas estructuras asociadas con grupos armados que operan en micro redes locales, buscando sostener y ampliar las economías y las rentas ilegales.

- El reclutamiento de civiles, particularmente de menores de edad continúa en ritmos menores, pero sostenidos en territorios urbanos y rurales. Esta delicada circunstancia puede estar sustentando nuevos escenarios de crisis humanitarias, de ofensivas armadas sobre las poblaciones y de victimización de las comunidades.

- Las estructuras armadas, tanto grupos insurgentes, como bandas criminales y grupos de seguridad privada ilegales, sostiene posiciones estratégicas en los territorios de transición y movilizan gran capacidad de afectación de vidas locales y regionales. Se observa que se van delineando nuevos corredores estratégicos de guerra que se superponen sobre el viejo mapa del conflicto. Este asunto emergente es de gran preocupación respecto a una dimensión de seguridad de las poblaciones y de soberanía sobre el territorio.



BUENAVISTA - JULIO 2017

6

**CONDICIONES, GARANTÍAS A
MANERA DE
RECOMENDACIONES Y
LLAMADOS**

En el recorrido por los contextos locales y regionales de la implementación de los Acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC para poner fin al conflicto armado es posible visualizar las tensiones que impiden romper con la lógica histórica de una sociedad fracturada en su vida económica y cultural, y afectada por la captura y desviación del sentido de justicia de las instituciones gubernamentales. Particularmente se observa la capacidad de mutación y de arraigo de estas inercias en la vida de las regiones y la resistencia que plantean frente a políticas que buscan sentidos de reparación, rectificación y transformación de los tejidos afectados por la guerra. Dichas tensiones se pueden visualizar desde diversas modalidades regionales y locales, pero comportan algunos patrones comunes que son tendencia en el mediano plazo y que por lo tanto constituyen una clave para la comprensión de las realidades actuales y para el diseño de escenarios alternativos. Veamos cuáles son:

6.1. Sobre los Territorios y Comunidades.

Hay en el contexto de la implementación una disputa desigual entre el sistema liberal de generación de empresa y la opción cooperativa que se expresa desde pequeños grupos en las economías regionales. La sostenibilidad de las actividades productivas depende del tipo de regulación y del papel del Estado, pero, en la implementación de los Acuerdos, existen desequilibrios prácticos entre esas dos perspectivas lo que genera que el posible fomento económico favorezca especialmente los macro emprendimientos globales, sobre las iniciativas más locales.

Los agentes principales de las economías locales buscan generar mecanismos asociativos y cooperativos para acceder en condiciones de equilibrio al mercado productivo. Crecen actividades informales y nuevos enclaves de comercio asociados a la nueva movilidad y a la emergencia de nuevos asentamientos humanos que posibilita la implementación de los Acuerdos. En el territorio se observa la búsqueda de consensos y el manejo de vínculos entre diversas reglas y sistemas para generar productividad en el nuevo contexto de posacuerdo. Los agentes poseedores de capitales proceden a asegurar patrimonios, así como a legalizar y a generar bancarización de bienes mediante procesos y medidas econométricas para potenciar la capacidad de créditos públicos y privados en las regiones. Igualmente se visibiliza y se exagera en este período la lucha legal e ilegal por la posesión, formalización y apropiación de la tierra como factor productivo, de uso y propiedad.

En todos los territorios donde hoy se busca superar el conflicto se aumentan las dinámicas de exploración minero energética y la gestión de balances de ecosistemas para volverlos recursos naturales.

Estos emprendimientos se estructuran a partir de operaciones transnacionales, medianas iniciativas de arraigo regional y actividades informales de carácter local; ninguna de las cuales observan suficiente control y/o legalización.

En ese mismo sentido crecen, se transforman y se movilizan de unos territorios a otros las dinámicas de siembra de cultivos ilícitos y las redes de producción y tráfico de cocaína. Se amplían también las redes de narcotráfico, microtráfico y control criminal de territorios urbanos, suburbanos y rurales. La informalidad social genera sobreoferta de población disponible para la actividad ilegal y criminal en campos y ciudades. El mercado interno asociado al hurto y al microtráfico y narco menudeo ha crecido en centros poblados y grandes ciudades.

En medio de los reajustes de las economías legales e ilegales, en todos los territorios observados se expresan de manera dispersa movimientos de opinión pública relacionados con la necesidad de agendar mayor participación, reconocimiento e inclusión social en la generación de oportunidades de paz, especialmente frente a procesos ligados a la sustitución de cultivos, los PDET y la reparación a las víctimas.

En los diversos corredores se concentra una dinámica de movilización social frente a la erradicación de cultivos, que en unos casos busca mejores condiciones para la sustitución voluntaria y en otros la defensa de los cultivos y la continuidad del negocio; este acontecer ha generado varias situaciones de victimización de poblaciones, líderes sociales y comunidades.

El cese al fuego bilateral con el ELN, que tiene muchas dudas sobre su cumplimiento en los territorios de conflicto, ha generado algunos entornos de posibilidad para una dinámica de diálogo social y de desescalamiento del conflicto; sin embargo, se mantiene de una manera tensa en la medida en que los otros asuntos de la mesa de negociaciones no se visualizan formas de avance claras.

En este período de posacuerdo, las fronteras que históricamente han albergado tensiones ligadas al conflicto armado, también por efectos de las coyunturas internacionales y binacionales, son generadoras de una gran cantidad de eventos de victimización y de apertura de frentes de inseguridad y violencia alimentados por empresas criminales que tiene efectos humanitarios en todo el territorio nacional.

La circulación ilegal de armas se sostiene y los controles de la misma no son eficaces redundando en la disponibilidad de armas para el ejercicio de la violencia en todo el territorio, especialmente a través de la actividad sicarial como factor de ajuste

de cuentas en la ilegalidad de micronegocios y controles territoriales. En el ámbito de la seguridad privada también crecen los cuerpos armados resaltando una particular relación con el control de tierras en disputa y de centros y redes productivas como minas y grandes plantaciones agroindustriales y ganaderas. Lo preocupante de estas dinámicas tan diferentes entre sí, es que se encuentran en el fomento del armamentismo y en la disposición a la defensa y al uso de la violencia.

En esos escenarios, donde se sostienen desconfianzas y escepticismos, se reconfiguran prácticas criminales que afectan la vida cotidiana y doméstica de las comunidades, especialmente el aumento de otras modalidades delictivas como la extorsión, el robo continuado y el contrabando, entre otros.

6.2 Sobre Líderes y las Organizaciones Sociales.

En las regiones se observan diversas dinámicas de movilización y de acción de movimientos sociales en clave de resistencia a la violencia y de defensa de la vida en los territorios en el contexto de los Acuerdos; en medio de esas expresiones existen tensiones interculturales y comunitarias por el entorno de victimización y por la comprensión y uso de los territorios y los bienes comunes.

Las comunidades tienen plataformas, planes, programas, proyectos para la habitabilidad de sus espacios y tienen esbozadas demandas de acceso a oportunidades y reparaciones materiales para víctimas individuales y colectivas afectadas por la confrontación armada; la mayoría de ellas muy locales y de alcances comunitarios; sin embargo, la lentitud en la gestión legislativa y gubernativa, y la dificultad para entenderse con los protocolos y las matrices de planificación que movilizan las instituciones no permiten observar avances significativos desde los tejidos sociales.

Los movimientos sociales tienen en algunos casos alcances territoriales regionales y subregionales, pero están muy afectados por luchas de poder interno y por disputas en torno a la orientación política y a la distribución de los beneficios económicos de las plataformas. También sucede en los niveles más locales que el interés desbordado por los recursos de la implementación genera fracturas en los tejidos sociales y organizativos de primer y segundo nivel y entre expresiones informales y formales de las organizaciones de base.

La violencia y la lógica del despojo afectan profundamente la estabilidad y el desarrollo estratégico de las organizaciones y los movimientos sociales que en muchos casos se afianza en posiciones conservacionistas, de resistencia y sobrevivencia, que enfrentan poderes armados de gran poder económico y político, muchos de los cuales usan

centralmente la exclusión y el constreñimiento a los liderazgos organizativos; en esos pulsos recurrentes la integralidad de los esfuerzos tiende a reducirse a lógicas simples de comunicación y gestión de la subsistencia.

En los territorios donde se da la transición del conflicto armado hacia la reconciliación, existen necesidades y demandas de formación y actualización de los agentes organizativos, los programas que existen tienen en algunos casos exceso de formalización y llegan escasamente a cúpulas y núcleos asesores. La circulación de conocimientos, saberes e informaciones respecto a los territorios y a los grupos humanos y sus atributos culturales son muy limitados, fragmentados en cada expresión de comunidad y casi que de usos privados.

Existen búsquedas alternativas para la coexistencia pacífica, sin embargo, la tendencia a la agresividad y a la resolución de los conflictos, mediada por la violencia y las armas está encarnada en los entornos locales y regionales; al punto que los dispositivos y lenguajes de violencia están muy naturalizados y demandan esfuerzos institucionales y sociales permanentes y sostenidos en el tiempo.

En muchos casos los asuntos de la identidad y el lenguaje común están en disputa entre las lógicas tradicionales y las lógicas modernas (modernizantes), lo cual produce la tendencia a cierto conservadurismo programático y al desconocimiento de agentes y propuestas que fácilmente quedan atrapadas en estigmas y estereotipos. En algunas tramas organizativas prima la lógica del empirismo y de la sobrevivencia, el individualismo y el gregarismo organizacional y los enlaces de relevo generacional están cortados.

Hay una gran cantidad de agencias internacionales en la orientación programática de las acciones sociales a través del financiamiento y el apoyo técnico. Las organizaciones sociales en muchos casos son subsidiarias de las empresas y políticas públicas, y cada vez en mayor medida de las inversiones de responsabilidad social de las empresas privadas. El modelo de ONG subsidiaria del Estado y en particular de las gestiones clientelares de recursos se generaliza en extendidas zonas.

Es repetitivo que las economías y empresas criminales buscan seducir o constreñir a la población y a sus organizaciones para que convivan y cohonesten con sus agencias particulares mediante sofisticados mecanismos de corrupción. Las tácticas de sobrevivencia de las organizaciones implican procesos de adaptación a los actores legales e ilegales que llegan a los territorios. La lógica de poderes políticos mafiosos afecta las autonomías de los tejidos de organización social en todos los niveles, generando particularmente inestabilidad en razón de amenazas a líderes y fracturas en su cultura democrática común.

En muchos momentos de la implementación no se abordan adecuadamente los mecanismos del diálogo y por esa vía se corre el riesgo de sacrificar el sentido de pluralismo y de reconciliación; el manejo de los espacios, la definición de los tiempos, la construcción de convocatorias, la inclusión de agentes son detalles de carácter técnico, pero que tienen gran trascendencia porque en ellos está en juego la posibilidad del diálogo y la concertación.

Según el sentir de las organizaciones afro e indígenas, la implementación tiene un enfoque diferencial y territorial indispensable que no está siendo suficientemente salvaguardado; en este sentido el desarrollo del Capítulo Étnico de los Acuerdos de La Habana es la principal expectativa de los líderes de esas comunidades.

6.3 Sobre la Dinámica Política en el Posacuerdo.

Desde el punto de vista del ejercicio político es posible observar en el contexto del posacuerdo un proceso de reconfiguración de las matrices, estructuras y dinámicas del clientelismo local, regional y nacional que enfrentan la posibilidad de una democratización a instancias de la implementación los Acuerdos. Veamos algunos rasgos:

En la cotidianidad de las regiones se replica el debate sobre los alcances de la JEP y del conjunto de los Acuerdos, respecto a las correlaciones de poder económico, social y político en el futuro inmediato y sobre condiciones de seguridad jurídica y económica de los poderes regionales que han intervenido en el conflicto a veces de manera indirecta y otras directamente.

Por el riesgo jurídico y socioeconómico que les representa, sectores de los estamentos políticos que se oponen a la JEP y a la implementación en general, despliegan posiciones y mantienen campañas sostenidas en torno a la inconveniencia total o parcial de la implementación en los entornos locales y en las interlocuciones institucionales y sociales. En medio de una grave crisis por los escándalos de corrupción los poderes de más arraigo clientelar se posicionan como agentes adversos al arranque del mecanismo de JEP.

Desde un punto de vista más formal en las regiones, los partidos y movimientos políticos establecen estrategias que alinderan en darle énfasis a la paz y/o a la corrupción, de cara a las elecciones que decidirán la gobernabilidad en los próximos años, estableciendo correlaciones muy disímiles entre estas dos banderas. Alrededor de esos linderos se estructuran las nuevas alianzas y coaliciones políticas para disputar desde lo local y regional por el próximo periodo de gobierno nacional. Esta dinámica está centrada en una combinación muy diversa y amplia de las relaciones entre las ideas de paz, justicia, democracia y corrupción.

En el marco del proceso electoral, las casas políticas locales y regionales que agrupan agentes mediadores y activistas de microempresas políticas generan dinámicas de cooptación de las poblaciones y sus liderazgos por puestos burocráticos, proyectos, recursos económicos y hasta eventos sociales. En esa dinámica la paz es usada a la vez como promesa de materializaciones de bienes y servicios que llegarán a las localidades por gestiones de la clientela respectiva y/o como generación de tensión programática en relación con el apoyo o rechazo a los Acuerdos.

Las principales estrategias al respecto se remiten al control político de Juntas Comunales, asociaciones filantrópicas, de beneficencia y de gestión social que se concretan en beneficios materiales y se alejan de la perceptiva de derechos y ciudadanía. Las familias, asentamientos y comunidades más vulnerables y necesitadas (en muchos casos subsidiadas o aspirantes a subsidios) son los principales focos de intervención política en función de transacciones materiales.

Los grupos armados que agencian ampliación del control territorial mantienen injerencia en los poderes locales y en las decisiones políticas de las comunidades, por la vía del control territorial, el confinamiento y las amenazas y extorsiones principalmente, aunque también se reportan situación de adhesión voluntaria.

Entre los pobladores de las zonas de reincorporación y en los corredores de transición se considera que la garantía del ejercicio político de la FARC depende de quien gane la presidencia y de la configuración del nuevo Congreso de la República. El nuevo partido de la FARC surge con un bajo perfil, instalándose apenas en unas dinámicas locales y regionales de manera muy tímida; en el plano nacional hay fuertes cuestionamientos a su participación en política mientras no se someta a la JEP.

Las FARC mantiene una agenda entorno a la implementación de los Acuerdos como su prioridad, en medio de la cual activa una disputa por mantener interlocución con organizaciones de la zona rural y abriendo espacios de diálogo político regional para alianzas electorales en torno a propuesta de paz.

Los obstáculos y retrasos en la normatividad para las Circunscripciones Especiales de Paz han sido percibidos en las regiones como una estrategia para negar la participación real y efectiva de las comunidades que han habitado escenarios del conflicto. A pesar del limbo jurídico en torno a las Circunscripciones Especiales de Paz se alcanzaron a agenciar candidaturas dispersas e incipientes. Muchos líderes involucrados en la dinámica política no tenían las claridades suficientes sobre los



Buenavista - Meta 2017

mecanismos y posibilidades veraces de participar, lo cual generó roces en el liderazgo local.

En ese marco, durante el proceso de observación se reportó la prevención de actores políticos (partidos y movimientos regionales) quienes consideran que las curules en el Congreso, proyectadas para las comunidades y víctimas que habitan los territorios de transición, pueden ser cooptadas por las FARC, otros tenían temor de perder el espacio de representación política por efectos de la presencia de la nueva fuerza.

En el marco de la implementación de los Acuerdos, los procesos de participación ciudadana y política, las expectativas de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales y comunitarias han estado dinamizadas por el interés de impulsar sus planes de vida y desarrollo, específicamente en torno a las Circunscripciones de Paz y a los PDET. Esas expectativas se han visto truncadas por sectores políticos tradicionales que consideran que el desarrollo de ambos escenarios sería capitalizados por las FARC y por eso su estrategia ha estado centrada en desbloquear dichas iniciativas, y en visibilizar que el proceso de implementación en su conjunto, involucra diversidad de poblaciones afectadas por el conflicto.

La narrativa hegemónica en este momento del proceso es el discurso emergente de la guerra, de la lucha por las posesiones, la venganza y la suntuosidad, que reivindica el patrimonialismo, el parroquialismo y la sumisión de las mayorías a un régimen de expectación y pasividad. "La trampa de la paz" es un término muy extendido y gene-

ralizado que se expande sobre algunos centros poblados y que se asocia con el despertar de un sentimiento de autodefensa en las comunidades.

La opción de reconciliación no logra posicionarse del todo en la opinión pública porque las industrias del entretenimiento y de la información, escenifican una gran lucha entorno a su legitimidad. En muchos frentes informativos regionales, configurados en torno al mensaje nacional de algunos medios de comunicación se manifiesta un bloque de cuestionamientos orientados a generar desentendimientos y a hacer de zonas grises y riesgos de la implementación de los Acuerdos, razones y justificaciones para desestimarlos en su globalidad.

El campo religioso y espiritual también es portador de debates que generan mensajes culturales contradictorios, respecto a la posibilidad de una salida política democrática. La relación entre religión y política cada vez se borra más y el contenido de mensajes poco reflexivos, genera tendencias poco pluralistas e intolerantes entre grupos de ciudadanos.

6.4 Sobre los Reincorporados y la Seguridad en las Comunidades de Zonas de Transición.

Un dato central que se recoge en la observación indica que la reincorporación de las FARC y el cese al fuego con el ELN ha generado disminución de los eventos de guerra entre fuerzas contendientes. También es importante reconocer que en los ETCR el arte y el deporte se presentan como posibilidades de reincorporación y reconciliación muy efectivas. No sucede así con otros ámbitos de confron-

tación con bandas criminales, grupos posdeja- ción y otros grupos insurgentes, que sobre todo pone a las poblaciones en riesgo de vulneración y en condi- ción de disponibilidad y cooptación para el ejer- cicio de la violencia.

El marco de la implementación de los Acuerdos se visibiliza como un proceso lento en su arquitectura institucional y de acuerdo a la percepción que tie- nen algunas organizaciones civiles y miembros de las FARC, el incumplimiento de los Acuerdos se ha evidenciado en las pocas acciones para garanti- zar una mejor calidad de vida para los miembros de las FARC y las comunidades de las zonas más afectadas. El riesgo más latente es el aumento del número de disidentes, que al no ver las garantías cumplidas deciden vincularse nuevamente a los grupos armados; se reportan cerca de 600 perso- nas en condición de disidentes que se encuentran realizando actos delictivos.

En algunas zonas se evidencia poco interés por parte de las comunidades en la implementación del Acuerdo y por el desarrollo de acciones pro- puestas a nivel local. La credibilidad, tanto en el Acuerdo, como en la legitimidad de actores impli- cados en este ejercicio es baja. El campesino no organizado desconoce aspectos de la implemen- tación que no sea el de sustitución de cultivos de uso ilícito.

La falta de garantías de seguridad de los reincor- porados y sus familias y la lentitud del proceso de reincorporación colectiva genera dispersión de los excombatientes de las FARC. En ese mismo sentido es crítico el limbo jurídico de los presos y el hecho de que las boletas de amnistiados no garantizan el libre tránsito de los excombatientes, produciendo retenciones preventivas permanentes.

En ese ambiente las inercias cotidianas de la gue- rra generan demandas de la población para que emerjan actores armados que “pongan orden”, asunto que potencia la tendencia a la renovación de autoritarismos y armamentismos. La desinfor- mación sobre los procesos de implementación ge- nera una cotidianidad apática, a la espera, una rutinización de la angustia y el temor en la vida lo- cal y regional que arraiga el escepticismo.

Las regiones con territorios de frontera, que están permeadas por los corredores de transición en lí- mites binacionales, son generadoras de una gran cantidad de empresas criminales que producen victimización en todo el territorio nacional. Crece el contrabando, la siembra de cultivos ilícitos, la in- dustria de producción de cocaína de distribución y comercialización de narcóticos.

En muchos territorios, protegidos por las poblacio- nes, los actores armados, las economías ilegales y las bandas criminales gozan de prestigio y son bien

recibidos. Hay sectores de las bandas criminales que han expresado su voluntad de someterse a la justicia y que hacen incidencia en las comunida- des para lograr ese propósito; en territorios como Norte de Santander y Urabá antioqueño el asunto comienza a ser apalabrado por liderazgos socia- les.

El rumor, la especulación, la desinformación ge- neran un ambiente de cizaña y desconfianza en- tre las comunidades, y de las comunidades con los agentes institucionales. A propósito de conflic- tos múltiples de apropiación y uso de los territorios, se han presentado enfrentamientos de la fuerza pública con población civil donde se evidencia ejercicio desmedido y letal de la fuerza por parte de las autoridades.

Los planes civiles de seguridad humana son ex- cepcionales y por lo tanto la capacidad de auto- rregulación y de prevención son limitadas, lo cual genera gran tensión, angustia y llamados deses- perados a regulaciones externas. Las estructuras armadas, tanto de grupos insurgentes, como de bandas criminales y grupos de seguridad privada ilegales, sostienen posiciones estratégicas en los territorios de transición y movilizan gran capaci- dad de afectación de vidas locales y regionales.

El reclutamiento de civiles, particularmente de menores de edad continúa aunque han disminu- do. El mayor número de reclutamientos a meno- res se da por parte de las disidencias de las FARC. Las comunidades, quizás exceptuando algunos grupos étnicos indígenas, no han desarrollado suficientes mecanismos de seguridad comunal y propia, lo cual les genera gran riesgo y vulnera- bilidad.

En algunas zonas los ETCR no logran ser un es- pacio de congregación comunitaria porque los pobladores temen entrar al sitio por posibles reta- liaciones de grupos posdeja- ción. En áreas donde mantienen control y dominio los grupos posdeja- ción, las amenazas y riesgos manifiestos se vienen radicalizando, afectando sobre todo a las muje- res y a la población menor de edad.

Respecto a las garantías para la convivencia ciudadana es posible reportar que avanza el desminado humanitario, pero se teme el rear- me de grupos de reincorporados, mientras cre- cen amenazas para líderes y organizaciones so- ciales y aumentan robos y presencia armada, sin que se logre establecer programas concer- tados de carácter operativo que brinden una respuesta institucional precisa.

Las FARC identifican la creación de Juntas de Acción Comunal en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, como posibi- lidad de reincorporación colectiva. Esta deci-



Buenavista - Meta 2017

si3n en algunos casos no es bien recibida por las comunidades aleda3as, pero en otros se asume con naturalidad como la incorporaci3n de un nuevo centro poblado a la ruralidad de los respectivos municipios. Esta situaci3n se da en medio de una decisi3n de los excombatientes de mantenerse unidos, pues los miembros de las FARC consideran que el proceso de reincorporaci3n colectiva es indispensable para la agenda pol3tica y fortalecimiento de sus militantes como ciudadanos; en ese contexto el proceso de las Zonas Veredales, ahora convertidas en Espacios Territoriales ha fluído en un clima de seguridad que ha contribuido a la relaci3n respetuosa entre los militares y los excombatientes.

En este periodo hay un reconocimiento de una nueva movilidad de grupos armados ilegales que buscan reposicionar su presencia donde las FARC han salido como combatientes y al aumento del fen3meno sicarial, creciendo especialmente amenazas para líderes y organizaciones que ha sido repetidamente denunciadas ante autoridades locales departamentales y nacionales sin que los resultados sean efectivos.

En algunos territorios las comunidades expresan que las FARC a3n tienen en su mentalidad que son autoridad, en especial los comandantes, quieren que todo se les consulte, quieren tener participaci3n econ3mica en las acciones del Estado pero tienen nula capacidad de negociaci3n. En su pensamiento ya no est3 la guerra pero a3n quedan actitudes de mando que ri3en con éticas ciudadanas.

6.5 Hacia un Estado de la Situaci3n. Tres Escenarios en Emergencia.

El balance realizado de este ejercicio de observaci3n ha permitido entender todo un escenario de conflictividad social, pol3tica, econ3mica, cultural y ambiental en el que emergen preguntas por las nuevas oportunidades de reconocimiento, inclusi3n y democratizaci3n. En los mismos sitios en donde el Estado solo ha llegado con fórmulas de control, las comunidades se han dispuesto a compartir sus saberes y sabores; especialmente aquellas que albergan un mont3n de procesos de poblamiento campesino, afro e indígena, y que buscan aportar a la generaci3n de Estado y no a su recibimiento pasivo.

Situados en el vértice de una primera etapa de implementaci3n de los Acuerdos, caracterizada por el hecho paradigmático de la dejaci3n de armas de las FARC y de su constituci3n en partido pol3tico, parece clave visualizar algunos rasgos y pautas de comportamiento en la actual coyuntura pol3tica en clave de las tendencias a las cuales es importante atender. El esbozo de los escenarios que a continuaci3n se presentan parte de recoger en una redacci3n breve, sensibilidades escuchadas en las conversaciones realizadas en los territorios, en clave de relevar luces, sombras y caminos; al sistematizar las pistas de esa interrogaci3n han devenido en un esbozo de escenarios a analizar hacia el futuro:

6.5.1 Escenario de inercia.

Es posible que la inercia de cooptación del Estado y de las prácticas mafiosas, corruptas y clientelares mantenga efectos en el corto y mediano plazo potenciando el todo vale, la máxima de que el que tiene dinero o armas manda. Así la tendencia es a cotidianizar el soborno y el constreñimiento; la victimización se transforma pero permanece, se juntan individualismo y gregarismo en el autoritarismo; las armas son una herramienta cotidiana, se fortalece el paradigma social del tramposo y el agresivo. Se vive entre la idealización negativa y/o positiva de los Acuerdos mientras se evidencian tensiones entre modos de vida suntuosos de minorías y las carencias materiales de las mayoría; la tendencia en los liderazgos es a que sean cooptados, no hay libertad real de elección política, se expande el rentismo y la baja productividad informalizada, y la justicia no opera como mecanismo de reparación y generación de equidad. La comunidad internacional en este hipotético escenario haría énfasis en presionar el cumplimiento de los acuerdos y en atender nuevos escenarios humanitarios que emergen en medio de las renovadas confrontaciones violentas.

6.5.2 Escenario de alternativas.

Se hace énfasis en que emerja lo cooperativo como alternativa de emprendimiento productivo, la generación de oportunidades con un sentido integral, la ampliación de capacidades en las comunidades más afectadas, la recuperación de pactos de respeto y cuidado de la vida y la naturaleza. Se impulsa la formación de nuevas ciudadanía populares, la cualificación de liderazgos alternativos, la construcción de comunidades resilientes a la violencia. Se posiciona la cualificación de las formas de observación, veeduría e incidencia en la construcción de la institucionalidad democrática. Se despliega la movilización política virtuosa en torno a posiciones proclives a la reforma y transformación institucional, primando la definición técnica política de una nueva matriz de gobernabilidad de los territorios. En este deseado escenario la Comunidad internacional actuaría como agente verificador, acompañante y generador de confianza; impulsando especialmente acciones de fortalecimiento de la sociedad civil y de la institucionalidad democrática con énfasis en lo local regional.

6.5.3 Escenario de rectificación.

Se dan dinámicas de reconocimiento de actores que hoy demandan interlocución; se establece un acuerdo posible y realizable para implementar los programas y reformas pactados dejando rutas claras, se determinan los tiempos, los recursos y los alcances de los procesos de reincorporación, de implementación territorial con sentido partici-

pativo e intercultural; se concreta la agenda de consolidación del cese al fuego con otros actores armados; se logra generar un plan global de implementación progresiva y se logra generar un entorno público y ciudadano favorable y comprensible del proceso, se logra que los sectores presentes en la disputa política reconozcan las reglas de juego y asuman comportamientos básicos de probidad y transparencia, trabajando sobre el acuerdo mínimo de la no agresión y de sacar las armas de la política. En este escenario posible la comunidad internacional, racionaliza su presencia, concentrándose en fortalecer capacidades democráticas y en fortalecer los aprendizajes del proceso.

6.6 Breve Síntesis de Aprendizajes y Recomendaciones.

Este momento histórico se convierte en una oportunidad de revertir las condiciones históricas de exclusión y marginalidad, desde la inventiva de las comunidades que se resisten a institucionalizarse sin ser previamente reconocidas, que se repiensen en los procesos de construcción local, de Estado y democracia. Para que la paz llegue es clave acompañar y potenciar la reconciliación, como un ejercicio de apego a los criterios de integración con justicia social que requiere poner en el centro de la discusión la reparación de las víctimas, la reincorporación de los ex combatientes de las FARC a la sociedad, y apostarle a un proceso de verdad histórica que transite de lo individual a lo colectivo y sobre todo, que pueda sembrar una nueva cultura política ciudadana de la convivencia. En ese horizonte identificamos un pendiente por avanzar; al centro está la necesidad de pensar colectivamente un país distinto, en este caso el de la reconciliación y el de una democracia renovada que se reconoce en su interculturalidad. Esto implica también la participación de todos los actores que participan de la vida de estos territorios. Se impone la regla sociopolítica de construir junto a las comunidades, nuevas formas de convivencia, ejerciendo el reconocimiento social de las víctimas y el papel histórico de su memoria, buscando la sostenibilidad y sustentabilidad de la relación de las comunidades con sus entornos social, político, económico y ambiental. De esta forma, son determinantes algunas condiciones básicas para buscar como sociedad el cumplimiento de los acuerdos y para caminar en un proceso democratizador que se articule en un plan único de implementación que integre todos los niveles y modalidades de corresponsabilidad institucional y ciudadana; en esa perspectiva se comparten sintéticamente algunas pistas:

1. Es clave asegurar y desarrollar una política integral de paz y reconciliación con soberanía y democracia en las fronteras binacionales que han involucrado el conflicto armado contemporáneo.



Filipinas - Arauca 2017

2. Es fundamental fortalecer la política de concentración de las armas de la nación en el Estado, que desarme progresivamente civiles y que ataque el comercio de armas y la militarización cotidiana que son la base de grandes riesgos en campos y ciudades.

3. Urge fortalecer la veeduría y seguimiento a los planes de implementación oficial, este requerimiento es fundamental pues son muchas las razones que conducen a una gran precariedad institucional que deben ser incididos por las ciudadanías.

4. Las estrategias de seguridad ciudadana requieren una presencia integral del Estado que interlocute con las comunidades, pues la construcción de seguridad humana y de mecanismos de autorregulación, es una apuesta de mediano plazo que merece una especial oportunidad de diseño participativo.

5. Urge en el corto plazo una pedagogía electoral clara y una estrategia para involucrar en el proceso de implementación a la ciudadanía rural y étnica, más allá de unos anuncios en tv y radio. Los ciudadanos de los sitios apartados muchas veces no saben qué es votar ni cómo se pueden incluir en la implementación, eso requiere pedagogías y procesos más amigables y dialogantes.

6. Urge recuperar las reformas a los sistemas de participación ciudadana y al electoral para generar transparencia, garantías a la oposición, salvaguardas al derecho a la protesta social y mecanismos para reconfigurar de acuerdo a las tipologías nacionales los delitos electorales.

7. Apremia que la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, sobre los crímenes a líderes sociales, se concrete en resultados de esclarecimiento de los hechos victimizantes en los territorios, identificando quiénes son los responsables a todo nivel, con la suficiente probidad y transparencia.

8. También es necesario que la Procuraduría General de la Nación preste sus servicios al seguimiento en la implementación de los Acuerdos, interpellando a los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones con relación a la falta o demora en la implementación.

9. Es fundamental un mayor énfasis en la operación de las instituciones nacionales, departamentales y locales, respecto a los derechos de los pueblos étnicos y de las comunidades campesinas como respuesta integral a la situación de violencia actual y como mecanismo de protección a la vida de las personas y comunidades.

10. En las reivindicaciones y proyecciones de las organizaciones sociales está el desafío de avanzar hacia la construcción de paz y la reintegración con enfoque comunitario, mediante el fortalecimiento de la organización y movilización social ciudadana y la construcción colectiva de visiones y vocaciones territoriales compartidas. Para avanzar en esa perspectiva se requiere una institucionalidad que se deje interpellar por los sujetos políticos y que se abra a la construcción de nuevos pactos de gobernabilidad democrática.

11. De igual forma es necesario fortalecer las agendas comunes compartidas que amparan y promueven el acceso a los derechos, desde la cualificación de las organizaciones territoriales, fortaleciendo visiones de inclusión territorial, especialmente los asociados a los temas de tierra, productividad, identidad cultural y educación.

12. Se recomienda fortalecer las políticas públicas de educación para la paz y de reconocimiento generacional; en función de acompañar y rodear a los niños, niñas y jóvenes de este país para el encuentro intergeneracional, como referente de la recuperación del sentido por la vida digna y compartida.

13. El reto del Estado en la tarea de garantizar la seguridad en las poblaciones de los corredores de transición observados es a juicio de los equipos regionales de observación el más importante, las situaciones arriba descritas generan temor, confusión y cierta resistencia frente a la implementación, teniendo en cuenta que la presencia estatal continúa siendo deficiente y además la fuerza pública no tiene aún protocolos de seguridad suficientemente conversados para estas comunidades afectadas por la violencia.

14. Se recomienda impulsar apuestas como la Guardia Campesina, Indígena y Cimarrona, y por el servicio militar ambiental y la policía ambiental rural como formas cívicas ciudadanas en las cuales o las armas o no existen o tienen una significación ligada al cuidado del territorio; buscando especialmente alternativas para la seguridad individual y colectiva de líderes y miembros de organizaciones de base, defensores de derechos humanos y la comunidad en general.

15. Es indispensable acompañar todos aquellos ejercicios de reconciliación, entre las comunidades; mediante ejercicios simbólicos y hechos concretos que permitan entender que hay diversas formas vida y que el logro más importante es preservarlas en coexistencia social. Dada la urgencia, la convivencia requiere una campaña nacional de gran convocatoria que parta de los escenarios familiares hacia los comunitarios y políticos, y que impulse a la ciudadanía a hacernos cargo del momento histórico que se vive en el país.

16. Es clave fortalecer los procesos de observación de realidad y de construcción de territorios de paz y reconciliación desde las comunidades, en el marco de los PDET, que permitan no solo reconocer los problemas y necesidades territoriales, sino aquellas oportunidades, intereses y alternativas, para hacer aportes a miradas y soluciones de mediano y largo plazo en las dimensiones del diseño territorial y la integración social.

17. Son tiempos de fortalecer redes que puedan permanecer en el tiempo y generar muchos más profesionales y líderes comprometidos con la realidad social del país, para lo cual se plantea como alternativa la conformación de diálogos multiactores, semilleros y/o observatorios de profesionales, organizaciones y líderes capaces de reconocer en el momento histórico la oportunidad de cambiar el país desde las regiones.

18. Es fundamental brindar las garantías al proceso de la Comisión de la Verdad para que todos los esfuerzos, encuentros y reencuentros de documentación de la memoria y de actuación institucional en clave de reparación y reconciliación, se desarrollen desde una herramienta de trabajo articulado y escalonado en su incidencia política y social.



SEMINARIO TERRITORIOS COMUNIDADES,
ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIUDADANÍA Y
POLÍTICA EN EL POSACUERDO
BOGOTÁ JULIO 2017



BIBLIOGRAFÍA

Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca (Agosto 14 de 2017). Radiografía integrantes de las FARC y familiares asesinados en lo corrido del 2017. Recuperado <https://acpa-cauca.com/2017/08/14/radiografia-integrantes-de-las-farc-y-familiares-asesinados-en-lo-corrido-del-2017/>

Betancourt E, Darío. (Primer semestre de 1991). Los cinco focos de la mafia colombiana (1968-1988). Elementos para una historia. Revista Folios Segunda Época, Número (2). Recuperado de <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/5333/4364> (Consultado noviembre 25 de 2017).

Bourdieu, P. (1985). Poder, Derecho y Clases Sociales. Bilbao, España: Desclée de Brouwer.

Berger, P y Lucman. (1968). La Construcción Social de la Realidad. Buenos Aires, Argentina: Amorroutous.

Caracol. (Octubre 21 de 2017). Incautan el laboratorio de coca más grande del Clan del golfo en el último año. Recuperado de: http://caracol.com.co/emisora/2017/10/21/medellin/1508609679_249944.html

Coleman, J. (1990). El Capital Social. Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital, *American Journal of Sociology*, 94, pp. 95-120.

Colombia 2020. (4 de julio de 2017). Las críticas a la Jurisdicción Especial de Paz. Recuperado de: <https://colombia2020.elespectador.com/jep/las-criticas-la-jurisdiccion-especial-de-paz> (Consultado: Noviembre 25 de 2017).

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. (2015). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Desde Abajo.

Corte Constitucional. 2017. Sentencia C-077/17. Recuperado de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-077-17.htm> (Consultado: Noviembre 10 de 2017).

Diario del Huila. (14 de noviembre de 2017). Esperamos que Colombia sancione a los corruptos: Jhon Milton Rodríguez. Recuperado: <https://www.diariodelhuila.com/esperamos-que-colombia-sancione-a-los-corruptos-jhon-milton-rodriguez> (Consultado: Noviembre 25 de 2017).

Duque Daza, J. (2015). Corrupción, organizaciones criminales y accountability. La apropiación de las regalías petroleras en los llanos orientales. Santiago de Cali, Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.

El Nuevo Día. (12 de octubre de 2017). Luis Mendieta llega a Ibagué para recoger firmas. Recuperado <http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/404696-luis-mendieta-llega-a-ibague-para-recoger-firmas> (Consultado noviembre 25 de 2017).

El Espectador. (20 de enero de 2017). "No somos narcotraficantes": cultivadores de coca. Recuperado <https://www.elespectador.com/noticias/politica/no-somos-narcotraficantes-cultivadores-de-coca-articulo-675705> (Consultado: Noviembre 1 de 2017).

El País (Agosto 31 de 2017) Abatido alias Gavilán, segundo al mando del Clan del Golfo. Recuperado <http://www.elpais.com.co/judicial/abatido-alias-gavilan-segundo-al-mando-del-clan-del-golfo.html> (Consultado: Noviembre 1 de 2017).

El Tiempo. (6 de octubre de 2017). Alta tensión en Tumaco tras ataque que dejó 8 muertos por lío cocalero. Recuperado <http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ataque-con-cilindro-en-tumaco-por-lío-de-erradicacion-de-coca-138356> (Consultado noviembre 25 de 2017).

Fuerzas Militares. (20 de noviembre). FF.MM. han realizado 147 operaciones contra la Minería Ilegal en todo el territorio nacional. <https://www.fuerzasmilitares.org/notas/colombia/fuerzas-militares/8094-contra-mineria-ilegal.html> Recuperado: (Consultado diciembre 1 de 2017).

Garay Salamanca, J. L. (dir). 2008. La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Bogotá, Colombia: Corporación Transparencia por Colombia.

García Villegas, M. y Revelo Rebolledo, J. E. (2010). Estado alterado, clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia. Bogotá, Colombia: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) y CINEP (Noviembre 12 de 2017) Panorama de violaciones al derecho a la

vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017. Recuperado de: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/10/PANORAMA-DE-VIOLACIONES.pdf>

Medellín, Pedro. (3 de junio de 2017). ¿Tanto bombo para eso? Revista Semana (1856), Recuperado <http://www.semana.com/opinion/articulo/gobierno-se-dejo-desbordar-por-la-negociacion-de-los-textos/527383> (Consultado: Noviembre 1 de 2017).

Mejía Quintana, O. (2010). Modelos alternativos de democracia deliberativa. Una aproximación al estado del arte. Recuperado <http://www.scielo.org.co/pdf/cohe/v7n12/v7n12a02.pdf> (Consultado: Noviembre 1 de 2017).

Mejía Quintana, O. y otros. (2017). Escenarios en el posacuerdo en Colombia. Elementos para el debate. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2017.

Negrete Barrera, Víctor. (16 de marzo de 2017). El lado oscuro de Cerro Matoso. Corporación Latinoamericana Sur. Recuperado <https://www.sur.org.co/el-lado-oscuro-de-cerro-matoso/?pdf=2521> (Consultado: Noviembre 1 de 2017).

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). (2017). Monitoreo de territorios afectados por los cultivos ilícitos 2016. Recuperado https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf (Consultado: agosto de 2017).

Presidencia de la República, (viernes 27 de enero de 2017). Listo plan para sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Recuperado <http://es.presidencia.gov.co/noticia/170127-Listo-plan-para-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-ilicitos> (Consultado: agosto de 2017).

RCN Radio. General (r) Luis Mendieta será candidato presidencial. (15 de septiembre de 2017). Recuperado <http://www.rcnradio.com/nacional/general-r-luis-mendieta-sera-candidato-presidencial/> (Consultado noviembre 25 de 2017).

Salas-Salazar, L.G. (2016). Conflicto armado y configuración territorial: elementos para la consolidación de la paz en Colombia. Bitácora (26). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Semana (Noviembre 12 de 2017) De donde sale tanta Coca. Recuperado <http://www.semana.com/nacion/articulo/400-toneladas-de-cocaina-la-mas-grande-incautacion-de-droga-este-ano/546892>

Wills Obregón, M.E. (2015). Los tres nudos de la guerra colombiana: un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada, y unas articulaciones perversas entre regiones y centro. En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones Desde Abajo.

GLOSARIO DE SIGLAS

ACA: Asociación Campesina de Arauca.

ACABA: Consejo Comunitario General del Baudo.

ACADESAN: Consejo Comunitario General del San Juan.

ACOMFLOPAC: Asociación de Campesinos de la Cordillera de Florencia, Montañita Paujil y Doncello.

ACSUCOR: Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.

ART: Agencia De Renovación del Territorio.

ASCAMCAT: Asociación Campesina del Catatumbo.

ASCATRAGUA: Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río Guayabero.

ASOCATRAGUA: Asociación de Campesinos Trabajadores de la Región del Guaviare.

ASOCATRARI: Asociación de campesinos trabajadores de la región del río Inírida.

ASCOBA: Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato.

ASOCASÁN: Asociación Campesina del Alto San Juan.

ASODECAS: Asociación de Campesinos del Alto Sinú.

ASOJER: La Asociación Juvenil y Estudiantil Regional.

ASOREWA: Asociación de cabildos indígenas Embera.

BACRIM: Bandas Criminales.

COCCAM: Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.

CAMIZBA: Cabildo Mayor Indígena De La Zona Del Bajo Atrato

COCOILLO: Consejo Comunitario Integral de Lloró

COCOMACIA: Consejo Comunitario Mayor de La Asociación Campesina Integral del Atrato

COCOMOPOCA: Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina del Alto Atrato.

CORDOSAC: Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá.

CPDH: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

CISCA: Comité Por la Integración social del Catatumbo

CRICH: Concejo Regional Indígena del Chocó

CSIVI: Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.

DOCH: Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia

ECOMÚN: Cooperativa para la reincorporación económica de los excombatientes de las FARC

ELN: Ejército de Liberación Nacional

Elenos: Referencia a miembros del Ejército de liberación Nacional (ELN)

EPL: Ejército Popular de Liberación

ETCR: Espacios Territoriales De Capacitación Y Reincorporación

FARC- EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo

FARC: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Fast track: es un mecanismo contemplado en el acto legislativo número 1 de 2016, que reduce el número de debates en el Congreso que se requieren para la aprobación de leyes y reformas constitucionales.

FEDEROREWA: Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó.

Frente: Unidad de la estructura militar de las FARC- EP con el que se identifica su presencia en los territorios.

JEP: Jurisdicción Especial para la Paz.

JAC: Junta de Acción Comunal.

MCP: Movimiento Por La Constituyente Popular.

MIA: Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo.

MEROS: Mesa De Organizaciones Sociales.

MOE: Misión de Observación Electoral.

OACP: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

OBAPO: Organización de Barrios Populares del Chocó.

OCABA: Consejo Comunitario del Bajo Atrato.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

OREWA: Asociación de Cabildos Indígenas Wounaan, Embera Dovidá, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó.

PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

PIC: Pequeñas Infraestructuras Comunitarias.

PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PTN: Punto de Transición y Normalización.

RRI: Reforma Rural Integra.

UAF: Unidad Agrícola Familiar.

Woundeko: Asociación de Indígenas Wounnan

ZVTN: Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

Zona: ZVNT.

ZIDRES: Zonas de interés de Desarrollo Rural.



Tendencias del Posacuerdo en Clave de Condiciones y Garantías Políticas y de Seguridad es el Quinto de una saga de informes de observación sobre los efectos tempranos en la democracia durante el proceso de dejación de armas por parte de las FARC durante el año 2017 en Colombia.

En el documento se presentan aprendizajes sobre las transformaciones territoriales, sociales y políticas que ha reportado la implementación de los Acuerdos; y se elabora una reconstrucción etnográfica de las voces de poblaciones, liderazgos, excombatientes y funcionarios públicos del nivel local, acerca de las principales luces y sombras de este proceso respecto a sus expectativas de paz y democracia. El informe está orientado a recoger insumos de memoria corta del histórico Acuerdo con las FARC posibilitando a los sectores sociales y a la institucionalidad democrática, visualizar panoramas, escenarios y retos de reconciliación y pluralismo en las agendas venideras.

Realizado por



Con el apoyo de

“Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Embajada de Suecia y Open Society Foundations. Las opiniones expresadas en este material no representan a ninguno de quienes financian esta publicación.”

”

